



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

11/25/18

**CONTRADICCIÓN DE TESIS 388/2018.
(AMPAROS EN REVISIÓN [REDACTED])**

OFICIO.- 6293. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

EN LOS AUTOS DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 388/2018, SE DICTÓ EL SIGUIENTE PROVEÍDO:

"Monterrey, Nuevo León, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTO lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, la documentación con números de folio electrónico 74211/2018, y 74221/2018, enviados a través del **Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (MINTERSCJN)**, mediante los cuales comunican el proveído de doce de noviembre del año en curso, por el que se admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis **388/2018**, firmado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del que se advierte, en lo que al caso interesa, que solicita la versión digitalizada del original o, en su caso, copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los **amparos en revisión [REDACTED]** del índice de este Tribunal Colegiado; y se informe si los criterios sustentados en los citados asuntos judiciales, se encuentran vigentes, o en el caso que se tengan por superados o abandonados, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, se deberán remitir versión digitalizada de las ejecutorias en las que se sustenten el nuevo criterio; lo anterior para estar en posibilidad de integrar el expediente respectivo, además de su envío a la cuenta de correo electrónico sentenciastccscjnssga@mail.scjn.gob.mx.

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo del País, remítasele la versión digitalizada del original o en su caso, de las copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los **amparos en revisión [REDACTED]** del índice de este órgano jurisdiccional a través de los medios solicitados; **e infórmeseles que los criterios ahí sustentados se encuentran vigentes**, sin omitir informar, que a partir de esa fecha no ha sido resuelto por este tribunal colegiado, otro asunto sobre los temas en cuestión, aunado a que, este órgano jurisdiccional cuenta con una nueva integración de su Pleno.

Cumplase.

Así lo acordó y firma el magistrado Jesús R. Sandoval Pinzón, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con la secretaria de Acuerdos Celia Luz Garza García, que da fe." RÚBRICAS.- LO QUE ME PERMITO COMUNICARLE PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES A QUE SE CONTRAE EL PRESENTE PROVEIDO INSERTO.- PROTESTO A USTED MI ATENTA CONSIDERACION.

Monterrey, Nuevo León a 26 de noviembre de 2018.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO
MONTERREY, NUEVO LEÓN

LA SECRETARIA DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

Celia Luz Garza García
LIC. CELIA LUZ GARZA GARCÍA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 708

AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO [REDACTED]

JUICIO DE AMPARO No. [REDACTED]

MATERIA: ADMINISTRATIVA.

RECURRENTES: MARIO ENRIQUE GUERRA
GARZA EN REPRESENTACIÓN DE [REDACTED]
[REDACTED]

MAGISTRADO PONENTE:
ROGELIO CEPEDA TREVIÑO

SECRETARIO:
LUIS ALBERTO MATA BALDERAS



Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, correspondiente al veinticuatro de agosto de dos
mil diecisiete.

V I S T O S; para resolver los autos del toca
número [REDACTED], formado con motivo del recurso de
revisión interpuesto por [REDACTED], en
representación de su madre [REDACTED], en
contra de la resolución constitucional de veintisiete de
septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el juez
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el
Estado, dentro del juicio de amparo indirecto número
[REDACTED] y.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo. [REDACTED]
[REDACTED], en representación de su madre



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

709

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

(fojas 83 a 86 del juicio de amparo Tomo I), el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, **aceptó la competencia declinada**, misma que registró bajo el número [REDACTED] de su índice, sin formar el incidente de suspensión, toda vez que los efectos del acto reclamado fueron materia de la suspensión de plano dictada por el juzgador declinante el doce de junio de dos mil quince, se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le corresponde.



DE LA FEDERACIÓN
PROLEGADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
Y, NUEVO LEÓN

En proveído de diez de julio de dos mil quince (foja 156), el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, agregó a los autos los escritos presentados el diez de julio siguiente, signados por el Director Médico, el Jefe de Servicio de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto y, Jefe de Seguridad, todos del Hospital [REDACTED], mediante los cuales interponen recurso de queja en contra del auto de tres de julio de dos mil quince.

Mediante proveído de quince de julio de dos mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 5969/2015 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dentro del recurso de queja [REDACTED] cuyo punto resolutivo a la letra dice:

ÚNICO.- Se ordena devolver los autos del presente recurso de queja a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, para los efectos precisados en el quinto considerando de este fallo.

Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 91485 signado por la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de veintiséis de agosto de dos mil quince, dentro del recurso de queja [REDACTED], cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:

PRIMERO: Es parcialmente fundado el recurso de queja.

SEGUNDO: Se ordena reponer el procedimiento, para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria.

PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRIBUNAL COLE
ADMINISTRATIVO DEL C
MONTERREY, N

Por auto de seis de octubre de dos mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, agregó a los autos los oficios 9631 y 9635 signado por la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante el cual remitió copia certificada de las resoluciones de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dentro de los recursos de queja [REDACTED] y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

[REDACTED] cuyos puntos resolutivos a la letra dicen, respectivamente:

PRIMERO: Se declara infundado el recurso de queja.

SEGUNDO: Se confirma el auto recurrido, por el que se admite la demanda de amparo promovida por [REDACTED] en representación de [REDACTED] en contra de los actos y autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.



LA FEDERACIÓN
GIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Posteriormente por auto de siete de octubre de dos mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 9633 signado por la Secretaria de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dentro del recurso de queja [REDACTED], cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:

PRIMERO: Se declara infundado el recurso de queja.

SEGUNDO: Se confirma el auto recurrido, por el que se admite la demanda de amparo promovida por [REDACTED] en representación de [REDACTED] en contra de los actos y autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

Mediante proveído de ocho de octubre de dos mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 10187, signado por el actuario Judicial adscrito a este tribunal, el cual comunicó el auto de cinco de octubre del mismo año, el cual determinó declarar fundada la recusación de causa.

Por lo que en cumplimiento a lo anterior, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, remitió los autos a la Oficialía de Partes Común, para que realizara el turno correspondiente del asunto en comento.



En proveído de diez de noviembre de dos mil quince, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, tuvo por recibido el oficio 69187, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, en el cual remitió los autos del juicio de amparo [REDACTED], mismo que registró bajo el número [REDACTED]

PODER JUDICIAL DE
PRIMER TRICENIO DE COLE
ADMINISTRATIVO DEL C
MONTERREY, NL

Por auto de dos de diciembre de dos mil quince, el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 79366, signado por el actuario Judicial adscrito a este Tribunal, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución de cinco de noviembre de dos mil quince, dentro del recurso de queja [REDACTED], cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

Amparo en Revisión No [REDACTED]

PRIMERO: Se declara fundado el presente recurso de queja.

SEGUNDO: Se revoca el auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, dictado por el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, dentro del juicio de amparo número [REDACTED] que desechó la prueba testimonial a cargo de [REDACTED] para los efectos precisados en esta ejecutoria.



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
CIRCUITO DE NUEVO LEÓN

Posteriormente, en veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, emitió

la resolución constitucional, en el que determinó sobreseer el juicio de garantías.

ÚNICO. Se **sobresee** en el presente juicio de amparo [REDACTED] promovido por [REDACTED], en representación de su madre [REDACTED] respecto de los actos que reclama de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en la presente resolución constitucional.

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme, [REDACTED], en representación de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], interpuso el presente recurso de revisión, el cual lo **admitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito**, registrándolo bajo el número [REDACTED], y por auto de catorce de octubre del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho recurso, por lo que ordenó remitir los autos a este órgano jurisdiccional.

Posteriormente, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (fojas 120 a 127), este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, aceptó la competencia planteada y admitió el recurso de revisión interpuesto por [REDACTED], en representación de [REDACTED], se formó el toca [REDACTED], se dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde, el veinticuatro de octubre siguiente (foja 131), quien no



formuló pedimento legal.

CUARTO. Turno. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (foja 140), se ordenó **turnar** los autos al Magistrado Antonio Ceja Ochoa, para la formulación del proyecto de resolución, en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo en vigor.

Por otro lado, se hace constar que el presente asunto se listó por primera vez para verse en sesión del día siete de diciembre de dos mil dieciséis, mismo que fue aplazado conforme a las observaciones del Pleno.



EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE JUSTICIA
QUINTO CIRCUITO
NUEVO LÉON

En sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 239 a 332), se acordó aplazar el presente asunto, conforme al Acuerdo 9/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, se ordenó formular consulta.

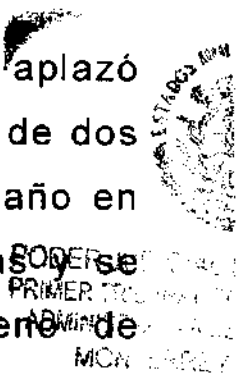
Consecuentemente, el treinta de enero de dos mil diecisiete (foja 459), mediante oficio 925/2017 signado por los magistrados integrantes de este Órgano Jurisdiccional se acordó formular opinión consultiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer si el planteamiento contenido en el presente expediente, se ubica o no en el supuesto de aplazamiento ordenado en el Acuerdo General Plenario 9/2016.

Posteriormente, el ocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 461 y 462), se tuvo por recibido el oficio SGA/MFEN/432/2017 signado por el secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual comunicó que conforme al Acuerdo

General Plenario 9/2012 concluyó que el presente asunto no se encontró en los supuestos del Acuerdo referido.

QUINTO. Alegatos. En veintidós y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a [REDACTED] abogado autorizado y en representación de la quejosa [REDACTED], formulando los alegatos de su intención, así como el veinticuatro de mayo siguiente, formulando alegatos verbales.

SEXTO. Aplazamiento. Este asunto se aplazó en sesiones de fechas siete, catorce de diciembre de dos mil dieciséis, catorce de junio y cinco de julio del año en curso, por observaciones realizadas en las mismas y se listó nuevamente para verse en sesión del Pleno de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.



CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en relación con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 37, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conforme con los acuerdos generales números 84/2000 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil y quince de febrero de dos mil trece, respectivamente, así como el acuerdo 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el



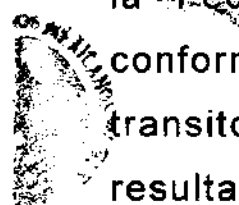
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-55

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de dos mil trece, ya que se interpuso en contra de una resolución constitucional dictada por un juez de Distrito.

SEGUNDO. Normatividad de la materia aplicable. Dado que la presentación de la demanda de amparo se realizó el **doce de junio de dos mil quince**, esto es, con **posterioridad** a la entrada en vigor de la presente Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de conformidad con lo que establece el artículo primero transitorio de la misma, para efectos de esta ejecutoria resulta aplicable dicho ordenamiento.



SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
SECRETARÍA DE LA FISCALÍA

TERCERO. Oportunidad del recurso interpuesto. El recurso de revisión se interpuso dentro del término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, en virtud de que la resolución recurrida fue notificada el cinco de octubre de dos mil dieciséis (según constancia que obra a foja un mil quinientos cuarenta y siete Tomo III del juicio de amparo); descontándose el día en que surtió efectos la notificación que lo fue el seis de octubre por lo que el término para que empezara a correr la notificación lo fue del siete de octubre al veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Luego, si el recurso de revisión se presentó el cinco de octubre del año en curso, resulta inconcuso que fue interpuesto dentro del término legal correspondiente al haberse hecho el último día del término legal correspondiente.

CUARTO. Digitalización de la resolución

recurrida. La resolución recurrida se apoyó, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados.

Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia.

Soporta este proceder la jurisprudencia número P./J. 40/2000 y la tesis número P. VI/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomos XI y XIX, Abril de 2000 y Abril de 2004, páginas 32 y 255, correspondientemente, cuyo rubros y textos son:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo "

"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

FORMA 55



AL SEÑOR JUEFE DE LA FEDERACIÓN
COLEGIO EN MATERIA
PRIMER CIRCUITO
EY, NUEVO LEÓN

DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudir a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.

En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que lo reclamado en la presente instancia consiste en:

- a. La privación ilegal de la libertad.
- b. Malos tratos que han ocasionado lesiones
- c. Incomunicación al limitarse la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares
- d. Tortura física y psicológica.

TERCERO. Negativa de los actos reclamados. El Director Médico, el Jefe de Seguridad, y la Jefa de Servicios de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos, pertenecientes al [REDACTED], al rendir el informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, consistentes en la

privación ilegal de la libertad, y tortura física y psicológica, suscitados en contra de [REDACTED] con motivo del internamiento de ésta en el referido nosocomio.

En relación con lo anterior, una vez analizados los elementos probatorios que obran en autos, este juzgado considera que la parte quejosa no aportó elemento de prueba con el que desvirtúe la negativa de las autoridades responsables.

Primeramente conviene establecer que la parte quejosa no precisó de forma detallada en el escrito de demanda, cuáles son las conductas de las autoridades responsables, que considera se equiparan a una privación ilegal de libertad; asimismo, fue omisa en establecer, de forma pormenorizada, de qué manera las responsables han ocasionado en contra de la directamente quejosa tortura física y psicológica. no obstante que mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil quince, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ordenó prevenirla para tal efecto.

Ahora bien, con relación a la **privación ilegal de la libertad**, las responsables argumentaron en sus informes que no es cierto que la paciente [REDACTED] se encuentre privada de la libertad o retenida en dicho nosocomio sin su consentimiento o el de sus familiares, pues refieren que ésta se encuentra internada en el hospital con la autorización de su familia, en específico de su hermano [REDACTED] quien firmó el contrato de prestación de servicios hospitalarios; que la permanencia de la paciente en el hospital no es a consecuencia de una retención sin su consentimiento y sin el derecho legal, y que en el momento



en que su familia o ella misma decidan, podrá egresar del hospital

Por su parte, el representante de la directamente quejosa, no ofreció elementos de prueba con los que desvirtúe la negativa de las autoridades responsables, ya que únicamente ofreció las pruebas documentales que acompañó al escrito de demanda, y las exhibidas durante el trámite del juicio, mediante escritos presentados el dos y veinte de octubre de dos mil quince, y el veinte de abril de dos mil dieciséis, las cuales consisten en las siguientes:

- a) Copia simple del ensayo publicado en la revista del Instituto de la Judicatura Federal, denominado "El juicio de amparo frente a particulares? El derecho a la salud contra médicos y hospitales privados".
- b) Copia simple de la denuncia de hechos presentada por [REDACTED], ante el Centro de Orientación y Denuncia de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
- c) Copia simple del dictamen médico emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
- d) Fotografías.
- e) Copia certificada del expediente clínico de Martha [REDACTED]
- f) Copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio de amparo [REDACTED] del índice de este juzgado.
- g) Informe médico del estado de salud que guardaba la quejosa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al dieciocho de septiembre de dos mil quince.
- h) Informe solicitado ante diversas autoridades pertenecientes a la Secretaría de Salud.

DE LA FEDERACIÓN
LEGISLACIÓN MATERIA
LO QUE CONCIERNE
AL ESTADO DE LEÓN

Las anteriores probanzas son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, pues con las mismas únicamente se acredita el estado de salud de la quejosa [REDACTED] que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió un dictamen médico en el que hizo constar la incapacidad de la referida quejosa, que existe una denuncia presentada por [REDACTED] hermano de la directamente quejosa, ante la autoridad correspondiente. Además, de la información solicitada por el representante legal de la quejosa a las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado, se advierte que ésta guarda relación con el tema de prevención y control de infecciones nosocomiales, y que versa sobre el cumplimiento efectuado por dichas autoridades a la medida precautoria dictada dentro del expediente [REDACTED], que se tramita ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por ende, con dichas documentales la parte quejosa no desvirtúa la negativa de las autoridades responsables.

Además el representante legal de la quejosa no expone en el escrito de demanda si ha intentado retirar a ésta de las instalaciones del hospital [REDACTED] y si ello ha sido impedido por parte de las autoridades responsables, menos aún, ofreció pruebas con las que acredite dicha circunstancia.

Por el contrario, las autoridades responsables anexaron a su informe justificado, copia certificada del contrato de prestación de servicios hospitalarios, celebrado por el referido nosocomio con [REDACTED] hermano de la directamente quejosa, al que se otorga valor probatorio pleno





en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, documental con la cual queda patente que la quejosa no se encuentra privada de la libertad, y que ésta fue internada en dicho nosocomio por voluntad de sus familiares.

Por ende, no existen pruebas en autos con las que se demuestre que las autoridades médicas han mantenido privada ilegalmente de la libertad a la quejosa o retenida en dicho nosocomio sin su consentimiento.



DE LA FEDERACION
LEGADO EN MATERIA
EL CANTO CIRCUITO
NUEVO LEON

Por otra parte, de igual manera las autoridades responsables negaron estar efectuando en contra de la quejosa, actos de tortura física y psicológica, sin que con las pruebas aportadas por la parte quejosa, relatadas en párrafos que anteceden, se desvirtúe dicha negativa.

A fin de abundar en lo anterior, es importante establecer en principio el concepto de tortura, a efecto de una mejor comprensión del asunto a tratar.

Sobre el tema, el diccionario de derecho de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, en la página 2201 define como "tortura" lo siguiente:

"Grave dolor físico o psicológico infringido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo."

Asimismo, el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, señala lo siguiente:

"Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o

sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Por último, la **Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes**, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, suscrita por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, autorizado el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cinco, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de mil novecientos ochenta y seis, así como la **Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura**, adoptada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, autorizada el diez de febrero de mil novecientos ochenta seis, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, establecen, respectivamente lo siguiente:

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

"Artículo 1

1. A los efectos de la Presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija

PODER JUDICIAL
PRIMER JUEZ
ADMINISTRATIVO
MEXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

"Artículo 2

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencias de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.

De lo anterior, se advierte que el acto de **tortura** subyace en una **intención** de la autoridad con miras a obtener en forma indebida una conducta positiva o negativa, o bien una omisión del gobernado que puede resultar atentatoria de sus derechos, por el cual se inflija dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales.

Por tanto, debe entenderse que todo acto de autoridad **dirigido con la intención** de ocasionar un dolor o sufrimiento físico o mental, será considerado como tortura o tormento.

Lo anterior, también ha sido establecido en la tesis 1a. LV/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1425 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Época, Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s) Constitucional, Penal, de rubro y texto siguientes:

"TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora, prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas intencionalmente; y iii) tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona."

En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen.



La Ley de la Materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder.

No obstante lo anterior, la solicitante de amparo no ofreció prueba alguna suficiente para acreditar la existencia de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, consistentes en **tortura física y psicológica**.

per lo que, no se advierte ni aun de manera presuntiva la **intención de las responsables de ocasionarle un dolor o sufrimiento físico o mental en perjuicio de [REDACTED]**

[REDACTED] con motivo de su internamiento en el [REDACTED]

En razón de ello, toda vez que la parte quejosa no ofertó prueba alguna que desvirtúe tal negativa; en consecuencia, lo procedente es **sobreseer** en el juicio de amparo por los actos reprochados a las autoridades, consistentes en la **privación ilegal de la libertad, y tortura física y psicológica**, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 310 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1995, Tomo VI, página 209, y que versa:

"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."

CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Director Médico, el Jefe de Seguridad, y la Jefa de Servicios de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos, pertenecientes al [REDACTED], al rendir el informe justificado manifestaron que **son ciertos los actos reclamados, consistentes en malos tratos que han ocasionado lesiones, así como incomunicación al limitar la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares** suscitados en contra de [REDACTED], con motivo de su internamiento de ésta en el referido nosocomio.

No obstante lo anterior, las responsables realizan manifestaciones de las que se advierte la existencia de dichos actos, pues respecto a los malos tratos que han ocasionado lesiones, expusieron lo siguiente:

"Analizando las condiciones médicas de la paciente [REDACTED] S. se puede deducir claramente que las supuestas lesiones que presenta, son consecuencia de las complicaciones médicas no obstante el quejoso pretende atribuirlos a la omisión de brindar servicios de salud privada de calidad y ha (sic) actos de malos tratos, incomunicación, tortura física y psicológica.

"Si bien las 'lesiones' de la paciente [REDACTED] son consecuencia de su crítico estado de salud desde hace meses que es ulceraciones y resequedad en la piel, y no a la supuesta privación ilegal de la libertad, malos tratos, incomunicación, tortura física y psicológica."

De lo anterior, se advierte que las responsables reconocen que la quejosa sí presenta lesiones, lo que incluso



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE JUSTICIA



se robustece con el desahogo de la prueba pericial que ofrecieron las propias autoridades.

Además, en relación con el acto consistente en la **incomunicación al limitar la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares**, las autoridades mencionaron lo siguiente:

"En un sin número de ocasiones [REDACTED] ha acudido a visitar a la paciente fuera del horario establecido (de 10:00 a 11:00 horas, de 18:00 a 19:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas), por lo que al solicitarle que respete el horario establecido, se molesta e ingresa sin autorización al área de cuidados intensivos.

Dicho horario no limita las visitas de familiares, sino resguarda el área que brinda atención a pacientes críticos y minimiza los riesgos que ponen en peligro su vida.

De la transcripción anterior, se advierte que las responsables reconocen que han impedido al representante especial de la quejosa, visitarla fuera del horario establecido en el reglamento interno, lo cual contiene una afirmación por parte de las responsables.

En consecuencia, toda vez que las responsables expusieron razones o circunstancias de las que se desprende que sí existen los actos reclamados consistentes en **malos tratos que han ocasionado lesiones e incomunicación al limitar la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares**, se tienen por ciertos los mismos.

Se cita por aplicación al caso, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, de rubro y texto siguientes:

"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.

QUINTO. Causas de improcedencia. Con apoyo en los preceptos 61 y 62 de la ley de la materia previstos en el examen del fondo de la controversia constitucional planteada, es de oficio el análisis de la procedencia de la acción, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

En el caso, se considera que respecto de los actos reclamados, consistentes en malos tratos que han ocasionado lesiones e incomunicación al limitar la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77, de la Ley de Amparo, dado que en el supuesto de otorgarse la protección constitucional, no se podrían concretar los efectos de la concesión, al no ser factible restituir a la agraviada en el goce de los derechos fundamentales violados, como se verá a continuación.

Los preceptos antes mencionados disponen lo siguiente:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

FORMA A-35

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente.

(...)

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley".

"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (...)"



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
CIRCUITO
REY, MORELOS

Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo: el segundo establece los efectos de una sentencia protectora, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o negativo.

Es decir, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, cuando se controvierten actos de carácter positivo, el efecto de la concesión de amparo será el de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de que se efectuara la violación cometida.

Mientras que de conformidad con la fracción II de dicho precepto, tratándose de actos de carácter negativo o que impliquen una omisión, el efecto de la concesión de amparo

17

será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

Además, de lo anterior se puede obtener que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados.

Por ende, siempre que exista un agravio personal y directo respecto al promovente del juicio de garantías, el efecto de la sentencia amparadora será de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, cuando subsistiendo el acto reclamado sea jurídica y materialmente posible, por lo que, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido.

En ese sentido, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que el quejoso estima violada en su perjuicio.

Sirven de apoyo a lo que antecede, los siguientes criterios

La tesis P/J. 90/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI.

ESTADO DE GUATEMALA

PODER JUDICIAL
JEFATURA DE LA FISCALIA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

Diciembre de 1997. Materia(s): Común de rubro y texto siguiente:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: **"SENTENCIAS DE AMPARO - El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.", y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija".**



DE LA FEDERACIÓN
LEGADO EN MATERIA
EL CÍRCULO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

La tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/6 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2895 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, Enero de 2014, tomo IV, de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo regula los efectos de la concesión del amparo, distinguiendo entre los actos reclamados de carácter positivo y negativo. Cuando sean de carácter positivo, el efecto es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que implica que la autoridad responsable deje insubsistente su acto que fue declarado inconstitucional. Cuando se trate de un acto de carácter negativo o que implique una omisión, el

efecto será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que este exija. Sin embargo, cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la autoridad judicial siempre deberá dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique”

Ahora bien, como antecedentes de los actos reclamados se tiene que la directamente quejosa ingresó al hospital [REDACTED], el tres de marzo de dos mil quince, con diagnóstico médico de desnutrición, úlceras por presión, urosepsis e insuficiencia renal crónica, y que a la fecha de presentación de la demanda, ésta se encontraba internada en el área de cuidados intensivos; lo que se advierte del expediente clínico que remitieron las autoridades responsables

PODER
PRIMER
ADMIN
2015

Además, como se estableció anteriormente, el representante de la directamente quejosa, relató en el escrito de demanda, que el día doce de junio de dos mil quince, al estar él y su tío en el referido hospital, diversos elementos de seguridad les indicaron que por órdenes del director médico y del jefe de seguridad, no podían entrar a ver a la referida [REDACTED] y que tenían que retirarse de dicho lugar

Asimismo, [REDACTED], señala que su madre [REDACTED], ha sido víctima de malos tratos que le han ocasionado lesiones; también, se duele que las responsables la mantienen incomunicada, al limitarle la posibilidad de que sea visitada por sus familiares.



Ahora bien, se afirma que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77 de la propia ley, interpretado en sentido contrario, toda vez que, aun cuando se estimaran vulnerados los derechos fundamentales de la quejosa con motivo de los actos reclamados que consisten en los malos tratos e incomunicación al limitarle la posibilidad de que sea visitada por sus familiares en el [REDACTED], no se podría restituir a la promovente en el goce de los mismos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JEFATURA DE LA SECCIÓN DE AMPARO EN REVISIÓN
MATERIA
MARTÍN GARCÍA SANTOS
REY, NOVIEMBRE

Lo anterior, toda vez que mediante oficio presentado el veintitrés de septiembre de dos mil quince, el Director Médico del [REDACTED] señalado como responsable, informó que el diecinueve de septiembre del año mencionado la paciente Martín García Santos, egresó de dicho nosocomio por decisión de su médico tratante y de sus familiares, para ser trasladada al [REDACTED] lo que acreditó con las constancias médicas que anexó a dicho oficio, asimismo, obra en autos informe médico que remitió dicha autoridad mediante escrito presentado en este juzgado el diecisiete de noviembre de dos mil quince, del cual se advierte el egreso de la quejosa del referido hospital.

Por ende, si a la fecha la quejosa ya no se encuentra internada en el hospital señalado como responsable, por haber sido trasladada a diverso nosocomio, aun de declararse inconstitucionales los actos reclamados antes referidos, existiría imposibilidad jurídica de que se produjeran los efectos restitutorios de la sentencia concesoria que en su caso se dictara.

Lo anterior se considera así, pues al haber egresado la quejosa del referido nosocomio y ser trasladada a uno diverso, sería jurídicamente imposible que las responsables, en cumplimiento a una sentencia protectora de amparo, permitieran a la impetrante ser visitada por sus familiares en las instalaciones del referido [REDACTED]

[REDACTED] pues como se dijo, ésta egresó de dicha institución hospitalaria por determinación de sus propios familiares

De igual manera, es evidente que sería imposible que las responsables, en cumplimiento a una sentencia concesoria de amparo, cesaran los malos tratos y restauraran el derecho a la salud dentro del hospital, pues al haber sido trasladada a uno diverso, como se advierte de las documentales que obran en autos, resulta evidente que la atención médica de la quejosa ahora se encuentra a cargo de diversa institución hospitalaria a la señalada como responsable.

No se pasa por alto la existencia de las lesiones de la impetrante, así como que durante la substanciación del juicio de amparo su representante presentó diversos escritos en los que adujo negligencia médica por parte de las autoridades hospitalarias, pues informó que derivado de tales actos, la quejosa presentó un daño renal crónico que la condiciona a hemodilizar tres días por semana, por virtud de la infección de la colostomía mal tratada; así como también, una úlcera en el talón derecho, y una cicatriz derivada de la ulceración en su rostro.

Sin embargo, ese aspecto no se podría reparar en este juicio de amparo jurídicamente hablando, pues este órgano jurisdiccional considera que el juicio de amparo no es la vía para reclamar la responsabilidad civil derivada de la negligencia médica por parte de alguna sociedad privada que



preste servicios médicos, como en el caso de las autoridades señaladas como responsables; por ende, quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para hacer valer la vía conducente, si así lo desea.

Al respecto, se cita de manera ilustrativa la tesis 1a CLXXVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 809, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2006244, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Civil, de rubro y texto siguientes:

"NEGLIGENCIA MÉDICA. OBJETIVOS Y FINES DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL. Mediante esta vía no es posible demandar a ninguna entidad o dependencia pública federal, ya que para este fin existe el procedimiento administrativo regulado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Lo anterior se robustece si se considera que el artículo 1927 del Código Civil Federal fue derogado al momento de expedirse la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. No obstante, mediante el juicio ordinario civil es posible demandar al médico en lo particular y/o a una sociedad privada que preste servicios médicos. Dicha responsabilidad tiene como base el daño producido a los pacientes, que podría dar pie a una responsabilidad de índole subjetiva, en la que es necesario que se demuestre la culpa o negligencia del médico responsable "

De igual manera, se cita por analogía, la tesis 1a CXXXIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 496 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2001474, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, de rubro y texto siguientes:

"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA VÍA IDÓNEA PARA DEMANDAR DEL ESTADO LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS

**DERIVADOS DE ACTOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA
ES LA ADMINISTRATIVA.**

Respecto a la vía procesalmente idónea para ejercer el derecho a reclamar la reparación de los daños causados por el Estado, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deja un amplio margen al legislador para diseñar el procedimiento a través del cual pueda hacerse efectivo el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. En el ámbito federal, el legislador optó por configurar en la vía administrativa la reparación de los daños causados por una actividad administrativa irregular, a través del procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Así, en tanto la actividad administrativa irregular del Estado comprende la prestación deficiente de los servicios de salud, es la vía administrativa la idónea para demandar del Estado la reparación de dichos daños."

PODER
PRIMER
ADMIN

En consecuencia, es indudable que los actos reclamados no pueden ser objeto de análisis en cuanto al fondo, porque si se concluyera que son inconstitucionales, se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce de la garantía violada y ningún efecto tendría la respectiva sentencia concesoria que llegara a dictarse.

En ese sentido, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77 de la propia ley interpretado en sentido contrario, lo que conduce a sobreseer el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.



QUINTO. Digitalización de Agravios. Como agravio se expuso el siguiente:

PRIMERO. Falta de apreciación y consideración del elenco probatorio ofertado por la quejosa para la acreditación de los actos reclamados.

De las constancias de autos se advierte con claridad que la quejosa presentó distintos medios de prueba que acreditaban en su totalidad los actos reclamados materia del presente juicio de amparo, que son: 1. Privación ilegal de la libertad. 2. Malos tratos. 3. Incomunicación y 4. Tortura física y psicológica.

En efecto, de diversas probanzas consistentes en documentales privadas se acreditó con meridiana claridad la existencia de dicha actividad irregular por parte de la [REDACTED], mismas que han sido soslayadas por el Juez de Distrito, puesto que, si bien es cierto dichos medios de prueba por su propia naturaleza son medios de convicción incompletos, pues no alcanzan el grado de prueba plena en tanto su contenido no puede tener por verídico, pues éste únicamente es imputable a su autor, luego entonces, los mismos deben ser perfeccionados mediante su relación con otros medios con el objeto de generar convicción sobre el hecho a demostrar.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia siguiente:

"DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el carácter de pruebas imperfectas de los documentos privados, que pueden ser

perfeccionados entre otros medios a través del reconocimiento expreso del autor del documento, o por medio de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los extremos planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 335, los documentos privados presentados en juicio como prueba y no objetados por la parte contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto que se les otorgue un valor indicario únicamente cuando no sean reconocidos, expreso o tácitamente, ni su autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 402 del mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión por lo que, independientemente de que la prueba documental privada se haya perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y de su decisión".



PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVO DEL
MONTERREY,

Lo anterior significa que, en un sistema de valoración mixta como el aplicable, las pruebas documentales privadas tendrán valor probatorio, cuando sean relacionados con otros medios de prueba a partir de los cuales se logre demostrar la veracidad de su contenido, dejando a cargo del juzgador el alcance y valor probatorio de la documental.

A la luz de lo antes expuesto, se tiene que el Juez de Distrito infringió las reglas de la lógica y los principios de valoración de pruebas en el estudio que realizó para resolver la litis, pues a juicio del suscrito, la quejosa sí cumplió con la carga probatoria mínima inherente, ya que los medios de prueba que fueron ofrecidos en el expediente que nos ocupa, son suficientes para demostrar la existencia del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, los actos de tortura física y psicológica a la quejosa, pues con las mismas se logra demostrar el nexo causal entre los actos y

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nueve Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 11.



[Firma]

omisiones por las autoridades responsables y el daño ocasionado tanto en la integridad física, psicológica y patrimonio de la quejosa.

Asimismo, los medios de prueba ofrecidos cumplen con la carga probatoria mínima, a efecto de demostrar los malos tratos que han ocasionado lesiones e incomunicación al limitar la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares, ya que dichos medios de convicción se perfeccionan mediante el informe justificado de las autoridades responsables en las que expusieron razones o circunstancias de las que se desprende que si existen los actos reclamados y por lo tanto se tuvieron por ciertos los mismos, de forma tal que se tiene evidencia que uno existe como consecuencia por efecto directo del otro y no por alguna otra razón o supuesto diverso.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL JUEZ
EDUARDO
CIRCUITO
MEXICO

Por consiguiente, las pruebas que fueron analizadas generan una presunción plena que sirve como puente de unión entre los dos conceptos, los actos y omisiones de las autoridades responsables y el daño tanto en la integridad física, psicológica y patrimonio de la quejosa. Esto es, que los diversos actos y omisiones realizados por las autoridades responsables son un elemento que *sine qua non*, no hubiera existido el acto de molestia que la quejosa no tenía por qué soportar.

En estos términos se evidencia la omisión por parte del juzgador de considerar el elenco probatorio exhibido y obrante en autos a fin de llevar a cabo una operación lógica que lo llevara a otorgar un fallo lo más protector de derechos posible.

SEGUNDO. Indebida restitución en el pleno goce de los derechos fundamentales de la quejosa.

En primer término, lo expuesto por el Juez de Distrito implica un desconocimiento total respecto del contenido del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece lo siguiente:

Artículo 63

1. Cuando decian que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

(...)

De acuerdo a la transcripción antes señalada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que cuando se resuelva que un acto de autoridad ocasionó una violación de un derecho o libertad se deberá de garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, así como disponer la reparación de las consecuencias de la vulneración de dichos derechos y el pago a una justa indemnización a dicha parte.

Cada una de las cláusulas antes descritas están dirigidas a resarcir a las víctimas, no solo en el goce de sus derechos, sino también a modificar las consecuencias producidas por la violación, ya sea en la víctima o a través de cualquier medida o situación que provocó la afectación, es decir, una reparación integral del daño. En este sentido, el derecho de las víctimas a exigir una reparación integral del daño, surge por ende del deber del Estado de contar con mecanismos adecuados y efectivos para garantizar el acceso a dicha reparación integral.



El concepto de reparación integral, que se desprende del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende la acreditación de daños en la esfera materia e inmaterial, al mismo tiempo que el otorgamiento de medidas como:

- a) la investigación de los hechos;
- b) la restitución de derechos, bienes y libertades;
- c) la rehabilitación física, psicológica o social;
- d) la satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas;
- e) las garantías de no repetición de las violaciones; y
- f) la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial

Cuestión que, en el contexto constitucional actual, ha sido considerado de cumplimiento obligatorio desde el pasado 6 de junio de 2011, fecha en la que se publicó la reforma constitucional en materia de derechos humanos que reconoce los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, además de garantizar su interpretación a la luz de dichos instrumentos y de favorecer la mayor protección a la persona. Asimismo, establece, entre otras importantes modificaciones, que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos fundamentales deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos y dispone

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JALISCO
VALDEQUILITO CIRCUITO
REY, NUEVO LEÓN

que el Estado debiera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales en los términos que establezca la ley.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe atender no solo al interés en resolver la violación a derechos humanos que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación que si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más allá de este.”

Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de los Tribunales Colegiados de Circuito Decima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2254



Desde esta perspectiva, resulta claro que el Juez de Distrito, al momento de decretar el sobreseimiento del juicio de amparo de origen incumple con los estándares mínimos para proteger el derecho que tiene la quejosa a una reparación integral del daño, de conformidad con el criterio que se transcribe a continuación:

"DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE. El derecho a una reparación integral o justa indemnización es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los gobernados, y no debe restringirse en forma innecesaria. Atendiendo a los criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado. El derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del daño, a las víctimas y no a los victimarios. El daño causado es el que determina la indemnización. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado, de manera que las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. No se pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos cualitativos. Una indemnización será excesiva cuando exceda del monto suficiente para compensar a la víctima. Sin embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica marginar las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada. Una indemnización no es justa cuando se le limita con topes o tarifas, cuando en lugar de ser el juez quien la cuantifique con base en criterios de razonabilidad, es el legislador quien, arbitrariamente, fija montos indemnizatorios, al margen del caso y su realidad. Sólo el juez, que conoce las particularidades del caso, puede cuantificar la indemnización con justicia y equidad"⁹.

DIJAL DE LA J. P. GRACIA
VALORACIÓN EN MATERIA
IVA DE CUARTO CIRCUITO
REY, NUEVO LEÓN

⁹ Tesis Aislada 1a. CXCV/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Materia(s): Constitucional, publicada en la página 502 del libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Secretario: Rosa María Rojas Vértiz Contreras

Conforme a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión [REDACTED], estableció que el derecho a una reparación integral o justa indemnización es un derecho sustantivo que permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y establecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido y de no ser esto posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado, que el daño causado es el que determina la indemnización, esto es, que su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado, de manera que las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores y, que corresponde al juez, con base en criterio de razonabilidad, fijar los montos indemnizatorios, atendido a la circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada, con justicia y equidad.

Además, la autoridad que nos ocupa incumple totalmente en el otorgamiento del derecho a una reparación integral del daño a la quejosa toda vez que los efectos de la sentencia son contrarios a la finalidad del juicio de amparo, pues no debió sobreseer el juicio respectivo, si no, conceder el amparo y protección consistente en la restitución del pleno goce de los derechos fundamentales violados, por los siguientes argumentos.

Los efectos y alcances de las sentencias emitidas por un juez de amparo varían acorde al proceso en el cual se emite y, según la violación constitucional que se advierta en el caso en concreto. Así, las pretensiones de los reclamantes, la naturaleza y objeto del proceso marcan la pauta de las consecuencias de la sentencia emitida, ya sea la declaración de una inconstitucionalidad, el reconocimiento de la lesión a un derecho fundamental y, el restablecimiento del mismo



En el sistema jurídico mexicano, las resoluciones de los juicios de amparo consisten en mecanismos de control de constitucionalidad de normas y actos encaminados a la protección de los derechos fundamentales, debido a lo cual, los efectos de las sentencias que se emitan en el mismo, pueden conllevar a la nulidad lisa y llana del acto reclamado o, incluso una directriz para algún otro órgano del Estado, incluidos los tribunales.

Así, el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone que el objeto del amparo, si el acto de la autoridad es positivo, consiste en restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Si el acto es negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que observe el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Sin embargo, lo único que se desprende de tal disposición es que la finalidad del juicio de amparo es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales.

Por tanto, no toda violación a los derechos fundamentales es igual, por lo que el efecto de una sentencia de amparo debe caracterizarse por una ductilidad que permita tutelar de la manera más efectiva posible los derechos de las personas. Debido a lo anterior, cada uno de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer del juicio de amparo, en sus respectivas competencias, deberán evaluar cada caso en concreto, identificando el derecho fundamental que fue violentado, para así ponderar los efectos que tal violación constitucional acarrearía en aras de restituir el goce del derecho transgredido, sin que ello implique que no se pueda decretar la nulidad lisa y llana del

acto reclamado, pues se podrá arribar a tal consideración cuando a juicio del órgano jurisdiccional competente, la violación concreta al derecho fundamental así lo amerite¹¹.

Una vez establecido lo anterior, en el presente caso, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al momento de resolver el juicio de amparo número 1421/2015, no advirtió que los distintos actos y omisiones realizados por las autoridades responsables generaron una violación a los derechos fundamentales de la quejosa.

Se robustece lo anterior tomando en consideración que la resolución por parte del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, impidió una reparación integral del daño a la quejosa ya que el derecho a la salud es una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Así, una persona afectada en su salud tiene derecho a una indemnización que le compense el daño sufrido, y para que esta sea justa, su determinación depende del daño ocasionado; en este sentido, el derecho moderno de daños mira a la naturaleza y extensión del daño, a las víctimas y no a los victimarios, por lo que las reparaciones no deben generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento. Por tanto, para garantizar las indemnizaciones, la autoridad judicial debe tener la facultad para determinarlas con base en el principio de reparación integral del daño y en forma individualizada, según las particularidades de cada caso, incluyendo la naturaleza y extensión de los daños causados, la posibilidad de rehabilitación del accidentado, los gastos médicos y tratamientos para su curación o rehabilitación, el posible grado de incapacidad, el grado de responsabilidad de las partes, su situación económica y demás

¹¹ Véase la tesis aislada 1a. XXXII/2014 consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 3, febrero de 2014. Tomo I, página 686, cuyo rubro es "**SENTENCIA DE AMPARO. LOS EFECTOS ESTÁN DETERMINADOS POR LA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTALES DE CADA CASO EN CONCRETO**".



729

características particulares, a fin de fijar el pago por un monto suficiente para atender las necesidades de cada caso en particular, situación que en el presente asunto no ocurrió.

Por último, no debemos olvidar que el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades e incluso -dependiendo del tipo de violación- de impulsar un cambio cultural, pronunciándose, en lo que es de suma importancia para el suscrito, respecto a las medidas no pecunarias o reparaciones morales, como medidas tendentes a la memoria, verdad y justicia, garantizando que no se practiquen las prácticas violatorias de derechos fundamentales. En esta lógica, deben ser tomados en cuenta los precedentes dictados por la Corte Interamericana en materia de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en el caso *Suárez Peralta vs Ecuador* (que dicho sea de paso aborda el tema de la responsabilidad estatal derivada de no fiscalizar a los prestadores particulares de servicio de salud privada), particularmente en el párrafo 93¹¹, estableció que los tribunales nacionales a fin de cumplir con los compromisos en la materia, no deben sacrificar los formalismos, sobre la justicia, como acontece en el caso, que con base en tecnicismos el juzgador deja de pronunciarse sobre el fondo planteado relacionados a la violación de los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, a la vida digna, a la protección de las personas en debilidad manifiesta, de mi madre, como sujeto de especial protección constitucional, cuya protección es potencializada y reforzada por su condición de discapacidad manifiesta, en relación al debido proceso en materia de acceso a servicios de salud, que por sí misma se traduce en su conjunto en una patente violación al derecho a la verdad.

¹¹ "93 La Corte ha señalado que "[e]l derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos", y que "los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad", pues de lo contrario se "conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las convenientes reparaciones".

Tercero. Ilegal e inconstitucional sobreseimiento.

La resolución de fecha 27 de septiembre de 2016 que aquí se impugna resulta ilegal e inconstitucional por contravenir lo establecido en los artículos 1, 61, fracción XIII, 65, 73, 74, 76, 77, fracción II, 107, fracción II de la Ley de Amparo, así como los artículos 1º, 4, párrafo cuarto, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello, pues si bien es cierto que el Juez de Distrito reconoció que se acreditó en juicio que se llevaron a cabo actos de autoridad consistentes en los malos tratos que ocasionaron lesiones a mi representada quejosa y en la incomunicación en [REDACTED] que la tuvieron en diferentes ocasiones, también lo es que en la sentencia recurrida se determina sobreseer el presente juicio en virtud de una supuesta actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, lo cual se adelanta que resulta ilegal e inconstitucional.

En efecto, en la sentencia recurrida se considera de manera restrictiva de derechos fundamentales que el juicio de amparo es improcedente si en la especie no se puede, con una sentencia que conceda el amparo de la justicia de la unión, restituir al quejoso en el goce de sus derechos. Cuando como se verá más adelante, ya se han realizado interpretaciones extensivas pro homine sobre los efectos restitutorios del amparo establecidos en el artículo 77 de la ley de la materia.

Razonamiento el apuntado, que conduce al juzgador a considerar que si la quejosa ya fue trasladada a diverso nosocomio ya no queda nada por hacer en el presente juicio de amparo. Sin embargo, el juez soslaya que más allá de la urgencia con la que se acudió al juicio de amparo, en razón incluso por la cual la quejosa obtuvo una suspensión



730

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de plano, se debieron contextualizar los actos de autoridad acreditados como violaciones directas a los derechos fundamentales a la dignidad, integridad física y a la salud.

En esta lógica, resulta incorrecto que el Juez de Distrito limite la acción constitucional ejercida a la restitución de las garantías violentadas. Puesto que si se acreditó que la responsable en el ejercicio de su actividad, en auxilio y colaboración con el estado mexicano en su obligación de proporcionar servicios de salud a la población, llevó a cabo actos ilícitos que terminaron conculcando la integridad física, moral y psíquica de la quejosa, lo conforme a derecho hubiera sido, no sobreseer, sino por lo menos declarar que dichos actos llevados a cabo por funcionarios y dependientes del hospital privado responsable, fueron inconstitucionales, a fin de generar un efecto disuasorio de su actividad irregular¹².

DE LA FEDERACIÓN
DELEGACIÓN MATERA
EL CUARTO
NUEVO LEON

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad responsable se abstuviera, como consecuencia de la declaración de la inconstitucionalidad de sus actos, de llevar a cabo actos análogos a los ventilados en el presente contradictorio en perjuicio de sus pacientes, por ser su actividad y objeto social de interés público y de raigambre constitucional.

En otras palabras, el Juez debió haber sido sensible a los antecedentes del acto reclamado a fin de tener en cuenta que no se trata de cualquier particular con calidad de autoridad responsable, sino que en el presente caso sus funciones encuentran un origen constitucional y de orden público cuya actividad irregular debe ser disuadida por parte de las autoridades jurisdiccionales.

¹² Así ha sido ya considerado en diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el diverso Amparo Directo en Revisión [REDACTED] Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González, resuelto por mayoría de 4 votos.

En consecuencia, si bien al momento del dictado de la sentencia recurrida la quejosa ya había sido trasladada a un diverso nosocomio, pues claro está que por el trato indigno que recibía, el suscrito se avocó a conseguirle un traslado a otra institución al momento en que su estado de salud se lo permitió, ello no implica que los actos (lesiones e incomunicación) a los cuales fue sometida y que tanto violentaron sus derechos fundamentales deben seguir teniendo la presunción de que fueron emitidos conforme a derecho.

Desde esta perspectiva, contrario a lo expresado en la sentencia recurrida, el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo no es óbice como para entrar al estudio de los actos reclamados que se acreditaron en juicio a fin de conceder el amparo de la justicia de la unión, aunque fuera para un mero efecto declarativo y disuasorio para la autoridad. Pues incluso, de la lectura del numeral referido se puede notar con claridad que la fracción II es dable que como efecto concesorio del amparo de la justicia de la unión se puede obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

Para efectos de claridad se cita a continuación el citado artículo 77 de la Ley de Amparo.

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

(...)



RECEIVED
SECRETARÍA DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
MONTERREY



El cual, de contextualizarlo con la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenida en el artículo 1 de la Constitución, resulta inconcuso que ante el escenario expuesto en el presente juicio de amparo, por lo menos, lo alegado por la quejosa debió merecer un estudio y pronunciamiento por parte del Juzgador en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de los actos con la legítima finalidad de disuadir a los funcionarios y demás dependientes de la autoridad responsable (quienes también en lo personal figuran como responsables) en llevar a cabo su actividad de conformidad con el respeto irrestricto de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud.

Sin dejar de destacar que no resulta óbice a lo anterior que la autoridad responsable sea una empresa privada que ofrece los servicios de salud, puesto que ya ha sido adoptado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación el paradigma de la inconstitucionalidad y eficacia de los derechos fundamentales entre particulares.¹³

Ni tampoco el hecho de que le queda a salvo a la quejosa su derecho de ejercer una acción de responsabilidad civil en contra las responsables, pues dicha cuestión opera de pleno derecho, por lo que, no necesita mi mandante una declaración judicial a efectos de ejercerla, siendo entonces gratuito y por ende ilegal dicho pronunciamiento del Juez de Distrito.

Ni siquiera es impedimento para estudiar el fondo del asunto el hecho de que la quejosa ya no se encuentra dentro de las instalaciones del hospital responsable, pues esa situación no juzga sobre la actuación de la autoridad ni colma sus irregularidades.

¹³ Al respecto, véase la tesis aislada XX/2013 de esta Primera Sala, de rubro "**DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES**", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, enero de 2013, Torno 1, página 627.

Por ello, es que se resalta en este agravio que el Juez de Distrito al decretar el sobreseimiento ha llevado a cabo una solución sencilla y tradicional, que conllevaría a una desatención a lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constriñe al Estado Mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme al criterio interpretativo denominado pro persona.

Pues, inclusive en casos análogos, como el resuelto por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Cuarto Distrito al resolver el Amparo en Revisión [REDACTED] se ha otorgado el amparo y protección de la justicia federal pues se ha partido de la base de que una vez acreditada la actividad irregular del prestador de servicios médicos y aún cuando en el caso señalado el quejoso ya había fallecido como consecuencia de los actos, se determinó no sobreseer el juicio de amparo para determinar que resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el sentido de que procedió el pago de una justa reparación y satisfacción a la parte lesionada, reconociéndole tal carácter a los familiares de la finada quejosa.

Con lo que se acredita que –en este caso– fue muy limitada la visión del juzgador ante los antecedentes de los actos reclamados y las consecuencias físicas y psíquicas que mi representada e incluso el suscrito representante (por ser su descendiente directo) sufrimos injustificadamente.

Es decir, si bien afortunadamente no se dio el caso de la causal de improcedencia de fallecimiento del quejoso, en la sentencia recurrida el Juez de Distrito se torna mucho más riguroso y decreta un sobreseimiento bajo la excusa de que mi representada madre ya fue trasladada a diverso nosocomio, cuando de constancias de



autos e incluso en su propia sentencia reconoce que se acreditaron los actos reclamados consistentes en malos tratos e incomunicación.

Por tanto, no existía impedimento alguno de llevar a cabo por lo menos una declaración judicial respecto de la actuación inconstitucional de la cual fue sujeto mi representada o incluso el decretar la reparación de ese daño a través de un resarcimiento económico. Contrario a ello, el juez de distrito se negó a otorgar un sentido protector a favor de la quejosa ha sobreseer el juicio y, en consecuencia, incumplir con la adecuada protección aplicación del principio pro persona en el análisis de los derechos fundamentales en cuestión. Siendo evidente que el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito de la demanda de amparo que nos ocupa se basó en causales de improcedencia que no son manifiestas ni indudables, violentando el derecho de la quejosa

AL DE LO DE LA REPARACIÓN integral del daño y, en consecuencia dejándola en estado de indefensión, lo cual repercute de forma directa en sus derechos fundamentales, lo que significa que en dicho juicio de amparo la autoridad correspondiente no entró al estudio de fondo del asunto para determinar si los actos reclamados eran violatorios de derechos fundamentales y así conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a la señora Martha Garza Santos.

Previo a terminar con la exposición, retomo lo ya expuesto respecto a lo inconducente de la resolución del Juez de Distrito en el sentido de que supuestamente mi mandante debió haber optado por la acción de responsabilidad civil a fin de obtener la restitución en sus garantías violadas, cuestión que aborda el juzgador en los siguientes términos:

No se pasa por alto la existencia de las lesiones de la impetrante así como que durante la substanciación del juicio de amparo, su representante presentó diversos escritos en los que adujo negligencia médica por parte de

las autoridades hospitalarias, pues informo que derivado de tales actos, la quejosa presente un daño renal crónico que la condiciona a hemodializarla (sic) tres días por semana, por virtud de la infección de la colostomía mal tratada, así como también, una úlcera en el talón derecho, y una cicatriz derivada de la ulceración en su rostro.

Sin embargo, ese aspecto no se podría reparar en este juicio de amparo, jurídicamente hablando, pues este órgano jurisdiccional considera que el juicio de amparo no es la vía para reclamar la responsabilidad civil derivada de la negligencia médica por parte de alguna sociedad privada que preste servicios médicos, como en el caso de las autoridades señaladas como responsables; por ende, quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para hacer valer la vía conducente, si así lo desea".

Independientemente de que dicha situación, como ya apunté, opera de pleno derecho sin que sea necesario que el Juez nos otorgue aval alguno para su interposición, dicha consideración no es propia de una sentencia de amparo, pues en ella el juzgador debe ocuparse de la situación efectivamente planteada y buscar dar solución a esta indefensión e injusticia que vive la quejosa como consecuencia de los actos reclamados.

Agregando al efecto que, en la sentencia recurrida, se pierde de vista que la defensa de un gobernado respecto de un mismo suceso o afectación, como lo son los actos reclamados, puede ser ejercida a través de diferentes vías, como lo es el juicio de garantías, la responsabilidad civil, administrativa y la vía penal, entre otras, dependiendo del caso.

Por lo que resulta falso que mi representada hubiese intentado una declaración de negligencia médica y responsabilidad civil a través de este juicio de amparo, pues incluso, durante la substanciación del proceso se remitió a aportar y cumplir con el estándar probatorio propio de un juicio de esta naturaleza. Pues en la vía constitucional que nos ocupa lo único que se puede acreditar es que los actos son contrarios al orden constitucional, en específico, al mandato contenido en el artículo 4º de la Constitución relativo al derecho fundamental a la salud.



Sin que dicha circunstancia implique de manera alguna que mi representada hubiese pretendido que con ello que se acreditaran los extremos de una negligencia médica ni mucho menos los de una responsabilidad civil y que dicha circunstancia fuera declarada en una sentencia de amparo indirecto, pues esas cuestiones son propias de procedimientos de índole civil en los cuales se deben acreditar diversos requisitos adicionales de procedencia de la acción como lo es la existencia de un nexo causal entre la actividad y el daño causado, las condiciones del prestador de servicios y las de la víctima, entre otros.

En consecuencia, si en el presente juicio se acreditó la existencia de los actos reclamados respecto de los cuales se ha concedido que son contrarios al orden constitucional en perjuicio de la quejosa lo procedente era restituírle en sus garantías violadas y no sobreseer a través de argumentos privativos de acceso a la justicia

En este mismo sentido, también resulta ilegal que el Juez de Distrito fundamentara el sobreseimiento en la causa bajo la lógica de que mi representada se encuentra en aptitud de ejercer la vía de responsabilidad civil, pues dicha circunstancia sería tanto como considerar que por tener mi mandante la posibilidad de denunciar en la vía penal los hechos que pudieran ser constitutivos de delito relativos a los antecedentes del acto reclamado ya se estaría ante otra causal de sobreseimiento del presente juicio. Lo cual, evidentemente resulta insostenible.

Por lo que, agravia a mi mandante el pronunciamiento gratuito en este sentido y más aún, que se pretenda coartarle el acceso a la justicia constitucional a la quejosa en razón de que los sucesos violatorios de garantías bien podrían actualizar el supuesto de procedencia de una acción civil.

En conclusión, no le asiste la razón al Juez de Distrito porque si bien el sobreseimiento declarado por dicha autoridad consiste en que dado que en el supuesto de otorgarse la protección constitucional, no se podrían concretar los efectos de la concesión, al no ser factible restituir a la agraviada en el goce de los derechos fundamentales violados, ello resulta insuficiente para decretar dicho sobreseimiento en el juicio, porque de comprobarse que los actos reclamados tuvieron origen en la violación de los derechos fundamentales de la quejosa, resultaría aplicable lo ya mencionado con anterioridad consistente en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que procede el pago de una justa reparación y satisfacción a la parte lesionada.

Razones éstas y aquellas, suficientes para que este Tribunal Colegiado revoque la resolución recurrida y en su lugar otorgar el amparo y protección de la justicia a mi representada con el efecto de restituirle en sus garantías y derechos violados a partir de la máxima general del derecho de la justa indemnización contenida en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como la declaración de inconstitucionalidad de los actos reclamados a fin de generar un efecto disuasivo en la actividad de las autoridades responsables.



SEXTO. Antecedentes. Del expediente del juicio de amparo indirecto se desprenden los siguientes:

[REDACTED] promovió juicio de amparo indirecto en representación de su señora madre [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:

AUTORIDADES RESPONSABLES.	
a) Director Médico del [REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
ACTOS RECLAMADOS. Lo constituye la <u>privación ilegal de la libertad, malos tratos, incomunicación, torturas física y psicológica</u> , así como también los diversos actos que se equiparan de facto a una <u>privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento</u> , actos que algunos llevan a cabo las autoridades responsables en menoscabo de la directa quejosa.	

LA FEDERACION
EJECUTIVO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
JEFATURA

El conocimiento del asunto le correspondió al Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado.

Substanciado el juicio de garantías por sus diversas etapas procesales, emitió la sentencia recurrida terminada de engrosar el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en la que decretó el sobreseimiento.

Por un lado, en relación con los actos reclamados de privación ilegal de la libertad y tortura física y psicológica, ante la negativa de las responsables,

así como del análisis al caudal probatorio que obran en el juicio de amparo.

Resolvió que, en cuanto a la privación ilegal de la libertad las responsables manifestaron **que no era cierto** que la paciente [REDACTED] se encontrara privada de la libertad o retenida en dicho nosocomio sin consentimiento de sus familiares, al sostener que ésta se encuentra internada en el [REDACTED] [REDACTED] con la autorización de su familia, en específico del hermano de la paciente [REDACTED] quien firmó el contrato de servicios hospitalarios y que, mencionaron, en el momento en que su familia o ella misma lo decidan, podrá egresar del hospital.

Sobre este punto, precisó el juez de Distrito, el representante de la quejosa no ofreció elementos de prueba que desvirtuaran esa negativa, puesto que, las aportadas no demostraban ese hecho, aunado a que el representante legal no realizó manifestación alguna relacionada con su intención de retirar del nosocomio a la paciente, ni tampoco alegó que, al pretender realizarlo, ello le ha sido impedido por las responsables.

Por el contrario, precisó el a quo, las responsables exhibieron el contrato de prestación de servicios hospitalarios, celebrado entre [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Conchita, al que otorgó valor pleno, por lo que, concluyó, no existían pruebas que demostraran que las autoridades médicas han mantenido privada ilegalmente de la libertad a la directamente quejosa o retenida en dicho nosocomio sin su consentimiento.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 55

736

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

En el mismo sentido resolvió el juez Federal, respecto de los actos de tortura física y psicológica, ya que las responsables negaron su existencia, sin que la quejosa exhibiera pruebas en contrario.

Para tal efecto, invocó la definición del concepto de tortura, el contenido del numeral 3, de la **Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura**, así como la **Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes**, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, suscrita por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, además de la **Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura**, adoptada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.



SECRETARÍA
GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN
DE LOS ESTADOS
AMERICANOS
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Por lo que, determinó, al no existir prueba alguna para acreditar la existencia del acto reclamado de tortura física y psicológica, y tampoco apreciar de manera presuntiva la intención de las responsables de ocasionarle un dolor o sufrimiento físico o mental en perjuicio de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con motivo de su internamiento en el hospital, decretó el sobreseimiento en el juicio.

Por otro lado, el juez de Distrito a pesar de la negativa de las responsables sobre la existencia de los actos reclamados consistentes en malos tratos que han ocasionado lesiones, así como incomunicación al limitar la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares, los tuvo por ciertos.

Lo anterior, señaló, ya que de las propias manifestaciones de las responsables se aprecian los malos tratos que han ocasionado lesiones, al reconocer que existen lesiones lo que, incluso, se corroboró con el desahogo de la prueba pericial que ofrecieron las responsables.

Mientras que, resolvió, en cuanto a la incomunicación al limitar la posibilidad de que la directamente quejosa sea visitada por sus familiares, las responsables reconocen que han impedido al representante especial de la quejosa, visitarla fuera del horario establecido en el reglamento interno lo que, indica, contiene una afirmación por las responsables.

No obstante, el juez de Distrito en relación con los mencionados actos, decretó el **sobreseimiento** en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que de otorgarse la protección constitucional, no se podrían concretar los efectos de la concesión, al no ser factible restituir a la agraviada en el goce de los derechos fundamentales violados.

Inconforme, el representante de la quejosa [REDACTED] interpuso el presente recurso de revisión con apoyo en los agravios previamente reproducidos.

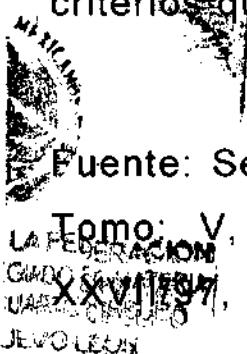
SÉPTIMO. Antes de proceder a realizar el estudio de las causas de improcedencia que pudieran actualizarse, en concreto, la relacionada con el fallecimiento de la quejosa, es necesario determinar en



736

primer orden, si las señaladas como responsables del [REDACTED] tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en su caso, Seguros Banorte, sociedad anónima. De no ser así, el análisis respectivo no tendría objeto ante la inexistencia de autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo.

Bien, las características de la autoridad para efectos del juicio de amparo han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los criterios que enseguida se reproducen:



Novena Época, Instancia: Pleno, Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, febrero de 1997, Materia: común, Tesis: P. XXVII/97, Página: 118.

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo

mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo



ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

LA JEFATURA DE LA
GACETA DE LA FEDERACIÓN
UABEC CIRCUITO
EVO

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, marzo de 1999, materia: administrativa, Tesis: 2ª. XXXVI/99, Página 307.

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone

directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado."

Época: Novena Época, Registro: 161133,
Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Comun,
Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089.

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad



738

del afectado."

De los criterios citados, puede advertirse que el Alto Tribunal ha venido construyendo, con el paso del tiempo, un criterio que define las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado.

Así, se dejó de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración pública ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado.

Cierto que ese criterio se fue diseñando durante la vigencia de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, en cuyo artículo 11 disponía:

"Artículo 11. *Es autoridad responsable la que dicta promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado".*

No obstante, en el Diario Oficial de la

Federación del día dos de abril de dos mil trece, se publicó la nueva Ley de Amparo que abrogó la anterior, y en la que se retomaron los anteriores criterios del citado Alto Tribunal para definir a las autoridades responsables en los términos siguientes:

Así, el artículo 5, fracción II, dispone:

"Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

...

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."

De manera que a partir del tres de abril de dos mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo por disposición del artículo primero transitorio del decreto respectivo, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su



naturaleza formal), dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo.

En ese orden de ideas, el derecho a la salud consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales, pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores etcétera, entonces, válidamente se puede concluir que el [REDACTED], así como sus empleadores actúan como autoridades para efectos del presente juicio circunstancial, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, y no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial, cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas.

En este sentido, es importante reproducir lo que al efecto establece la Ley General de Salud, así como la Ley Estatal de Salud, que respectivamente dicen:

Ley General de Salud.

"Artículo 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y

modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social."

"Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en:

I.- Servicios públicos a la población en general;

II.- Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios;

III.- Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y

IV.- Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria."

"Artículo 38.- Son servicios de salud privados los que presten personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. En materia de tarifas, se aplicará a lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley.

Estos servicios pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros, individuales o colectivos."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-15

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

"Artículo 40.- Las modalidades de acceso a los servicios de salud privados y sociales se regirán por lo que convengan prestadores y usuarios, sin perjuicio de los requisitos y obligaciones que establezca esta Ley y demás disposiciones aplicables."

"Artículo 41.- Los servicios de salud que presten las entidades públicas o empresas privadas a sus empleados y a los beneficiarios de los mismos, con recursos propios o mediante la contratación de seguros individuales o colectivos, se regirán por las convenciones entre prestadores y usuarios, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables a las instituciones de salud respectivas."

"Artículo 53.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los procedimientos para regular las modalidades de acceso a los servicios públicos a la población en general y a los servicios sociales y privados.

Ley Estatal de Salud en el Estado de Nuevo León.

"ARTÍCULO 1o.- LA PRESENTE LEY REGLAMENTA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTENIDO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ESTABLECE LAS BASES Y MODALIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, Y LAS BASES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL Y REGULA LA

SALUBRIDAD LOCAL, SUS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL."

"ARTÍCULO 20.- PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS SERVICIOS DE SALUD ATENDIENDO A LOS PRESTADORES DE LOS MISMOS SE CLASIFICAN EN:

I.- SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN ABIERTA, SIENDO AQUELLOS QUE SE PRESTAN EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD Y QUE SE DEBERÁN REGIR POR CRITERIOS DE UNIVERSALIDAD Y DE GRATUIDAD, FUNDADOS EN LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS USUARIOS;

II.- SERVICIOS A DERECHOHABIENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE SEGURIDAD SOCIAL;

III.- SERVICIOS SOCIALES Y PRIVADOS, QUE DEBERÁN PRESTARSE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY.

SE CONSIDERAN SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE SALUD."

En esencia, las disposiciones transcritas establecen, en el ámbito de su respectiva competencia, que son reglamentarias de la Constitución Federal y Local, mediante las cuales se determinan las bases y



modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia para la prestación del servicio, tanto de la Federación como de las entidades federativas en materia de salubridad general, disposiciones que son de orden público e interés social.

Disponen las modalidades en que se clasifican los servicios de salud, atendiendo a los prestadores, en lo que interesa, los servicios otorgados por la persona moral [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a la quejosa se ubican en el ramo de servicios privados, los que se desarrollan en las condiciones convenidas entre el hospital privado y el usuario, servicios los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros, individuales o colectivos, como ocurre en el caso, ya que en los autos del juicio de amparo se encuentra acreditado que la prestación del servicio deriva de un contrato privado celebrado entre el hospital con el hermano de la paciente.

En razón de lo anterior, es posible afirmar que la actuación de los hospitales privados y de su personal médico tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes, puesto que, desarrollan esa actividad como entes que sustituyen la actividad del Estado, lo cual reviste un interés de carácter público.

En efecto, los profesionales de la salud tienen un deber concreto, derivado del contrato de prestación de servicios, pero a la vez tienen una obligación que va más allá de lo pactado o convenido por las partes en los

contratos aludidos, que consistente en aplicar los estándares correspondientes a su profesión, en observancia de los postulados Constitucionales; de ahí que las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud en los hospitales privados no se limitan a las disposiciones de derecho privado y, por ende, pueden ser considerados como autoridades para efecto del juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

Época: Décima Época, Registro: 2002501, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. XXIII/2013 (10a.), Página: 626.

“DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es



272

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano."

De igual forma, resulta aplicable el criterio que enseguida se reproduce:

Época: Décima Época, Registro: 2008751,
Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a. CXXII/2015 (10a.), Página: 1117.

"SERVICIOS DE SALUD. LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL MÉDICO DERIVADAS DE SU PRESTACIÓN EN LOS HOSPITALES PRIVADOS NO SE LIMITAN A LAS DISPOSICIONES DE DERECHO PRIVADO. *La actuación de los hospitales privados y de su personal médico tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes, lo cual reviste un interés de carácter público, por lo que excede el mero interés de los particulares, al ser una meta inherente del Estado Mexicano, de manera que los profesionales de la salud pueden tener un deber concreto, derivado del contrato de prestación de servicios, pero también uno que va más allá de lo pactado o convenido por las partes, consistente en observar los estándares correspondientes a su profesión; de ahí que las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud en los hospitales privados no se limitan a las disposiciones de derecho privado.*"

Consecuentemente, el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] debe considerarse como autoridad para efectos del presente juicio de amparo.

Por otro lado, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la prestación del servicio médico por parte del [REDACTED] derivó del contrato respectivo celebrado entre el hermano de la quejosa y la compañía aseguradora denominada Seguros



Banorte, sociedad anónima.

Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de garantías no se aprecia que dicha institución aseguradora haya sido señalada como responsable, como tampoco que se le atribuyera acto alguno.

Esto es, los reclamos al [REDACTED] [REDACTED] no tienen como origen el incumplimiento de la póliza de seguro, ya sea por falta de cobertura o negativa de la compañía asegurado para gestionar la prestación del servicio médico.



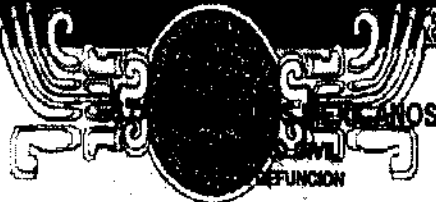
DE LA FEDERACION
COLECCION DE MATERIA
DE AMPARO
CIRCUITO
MEXICO

Al contrario, lo que aparece de los antecedentes es que la quejosa fue egresada del mencionado Hospital por decisión de sus propios familiares y llevada a otro para continuar con su atención médica, aun al amparo del mismo seguro de gastos médicos.

En este sentido, no es posible considerar a la compañía asegurado como autoridad para los efectos del presente juicio de amparo.

OCTAVO. Estudio preferente de aspectos relacionados con una posible causa de sobreseimiento ocurrida durante el trámite del presente recurso de revisión. Cabe destacar, que el representante de la promovente exhibió ante este tribunal original del acta de defunción de la quejosa [REDACTED] acaecido el siete de febrero de dos mil diecisiete (folio 472), misma que se reproduce:

FOLIO
A19 0490875



MEXICANOS
CIVIL
DEFUNCION

000472

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON Y COMO OFICIAL
4 DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, CERTIFICO, EN LO CONDUCENTE,
QUE EN EL LIBRO No. 1 TOMO 1 DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
EN LA FOJA No. 167600 SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA No. 908 BIS
DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2017 LEVANTADA POR EL C. OFICIAL 29 DEL
REGISTRO CIVIL PROFRA. YOLANDA SH VIA GUZMAN GARZA RESIDENTE
EN MONTERREY, NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EN LA CUAL SE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS

DATOS DEL FINADO (A)

NOMBRE	[REDACTED]	C.R.P.	[REDACTED]	EDAD	60
NACIONALIDAD	MEXICANA	C.U.R.P.	[REDACTED]	SEXO	FEMENINO
ESTADO CIVIL	CASADO(A)				
NOMBRE DEL CONYUGE	[REDACTED]				
NACIONALIDAD	MEXICANA				
NOMBRE DEL PADRE	[REDACTED]				
NACIONALIDAD	MEXICANA				
NOMBRE DE LA MADRE	[REDACTED]				
NACIONALIDAD	MEXICANA				
DESTINO DEL CADÁVER	[REDACTED]				
NOMBRE DEL PANTEON	[REDACTED]				
UBICACION	[REDACTED]				

DATOS DEL FALLECIMIENTO

FECHA DE LA DEFUNCION 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 HORA 19:26
LUGAR MONTERREY, NUEVO LEON, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CAUSA(S) DE LA MUERTE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, ENF. CEREBRO VASCULAR, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL

NOMBRE DEL MEDICO QUE CERTIFICO LA DEFUNCION No DE CEDULA PROFESIONAL

JORGE EDUARDO CURREA COLLANTES 1854116
No DE CERTIFICADO 140565723

DATOS DEL DECLARANTE

NOMBRE	[REDACTED]	EDAD	52
NACIONALIDAD	MEXICANA	PARENTESCO	NINGUNO

DATOS DE LOS TESTIGOS

NOMBRE	[REDACTED]	EDAD	44
NACIONALIDAD	MEXICANA	PARENTESCO	NINGUNO
NOMBRE	[REDACTED]	EDAD	62
NACIONALIDAD	MEXICANA	PARENTESCO	NINGUNO

DATOS DEL PAGO MONTERREY N.L. A 13/MAR/2017
ELABORAR MANUELA REYES

ACTAS DE DEFUNCION

CUARENTA Y CINCO PESOS (40.00 M.N.)

POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, SE OTORGA ESTA CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A LAS OCHO HORAS DEL MES DE MARZO DEL 2017 DDTTE

EL OFICIAL 4 DEL REGISTRO CIVIL DE MONTERREY, N.L.

FRANCISCO JAVIER MUÑEZ ANTUNEZ MANUELA REYES

PODER
PRIMER
ADMIN
MEX

ESTADO DE N
JAI
MEX
CIVIL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

De la reproducción se advierte, que la directamente quejosa falleció el siete de febrero del presente año.

No obstante, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

(...)

III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona."

DE LA FEDERACIÓN
LEGACIÓN EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
JUNOZOLTEPEC

Del numeral transcrito se advierte, como condición para que se actualice la causa de sobreseimiento por fallecimiento de la parte quejosa, que los actos reclamados solamente afecten a su persona, esto es, que únicamente trastoquen sus derechos sin trascender a la estabilidad emocional o psicológica y financiera de los familiares, ante el evidente perjuicio sufrido por la quejosa, lo que da lugar a invocar el numeral 16 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación legal en

el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decreta la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto."

Del contenido de ambos numerales se aprecia, que cuando el acto reclamado afecte no sólo los derechos estrictamente personales, sino también algunos otros de diversa índole, no se debe decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por el fallecimiento del quejoso, como se advierte de la tesis 1a. CLXXI/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 190, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ERICTAMENTE PERSONALES. Conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su tramitación, si los actos reclamados no son de índole meramente personal y, por consiguiente, existe la



posibilidad de que se afecten sus intereses económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al señalar con claridad que esto sólo es posible cuando se afecten derechos estrictamente personales. En consecuencia, cuando el acto reclamado proviene de un juicio en el que se vean afectados derechos patrimoniales del quejoso, es incuestionable que la garantía reclamada no sólo afecta a su persona y, por tanto, en la referida hipótesis no procede sobreseer en el juicio de amparo."

Criterio el anterior que resulta aplicable, pues si bien en él se interpretó el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, su contenido coincide con el numeral 16 de la propia ley vigente.

En este sentido, de acuerdo con el criterio transcrito en el caso, no es posible apreciar en forma simplista los actos reclamados de incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones (cuya certeza de su existencia advirtió el juez de Distrito), como hechos que solamente perjudicaron a la quejosa, puesto que es necesario apreciar el entorno en que se ocasionaron.

En este sentido, no es posible prejuzgar de momento, sobre la causa de improcedencia que pudiera actualizarse con motivo del fallecimiento de la quejosa, dado que las consecuencias de los actos reclamados son cuestiones que atañen al fondo del asunto.

Esto es así, considerando que los actos reclamados de privación ilegal de la libertad, tortura física y psicológica, incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones, fueron planteados por el familiar (hijo) de la quejosa ante su evidente convalecencia y, en el fondo de asunto, se debe analizar hasta dónde trascendieron los actos reclamados, no solo en relación con la directamente quejosa, sino con relación a los familiares ante el estado de salud de la paciente.

Cierto, este tribunal no se puede aventurar a estimar que se actualiza la causa de sobreseimiento por el fallecimiento de la quejosa, cuando se desconoce cómo y en qué grado de afectación, los actos reclamados pudieron o no trascender al círculo en que se desenvolvía la quejosa.

PODER JUDICIAL DE
ADMINISTRACIÓN
MONTERREY, COA.

Tiene aplicación el criterio siguiente:

Novena Época, Registro: 187973, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."



En este sentido, no procede sobreseer en el juicio con motivo del fallecimiento de la quejosa, porque se requiere de un estudio de fondo (de no actualizarse una causa distinta de sobreseimiento del juicio) en el cual se debe analizar, en su caso, la existencia de transgresiones a sus derechos fundamentales y, por ende, si se actualiza o no la hipótesis prevista en el artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conforme a la cual procede el pago de una justa reparación y satisfacción a las personas más cercanas a la quejosa, quienes, conforme a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también pueden ser consideradas como víctimas, lo que lleva a concluir que, en el caso, las garantías reclamadas no solamente pudieran afectar a la persona de la directamente quejosa.

Con apoyo en esas circunstancias, este Tribunal Colegiado concluye que, en el caso, no es procedente sobreseer en el juicio de amparo por el deceso de la quejosa.

NOVENO. Establecido lo anterior, este tribunal colegiado se estima competente para resolver el presente asunto.

Lo anterior, no obstante el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión [REDACTED], resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince, derivado del amparo en revisión [REDACTED] del índice de este tribunal.

En efecto, el amparo en revisión en cita trataba sobre un asunto similar al presente en el que los actos reclamados consistían en la no inclusión oportuna en el cuadro básico del medicamento Eculizumab-Soliris, así como la negativa de suministrar a la quejosa dicho medicamento que, a su decir, requería para su estabilización como última alternativa de tratamiento, que disminuyera su daño en hemolisis, al ser portadora del síndrome de hemoglobinuria paroxística nocturna y la omisión de tomar las medidas adecuadas para adquirir dicho fármaco.


Durante el trámite del recurso de revisión, la quejosa falleció, por lo que, se estimó que si bien, ante el fallecimiento de la quejosa resultaba imposible garantizarle el goce de su derecho o reparar integralmente las consecuencias de la medida violatoria del mismo; no obstante se consideró, que ello resultaba insuficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio, porque de comprobarse que su fallecimiento tuvo origen en la violación de sus derechos humanos, la cual, por cierto, ya estaba establecida en la resolución constitucional, resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el sentido de que procede el pago de una justa reparación y satisfacción a la parte lesionada que, conforme a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden considerarse con ese carácter a los familiares de aquélla.

En este sentido, en consideración de este órgano jurisdiccional se estimó necesaria la intervención



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún ante el fallecimiento de la quejosa, dado que, entre otros motivos, en el País existen diversas personas con el mismo padecimiento, por lo que resulta necesario establecer si resultaba o no factible vincular a las autoridades responsables a proporcionar a los respectivos quejosos el medicamento específico que, a su decir, es el que requieren para el restablecimiento de la enfermedad que padecen, atendiendo desde luego a las particularidades de cada caso concreto.

 Sin embargo, la Segunda Sala resolvió, en lo que interesa, que se actualizaba la causa de sobreseimiento prevista en los artículos 73 fracción XVIII y 80 de la anterior Ley de Amparo, dado que la quejosa ~~había fallecido~~, y esta circunstancia implicó la imposibilidad material para cumplir con los eventuales efectos de una sentencia protectora que ordenara proporcionarle el medicamento que afirmaba requerir, puesto que ninguna finalidad práctica tendría obligar a las responsables a la compra de un producto farmacéutico si ya no existe la quejosa a la cual suministrarlo.

Ahora bien, se estima inaplicable al caso concreto el criterio de la Segunda Sala toda vez que no resulta obligatorio para este tribunal, al no ubicarse en los supuestos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En efecto, se trata de un criterio aislado que no refleja el nuevo paradigma previsto en la reforma al artículo 1 de la Constitución Federal, que obliga al Estado Mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos observando los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme al criterio interpretativo denominado pro persona.

Lo anterior, significa que cuando sea diferente el beneficio o la protección reconocida en las normas de distintas fuentes (Constitución y Tratados Internacionales), deberá prevalecer aquella que otorgue una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción a sus derechos.

Además, este órgano jurisdiccional no puede pasar por alto las situaciones siguientes:

1. No es correcto exigir a los quejosos que invoquen como actos reclamados, hechos futuros, para el caso de que pudieran fallecer durante el trámite del juicio de amparo.

Ello, implicaría imponerles un requisito que no se encuentra previsto en la Constitución Federal ni en la Ley de Amparo.

Cierto, para no decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías cuando el quejoso fallezca durante su trámite, sería necesario que reclamaran actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales no procede el amparo y ello actualizaría una causa de improcedencia y sobreseimiento.

Además, no debe pasar inadvertido el estado clínico de la paciente quejosa, lo que le impedía defenderse por sus propios medios de los actos que le pudieran ocasionar perjuicio.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-55

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

Por tales razones, el juicio de amparo se instauró por su familiar, pues su estado de salud no le permitía actuar por sí misma y, en ambos casos, no se les puede exigir que previeran el deceso.

Pensar lo contrario, sería tanto como obligar a la persona que fallece para que amplíe su demanda de amparo una vez que ocurrió el deceso, pues se consideraría que, hasta ese momento, resiente un perjuicio.

Por ello, sujetar a los quejosos al cumplimiento de requisitos no previstos en la Ley, para no sobreseer en el juicio de amparo cuando durante su trámite fallezca, les impide obtener un análisis de su reclamo a los familiares que pudieren resentir perjuicios materiales o inmateriales.

1005 MEXICO
DE LA
JEFATURA DE LA
FISCALIA EN MATERIA
DE AMPARO
MEXICO

2. En razón de lo anterior, sin cambiar los hechos que dieron origen a la demanda de amparo, es posible analizar el resarcimiento patrimonial del presunto daño que se pudo haber causado a la familia de la quejosa en caso de que, del análisis a los agravios de su representante, se levante el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito y sea necesario analizar el fondo del asunto.

Esto, ante la imposibilidad de la paciente para evitar por sus propios medios la cesación de esos actos, ya sea a través de manifestaciones o conductas tendientes a evitar los perjuicios sufridos, toda vez que, la quejosa debido a su estado grave de salud, requería de personas allegadas a ella para que vieran por su estado de salud y quienes buscaran alternativas de solución a su

convalecencia, lo que pudo haberles ocasionado un desgaste físico y emocional al ver el deterioro en la salud de la paciente.

Pensar lo contrario, es decir, que los daños sufridos por la paciente no afectan a la familia; daría lugar a sobreseer sin mayor consideración en el juicio de amparo ante el fallecimiento de ella.

Sin embargo, esa solución sencilla y tradicional, conlleva a una desatención a lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constrañe al Estado Mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme al criterio interpretativo denominado *pro persona*.

Si bien ante el fallecimiento de la quejosa resulta imposible restituirle en el goce de su derecho o reparar las consecuencias de la medida violatoria del mismo. Ello resulta insuficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio, porque de comprobarse que no obstante su fallecimiento tuvo lugar en la violación de sus derechos humanos, la cual, por cierto, ya quedó establecida en la resolución constitucional (incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones), resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el sentido de que procede el pago de una justa reparación y satisfacción a la parte lesionada que, conforme a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

249

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

Humanos, pueden considerarse con ese carácter a los familiares de aquélla.

Para dar sustento a lo anterior, se atiende que el artículo 1º, de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

DE LA FEDERACION
DIEGO DE SA. MATERIA
EL QUINCE DE AGOSTO

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

De conformidad con el segundo párrafo del precepto constitucional de previa inserción, las normas aplicables para la solución de las controversias judiciales en materia de derechos humanos, deben elegirse conforme a un criterio que favorezca al individuo de la manera más amplia o lo que se ha denominado principio *pro persona*.

Conforme a dicho criterio interpretado en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como se desprende de la jurisprudencia 107/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 799, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son, normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el ordenamiento jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo

prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano."

En la elección de la norma que servirá para resolver la cuestión planteada, este Tribunal Colegiado atiende que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, cuando sea más favorable a la persona, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado, como se desprende de la jurisprudencia 21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 204, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se



determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio *pro persona* obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la jurisprudencia nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos."

En relación con el tema en cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas y ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales.

Lo anterior, entre otros, en los siguientes casos contenciosos: Blake vs. Guatemala. Sentencia de 24 de enero de 1998, párrafos 114, 115 y 116; Bámaca

Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 160; Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafos 101 y 102 ; 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 210; Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafos 113 a 115; Gómez Palomino vs. Perú. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 60; López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 119; Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 5 de abril de 2006, párrafo 128; Ximenes López vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 156; Servellón García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 128; Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrafo 96; Vargas Arce vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 83; Bueno Alves vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo de 2007, página 102; y Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Sentencia de 10 de julio de 2007, párrafo 112.

Resulta importante señalar que en la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil, relativa al caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (párrafos 162 y 163) la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos también ha aceptado que cuando se violan derechos fundamentales de una persona humana, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, las personas más cercanas a la víctima también pueden ser consideradas como víctimas. También destacó que la Corte Europea de Derechos Humanos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas.

En la diversa sentencia de diecinueve de mayo de dos mil once, relativa al diverso caso Vera Vera y otra vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en relación al tema relativo a la atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de los seres humanos, en los siguientes términos:

“...

39. Este Tribunal ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. En razón de dicho carácter, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio.

40. Por otro lado, el derecho a la integridad personal es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles,

inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia.

41. Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

42. El Tribunal ha señalado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que



no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

43. *Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera.*

44. *Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros..."*

Las consideraciones destacadas deben observarse por este órgano jurisdiccional, en razón de que los jueces mexicanos están vinculados a observar la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando sea más favorable a la persona, lo que se advierte de la tesis XIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 650, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en



754

aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas."

En el caso, como ya se indicó, la quejosa reclamó del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones durante el tiempo en que convaleció en dicho centro médico, cuando la intención de toda persona que acude a los centros hospitalarios, evidentemente, es sanar de sus padecimientos o al menos, tener una mejor calidad vida a través de una atención médica profesional.

LA FEDERACION
DE MATERIA
CUARTO CIRCUITO
JEF. LEON

En ese contexto, este órgano jurisdiccional por las razones expuestas asume jurisdicción a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada y, en este sentido, procede el análisis de los agravios del representante de la quejosa, que tienden a desestimar las causas de improcedencia que aplicó el juez de Distrito.

DÉCIMO. Síntesis de los agravios. En el primero alega que el juez de Distrito no apreció ni consideró el caudal probatorio que aportó para acreditar los actos reclamados.

Refiere, que mediante las diversas documentales privadas se acreditó con meridiana claridad la existencia de todos los actos reclamados, pues si bien consisten en medios de prueba incompletos, pues no

[Firma manuscrita]

alcanza el grado de prueba plena, lo cierto es que se perfeccionan con otros medios de prueba, y los cuales son suficientes para demostrar los actos reclamados de privación ilegal de la libertad y de tortura física y psicológica, demostrando con las mismas el nexo causal entre los actos y omisiones de las responsables y el daño ocasionado tanto a la integridad física, psicológica y patrimonio de la quejosa.

Menciona, que las pruebas que fueron analizadas generan una presunción plena que sirve de puente de unión entre los dos conceptos, los actos y omisiones de las responsables el daño tanto en la integridad física, psicológica y patrimonio de la quejosa.

Como segundo agravio sostiene, que lo resuelto por el a quo implica un desconocimiento respecto del contenido del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que la Corte Interamericana establece que cuando se resuelva un acto de autoridad ocasionando una violación de un derecho o libertad se deberá garantizar al lesionado en el goce o su derecho de libertad conculcados, así como disponer la reparación de las consecuencias de la vulneración de dichos derechos y el pago de una justa indemnización.

Menciona, que cada una de las cláusulas descritas están dirigidas a resarcir a las víctimas, no solo en el goce de sus derechos, sino también a modificar las consecuencias producidas por la violación, ya sea en la víctima o a través de cualquier medida o situación que provocó la afectación, es decir, una reparación integral del daño.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Continúa, que el concepto de reparación integral que se desprende del artículo 63.1 en cita, comprende la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial, al mismo tiempo que el otorgamiento de medidas como:

- a). La investigación de los hechos;
- b). La restitución de derechos, bienes y libertades.
- c). La rehabilitación física, psicológica o social;
- d). La satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas;
- e). Las garantías de no repetición de las violaciones;
- f). La indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

Cuestión que, en el contexto constitucional actual, ha sido considerado de cumplimiento obligatorio.

Añade, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 1068/2011, estableció que el derecho a una reparación integral o justa indemnización es un derecho sustantivo que permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y establecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido y de no ser posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de

ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado; que el daño causado es el que determina la indemnización, esto es, dice, que su naturaleza y su monto dependan del daño ocasionado, de manera que las reparaciones no puedan implicar un enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores y, que corresponde al juez, con base en el criterio de razonabilidad, fijar los montos indemnizatorios, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada, con justicia y equidad.

Sostiene, que en el caso concreto el juez de Distrito no advirtió que los distintos actos y omisiones realizados por las responsables generaron una violación a los derechos fundamentales de la quejosa, impidiendo una reparación integral del daño.

Concluye, que deben ser tomados en cuenta los precedentes dictados por la Corte Interamericana en materia de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en el caso Suárez Peralta vs Ecuador, en su párrafo 93, estableció que los tribunales nacionales a fin de cumplir con los compromisos en la materia, no deben sacrificar los formulismos, sobre la justicia, como acontece en el caso, que con base en tecnicismos el juzgador deja de pronunciarse sobre el fondo planteado relacionados con la violación a los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, a la vida digna, a la protección de las personas en debilidad manifiesta, como lo es la quejosa.

En el agravio tercero alega, que si bien el



756

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

juez de Distrito reconoció que se acreditaron los actos reclamados de malos tratos que ocasionaron lesiones a la quejosa, así como la incomunicación en que se encontró, indebidamente se sobreseyó en el juicio de amparo, lo que considera, restrictiva de los derechos fundamentales.

Lo anterior, menciona, al estimar que al haberla trasladado a distinto nosocomio ya no queda más que hacer, empero, soslaya que más allá de la urgencia con la que se acudió al juicio de amparo, se debieron contextualizar los actos acreditados como violaciones directas a los derechos fundamentales a la dignidad, integridad física y a la salud, por lo que, al estar acreditados dichos actos, en lugar de sobreseer, debió declarar que los citados actos llevados a cabo por funcionarios y dependientes del hospital privado responsable, fueron inconstitucionales a fin de generar un efecto disuasorio de su actividad irregular, para que el hospital se abstuviera, de llevar a cabo actos análogos a los ventilados en el presente asunto, en perjuicio de sus demás pacientes, por su actividad y objeto social de interés público.

En decir, señala, el juez de Distrito debió de ser sensible a los antecedentes del acto reclamado a fin de tener en cuenta que no se trata de cualquier particular con calidad de responsable, aunado a que ello no es impedimento, ni tampoco el que pueda ejercer la acción de responsabilidad civil, como tampoco es obstáculo, para estudiar el fondo del asunto, que la quejosa ya no se encuentre dentro de las instalaciones del hospital responsable.

DÉCIMO PRIMERO. Estudio de los agravios.

Es infundado el primero.

Se califica de infundado el primero, ya que contrario con lo alegado, los actos reclamados consistentes en privación ilegal de la libertad y de tortura física y psicológica, no se encuentran acreditados en el juicio de amparo.

En este sentido, el representante de la quejosa señala que con las documentales públicas exhibidas se justifican los citados actos y si bien, no señala cuáles demuestran su pretensión, lo cierto es que, ni aun supliendo la queja deficiente, se aprecia la certeza de su existencia.

En efecto, en el expediente del juicio de amparo obran las documentales siguientes:

1. Contrato de prestación de servicios celebrado entre el [REDACTED] y [REDACTED] en favor de [REDACTED] (folio 277).

2. Resumen Clínico de la paciente [REDACTED] elaborado por el [REDACTED] [REDACTED] (folio 282).

3. Cuatro informes de la condición médica de la paciente [REDACTED] rendidos por el director del [REDACTED] al que anexó notas de evolución (folios 411, 483, 498 y 527).

4. Dictamen pericial médico rendido por los peritos designados por el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



757

Conchita (folio 587).

5. Dictamen pericial médico rendido por el perito designado por el juez de Distrito (folio 984).

6. Testimonial a cargo de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], esposo de la quejosa paciente (folio 1049).

7. Ampliación del dictamen pericial rendido por el perito designado por el Juez de Distrito (folio 1068).

8. Acta de verificación para hospitales con actividades quirúrgicas u obstétricas, levantada en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] el diecinueve de octubre de dos mil quince, por la Secretaría de Salud del Estado (folio 1348).

9. Copia simple de la pericial médica rendida por el perito de la quejosa en el diverso juicio de amparo 925/2015 (folio 1452).

10. Copia simple de la denuncia sanitaria presentada ante la Secretaría de Salud del Estado, por el representante de la quejosa en contra del [REDACTED] [REDACTED] (folio 1493).

11. Acta de verificación sanitaria para establecimientos de servicios de atención médica, practicada en el [REDACTED] el doce de agosto de dos mil quince, por la Secretaría de Salud del Estado (folio 1512).

Analizadas en lo individual y en su conjunto los diversos elementos de prueba en términos de lo dispuesto por los artículos 97, fracciones II, III, IV y VI, 129, 133,

143, 165, 197, 202, 203, 211 y 215, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2, de la Ley de Amparo, contrario con lo alegado por la quejosa, no se acredita la existencia de los actos reclamados consistentes en la **privación ilegal de la libertad y de tortura física y psicológica**, por lo siguiente:

Antes es preciso destacar, como lo señaló el juez de Distrito, las autoridades responsables no aceptaron la existencia de los citados actos reclamados, por ende, para desacreditar, en su caso, esa negativa, es necesario realizar un análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente de amparo.

Bien, de la probanza señalada en el ^{PODER} **número 2**, consistente en "*Resumen Clínico de la paciente [REDACTED]*", ^{ACUSADOR} **elaborado por el [REDACTED]** **[REDACTED]** (folio 282)", se advierte que describe el estado clínico de la paciente quejosa, así como el medicamento que se le suministró y el tratamiento que se le otorgó durante el periodo de cuatro de marzo al veintitrés de julio de dos mil quince.

Igualmente, de los "Cuatro informes de la condición médica de la paciente [REDACTED] rendidos por el director del [REDACTED] [REDACTED] al que anexó notas de evolución (folios 411, 483, 498 y 527)", mencionados en el **punto 3**, describen las condiciones médicas de la quejosa paciente, sus padecimientos y el tratamiento que se le prestó.

Por otro lado, de la prueba descrita en el



punto 4, consistente en el "Dictamen pericial médico rendido por los peritos designados por el [REDACTED] [REDACTED] (folio 587)", no acredita los actos reclamados consistentes en la **privación ilegal de la libertad y de tortura física y psicológica**, al contrario, en sus conclusiones consideran que la atención médica prestada a la quejosa, es la ideal conforme a su historial clínico.

Mientras que, de la prueba pericial desahogada por el profesionista designado por el juez de Distrito señalada en el punto 5, se aprecia que el perito concluyó: *que la atención médica y de diagnóstico brindada a la referida paciente, no fue acorde a sus padecimientos, ni a los procedimientos médicos. La paciente actualmente se encuentra internada en el [REDACTED], presenta un buen estado de salud. Evolucionando en forma favorable y, recuperándose de su mal estado de salud en que se encontraba al salir del [REDACTED] [REDACTED] Conchita. La posible recuperación de sus alteraciones neurológicas, renales y respiratorias será lenta y pasara mucho tiempo. Desde el punto de vista renal, deberá continuar en el programa de hemodiálisis, ya que la toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar su vida fue muy alta y pudiera no recuperarse su función renal. Por lo tanto, considero que existió negligencia, inoperancia y falta de atención por medio del personal médico y administrativo del [REDACTED] [REDACTED]."*

De igual forma, de la ampliación del dictamen pericial designado por el juez de Distrito, mencionado en el

punto 7, se aprecia: "... a la paciente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] durante su estancia en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] se le ocasionó: daño renal irreversible, infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y perpetua en el dorso de la nariz. **Responsabilidad imputable al personal de enfermería,** derivado de forma directa por la omisión del Director Médico responsable por el que debió de haber instrumentado las medidas idóneas para evitar las consecuencias de salud antes relacionadas, al uso y abuso de antibióticos nefrotóxicos y secundaria a una colostomía mal tratada. Y, evidenciando el nexo causal del daño ocasionado durante su estancia en el [REDACTED] [REDACTED]."

De la reproducción se aprecia, que **el perito** dictaminó que a la paciente se le ocasionaron diversas lesiones, ello por negligencia, indebida atención médica, tanto del personal tratante como del director del nosocomio, empero, esos descuidos o indebido trato que ocasionaron lesiones, **no justifican la privación ilegal de la libertad, ni la tortura física y psicológica.**

En principio, porque el dictaminador no refiere a ninguna **privación de la libertad**, además de que no sería la persona física adecuada para afirmar ese hecho, pues en su caso, correspondería a la autoridad judicial calificarla.

Ahora, respecto de la **tortura física y psicológica**, cabe decir, que el hecho de que existan lesiones ocasionadas a la paciente, ello derivó, de acuerdo a los dictámenes periciales, al descuido en el trato a la



paciente o a la incapacidad del personal médico para brindar el servicio adecuado, pero no se aprecia, como lo resolvió el a quo, ni aun de manera presuntiva la intención de las responsables de ocasionarle un dolor o sufrimiento físico o mental a la paciente [REDACTED] con motivo de su internamiento en el hospital.

Esto es, no se acredita con la mencionada pericial que, con intención, se haya producido a la paciente un dolor o sufrimiento, ya sea físico o psicológico, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (aplicable en términos del párrafo segundo del artículo segundo transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que la derogó a partir del veintisiete de junio de dos mil siete), la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la Convención Interamericana para Prevenir o Sanciona y la Tortura, observadas por el a quo, que dicen:

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

"Artículo 3.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad”.

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Artículo 1.

Para los efectos de la Presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.”

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

“Artículo 2.



760

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencias de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo."

Por otro lado, de la prueba testimonial desahogada por [REDACTED], esposo de la paciente [REDACTED] señalada en el punto 6, visible a folio 1049, no aporta elemento alguno a través de la cual se pudiera advertir la existencia de los actos reclamados, pues tan solo se narra la relación familiar con el hijo de la paciente.

Por otro lado, respecto de la prueba descrita en el punto 8, consistente en Acta de verificación para hospitales con actividades quirúrgicas u obstétricas, levantada el diecinueve de octubre de dos mil quince, por la Secretaría de Salud del Estado, en el [REDACTED] [REDACTED] con ella se justifica la verificación efectuada en el hospital, a fin de corroborar las

instalaciones y equipo médico para la prestación del servicio, pero en forma alguna demuestran la existencia de los actos reclamados.

Ahora bien, en relación con la copia fotostática del **dictamen pericial rendido en el diverso juicio de amparo 925/2015 punto 9**, cabe destacar que, para efectos del presente juicio, se considera como **documental privada** puesto que, además de ser rendido en diverso juicio del que ahora se resuelve, la misma no se desahogó en los términos previstos por los artículos 119 y 120, de la Ley de Amparo.

Además, de su contenido se aprecia que se destaca la deficiente atención médica, derivada de la falta de cuidados, pericia u diligencia, lo que provocó diversas lesiones e infecciones nosocomiales, pero en forma alguna demuestran los actos reclamados de privación ilegal de la libertad y de tortura física y psicológica.

Lo mismo ocurre con la denuncia sanitaria presentada por el representante de la quejosa ante la Secretaría de Salud del Estado [punto 10], en contra del [REDACTED] pues con ella, solo se demuestra que la quejosa a través de su representante, puso en conocimiento de la autoridad sanitaria diversas irregularidades en el citado nosocomio, empero, de ella no se advierte en que forma pudiera trascender al resultado del presente asunto, ni tampoco que se acrediten los actos reclamados.

Lo mismo ocurre con el "Acta de verificación sanitaria para establecimientos de servicios de atención



médica, practicada en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] el doce de agosto de dos mil quince, por la Secretaría de Salud del Estado (folio 1512)", puesto que sólo demuestra que se practicó dicha diligencia, pero no se exhibe el resultado de la misma y, en su caso, tampoco se aprecia cómo pudiera trascender en el presente asunto, esto es, no tendría como efecto justificar los actos reclamados de **privación ilegal de la libertad**, ni la **tortura física y psicológica**.

Por el contrario, respecto del acto reclamado **privación ilegal de la libertad**, con la documental descrita en el punto 1, consistente en el contrato de prestación de servicios celebrado entre el [REDACTED] y [REDACTED] hermano de la quejosa, se demuestra que el internamiento en el hospital fue voluntario y derivó del padecimiento de salud de la paciente [REDACTED]

En consecuencia, aun supliendo la queja deficiente de la quejosa, como se aprecia del análisis al caudal probatorio que obra en el expediente del amparo en revisión, como lo resolvió el juez de Distrito, no se acreditan los actos reclamados de **privación ilegal de la libertad y de tortura física y psicológica**.

En tales condiciones, procede **confirmar el sobreseimiento** en el juicio de garantías respecto de los citados actos.

DÉCIMO SEGUNDO. Estudio del agravio tercero que se estima fundado, suficiente para modificar la sentencia que se revisa.

a) En una parte del agravio tercero, la inconforme combate el sobreseimiento del juicio de garantías en relación con el acto reclamado de **incomunicación**.

Sobre el tema, cabe decir que ante el juez de Distrito se acreditó que en las fechas en que estuvo internada la paciente quejosa en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] no fue posible proporcionar libertad de acceso a los familiares para visitarla fuera del horario establecido en el reglamento interno del hospital; empero, contrario a lo resuelto por el juez de Distrito ello no impide concretar los efectos del amparo, desde el punto de vista de los daños morales y/o psicológicos ocasionados a los familiares.

PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
JURISDICCIONAL
DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE LA JEFATURA
DE LA FISCALÍA

Es verdad que existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo pueda producir efectos restitutorios de la garantía que se estima violada en relación con la directamente quejosa, pues como se mencionó, a la fecha de emitir la sentencia de amparo ya no se encontraba internada en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por lo que no tendría propósito aplicable ordenar que cesara ese estado, al no estar incomunicada con motivo de haber sido trasladada a otro nosocomio, además de que a la fecha, la paciente falleció.

No obstante, esa incomunicación ocasional para visitar a la paciente quejosa de que fue objeto durante su convalecencia en el hospital responsable, produjo perjuicios a sus familiares pues durante su estadía sufrió lesiones por negligencia del personal médico (como más adelante se verá), de manera que lejos de mejorar o



atenuarse la mala condición de salud de la quejosa, esta se agravó diversos padecimientos o lesiones que adquirió con motivo de su estancia en el hospital responsable lo que generó preocupación, angustia, incertidumbre y desconfianza de parte de los familiares al conocer el estado de salud de la paciente, ante la evidente falta de atención profesional del personal hospitalario.

trasladado

Sin embargo, tal evento no desacreditó la comunicación en que se encontraba la paciente, ni desapareció el daño inmaterial sufrido por los familiares de la quejosa, mayormente cuando en el hospital responsable a ella le ocasionaron lesiones por malos tratos y negligencia.

Ahora, la reparación de los daños en este tipo de asuntos no puede concretarse solamente a los que sufrió la persona que los recibió, sino que involucra el entorno en el que se desarrollaron, en especial, a las personas más cercanas a la afectada, pues ellos resienten el perjuicio tal vez no en lo físico, pero sí en lo moral y psicológico.

Por ello, se estima que la familia de la paciente

quejosa sufrió daño moral, que consiste en la lesión de los sentimientos que ocasionó dolor inmaterial y, en su caso, sufrimiento físico.

De este modo, es posible establecer que el acto reclamado de incomunicación, no sólo afectó el derecho de la quejosa, sino que trascendió al derecho de los familiares que ocasionalmente no pudieron acceder a la paciente, para constatar su estado de salud, considerando además, que por otro lado tuvieron conocimiento de las lesiones que aquélla sufrió durante su convalecencia en el hospital responsable.

Lo anterior, atendiendo a la proximidad del vínculo familiar, tomando en cuenta que debido al estado de salud, la paciente no estaba en aptitud de tomar las decisiones que le beneficiaran, por lo que, sus parientes fueron quienes estuvieron al pendiente de su salud, con la salvedad de que en ocasiones no pudieron acceder a una visita para ello.

También se consideran las circunstancias particulares de la condición personal de la quejosa, de manera que ante su incapacidad, un familiar fue quien vio la necesidad de promover el juicio de amparo, ante la incomunicación y los malos tratos que recibió la paciente por negligencia o descuido del personal tratante.

Además, se toma en cuenta que en el caso los familiares fueron testigos de los eventos relacionados con la salud de la paciente quejosa.

En consecuencia, es indebido el

de malos tratos que ocasionaron lesiones a la quejosa, indebidamente sobreseyó en el juicio de amparo, lo que considera, es restrictivo de los derechos fundamentales.

Lo anterior, menciona, al estimar que al haberla trasladado a distinto nosocomio ya no queda más que hacer, sin embargo, soslayó que más allá de la urgencia con la que se acudió al juicio de amparo, se debieron contextualizar los actos acreditados como violaciones directas a los derechos fundamentales a la dignidad, integridad física y a la salud, por lo que, al estar acreditados dichos actos, en lugar de sobreseer, debió declarar que los citados actos llevados a cabo por funcionarios y dependientes del hospital privado responsable, fueron inconstitucionales a fin de generar un efecto disuasorio de su actividad irregular, para que el hospital se abstuviera, de llevar a cabo actos análogos a los ventilados en el presente asunto, en perjuicio de sus demás pacientes, por su actividad y objeto social de interés público.

Contrario con lo resuelto por el juez de Distrito, los efectos del fallo protector sí pueden concretizarse en relación con los actos reclamados que estimó ciertos, consistentes en **malos tratos que ocasionaron lesiones a la quejosa.**

Bien, como lo resolvió el juez de Distrito, en relación con la existencia del acto reclamado de malos tratos que han ocasionado lesiones, las responsables expusieron lo siguiente:

“Analizando las condiciones médicas de la



764

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

paciente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] se puede deducir claramente que las supuestas lesiones que presenta, son consecuencia de las complicaciones médicas, no obstante el quejoso pretende atribuirlos a la omisión de brindar servicio de salud privada de calidad y ha (sic) actos de malos tratos, incomunicación, tortura física y psicológica.

Si bien las "lesiones" de la paciente [REDACTED] [REDACTED] son consecuencia de su crítico estado de salud desde hace meses, que es ulceraciones resequecedad en la piel, y no a la supuesta privación ilegal de la libertad, malos tratos, incomunicación, tortura física y psicológica."

*De igual forma, no pasa inadvertido por este Tribunal el dictamen médico y su ampliación rendido por el perito designado por el juez de Distrito, en los que, **destaco***

DE LA FEDERACIÓN
LEGISLADO EN MATERIA
EL QUEJOSO
AMPLIO LEON

"... que la atención médica y de diagnóstico brindada a la referida paciente, no fue acorde a sus padecimientos, ni a los procedimientos médicos. La paciente actualmente se encuentra internada en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], presenta un buen estado de salud. Evolucionando en forma favorable y, recuperándose de su mal estado de salud en que se encontraba al salir del [REDACTED] [REDACTED]. La posible recuperación de sus alteraciones neurológicas, renales y respiratorias será lenta y pasara mucho tiempo. Desde el punto de vista renal, deberá continuar en el programa de hemodiálisis, ya que la toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar su vida fue muy alta y pudiera no recuperarse su función renal. Por lo tanto, considero que existió negligencia, inoperancia y falta de atención por

medio del personal médico y administrativo del [REDACTED]

De igual forma, en la ampliación del dictamen pericial señaló:

*"... a la paciente [REDACTED] durante su estancia en el [REDACTED] Conchita, se le ocasionó: daño renal irreversible, infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y perpetua en el dorso de la nariz. **Responsabilidad imputable al personal de enfermería**, derivado de forma directa por la omisión del Director Médico responsable por el que debió de haber instrumentado las medidas idóneas para evitar las consecuencias de salud antes relacionadas, al uso y abuso de antibióticos nefrotóxicos y secundaria a una colostomía mal tratada. Y, evidenciando el nexo causal del daño ocasionado durante su estancia en el [REDACTED] [REDACTED]."*

De lo transcrito se advierte que el acto reclamado consistentes en malos tratos que ocasionaron lesiones a la paciente quejosa, se encuentra debidamente acreditado, puesto que el perito dictaminó que a la paciente se le ocasionaron diversas lesiones, derivadas de negligencia e indebida atención médica, tanto del personal tratante como del director del nosocomio.

El artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:

"Artículo 4o.- *El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*



Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley



766

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia."

En lo que interesa, el derecho contenido en el numeral transcrito y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer algún tipo de enfermedad o trastorno, o bien, a prevenir y en su caso, tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo.

De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general que comprende el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.

En este sentido, el derecho a la salud es una garantía fundamental para que la persona se encuentre en aptitud de poder ejercer los demás derechos humanos, por lo que, una persona afectada en su salud con motivo de un accidente o por una atención médica indebida, como en el caso, tiene derecho a una retribución que le permita solventar los gastos necesarios para su restablecimiento, tomando en consideración el daño ocasionado.

Ahora, en el caso al haber fallecido la quejosa la reparación del daño en sus derechos fundamentales no es posible, pero ello no significa, que los demás perjuicios ocasionados directamente a sus familiares igualmente hayan desaparecido.

En efecto, la pérdida de la salud con motivo de la negligencia o maltrato por parte de las instituciones de salud hacía los pacientes, tiene como consecuencia, la obligación de los responsables de reparar el deterioro que ocasionaron, no sólo mediante la aplicación de conocimientos médicos y la prestación de los servicios adecuados de ser posible, sino también la reparación integral del daño moral y/o psicológico resentido por los familiares al advertir que la paciente desmejoró en su salud ante esa incapacidad de atender con **eficacia** y conocimiento médico.

PODER JUDICIAL
JEFATURA DE
FISCALIA
ADMINISTRATIVA
ASISTENTE

En este sentido, contrario con lo resuelto, los efectos del amparo, de otorgarse, sí pueden concretizarse, pues el hecho de que ya no convalezca la paciente en el [REDACTED] o bien, porque a la fecha la quejosa ya falleció, no significa que esas lesiones cesaron al momento en que egresó del hospital o que, con motivo del fallecimiento de la paciente aquéllas no existieron, tan es así, que al haberse cambiado de hospital fue para que se atendieran las lesiones sufridas en las instalaciones de la responsable, ante la negligencia del personal médico, por lo que, los efectos del amparo serían, en su caso, con ese propósito.

En este contexto, es importante destacar, que el tener por acreditado el acto reclamado de malos tratos



767

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que ocasionaron lesiones, no es contradictorio con el criterio apuntado en líneas precedentes relacionado con la inexistencia de la tortura física y psicológica también reclamados.

Pues como se ha mencionado, de los dictámenes periciales del profesionista designado por el Juzgado de Distrito se advierte, que las lesiones que sufrió la paciente quejosa derivaron de la negligencia del personal tratante, es decir, por una inadecuada asistencia médica. Sin embargo, ello no demuestra en forma alguna los actos de tortura física y psicológica hacia la paciente.

En efecto, el hecho de que existan lesiones ocasionadas a la paciente de acuerdo a los únicos elementos de prueba que así lo señalan, consistentes en los dictámenes periciales, derivó del descuido en los procedimientos médicos prestados a la paciente o bien, con motivo de la incapacidad del personal médico para brindar el servicio adecuado, pero no se aprecia, como lo resolvió el a quo, ni aun de manera presuntiva la intención de las responsables de ocasionarle un dolor o sufrimiento físico o mental a la paciente [REDACTED] [REDACTED] con motivo de su convalecencia en el hospital, para obtener de ella alguna información o castigarla.

Es decir, no se acredita con la mencionada pericial que, con intención, se haya producido a la paciente un dolor o sufrimiento, ya sea físico o psicológico, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o

Degradantes y de la Convención Interamericana para Prevenir o Sanciona y la Tortura, que de nueva cuenta se reproducen:

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

"Artículo 3. Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad".

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

"Artículo 1.

Para los efectos de la Presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón

realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo."

Como puede advertirse de esas disposiciones legales los elementos que distinguen a la tortura consisten en que los dolores o sufrimientos que se imponen a la persona tienen el propósito de obtener de ella información o castigarla por algo que haya hecho, así como para intimidarla o coaccionarla, ya sea a la propia víctima o a un tercero, circunstancias que no se demostraron en el presente caso.

Consecuentemente, este órgano jurisdiccional en términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, levanta el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito respecto de los actos reclamados de incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones a la quejosa, por lo que, antes de analizar el fondo del asunto, es necesario emitir un pronunciamiento respecto de las diversas causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables y cuyo estudio omitió el juez de Distrito.

DÉCIMO TERCERO. Análisis de las causas de improcedencia que hicieron valer las responsables en sus informes justificados.

En forma similar las autoridades responsables denominadas Director General, Jefa de Servicios de Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos y Jefe de Seguridad, todos del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sostienen:

1. Alegan, que el [REDACTED]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

[REDACTED] es un hospital privado, por lo que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, al no realizar actos equivalentes a los de una autoridad y no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, aunado a que la prestación del servicio deriva de un contrato privado entre el hospital con el hermano de la paciente.

2. Por otro lado, sostiene, que [REDACTED]

[REDACTED] pretende promover el juicio de amparo por sí y en representación de [REDACTED] siendo que los actos u omisiones que se reclaman, atañen exclusivamente a la paciente, por lo que sólo ésta podría promover la demanda de garantías directamente o por conducto de su representante, en términos del artículo 6, de la Ley de Amparo.

EL JUEFE
ESQUEMA
COMUNICACIÓN
NUEVO LEON

Menciona, que se tuvo a [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] como representante de la paciente, sin investigar si dicha paciente cuenta con legítimo representante, así como requerir a éste para que manifestara su deseo de desempeñar el cargo, si se encuentra ausente o impedido para promover el juicio de amparo o se ha negado a promoverlo o bien, si existe otro familiar cercano para representarla, lo que dice, hace patente la falta de personalidad de [REDACTED]
[REDACTED]

Es infundada la causa de improcedencia relacionada con el carácter de responsables de las autoridades del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] conforme al estudio oficioso que realizó este órgano

jurisdiccional en el considerando séptimo del presente fallo, por lo que, no es necesario analizar de nueva cuenta esa cuestión que ha quedado plasmada en líneas anteriores.

Por otro lado, lo alegado en relación con la falta de personalidad que alega la recurrente, del representante de la paciente para promover el juicio de garantías, **también es infundado.**

En efecto, contrario con lo que alegan las responsables, [REDACTED] no promovió el juicio de garantías por sus propios derechos, pues de la demanda de amparo se advierte que señaló como quejosa, a su señora madre [REDACTED]

Ahora bien, el juez de Distrito válidamente le reconoció la personalidad a [REDACTED] como representante especial de la paciente en términos del artículo 8, de la Ley de Amparo, al ser hijo de [REDACTED]
[REDACTED]

PODER. JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY

El citado numeral 8, de la Ley de Amparo, dice:

“Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga

Al no existir causas de improcedencia de las aquí analizadas, se procede a emitir resolución en cuanto al fondo del presente asunto.

DÉCIMO CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Para tal efecto, se reproducen digitalmente los conceptos de violación que hizo valer la quejosa, del tenor siguiente:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: Se violan en perjuicio del suscrito las garantías individuales que otorga la propia Constitución en sus artículos 4º tercer párrafo, 14, 16, en razón a que las responsables se encuentran privando de la libertad a mi madre, incomunicándola, y dándole malos tratos, que le han ocasionado diversas lesiones según se advierte en diversas fotografías "lo que" se agrava al limitarle la posibilidad de que podamos visitarla por sus familiares para recibir el afecto que humanamente es de exigirse para el caso, cuestión que amerita una protección reforzada por su condición de incapaz, conforme a dictamen médico de ISSSTE que se exhibe.

Siendo oportuno agregar que la Primera Sala de la SCJN, en diversos precedentes ha sustentado que los hospitales privados están sujetos al escrutinio constitucional por violación de derechos fundamentales al ejercer por delegación estatal el servicio de salud que es una meta inherente al Estado mexicano y que a la postre incluso ha reiterado la doctrina en el sentido que dichos prestadores de servicios guardan una relación asimétrica en relación a los usuarios de salud (respecto de lo cual se otorgan todos los beneficios procesales aplicables al caso por analogía al encuadrar por equiparación dentro de una CATEGORIA SOSPECHOSA por formar parte de un grupo vulnerable como usuarios de salud, máxime que se es incapaz), de acuerdo a las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar el veintitrés de abril pasado, el AMPARO EN REVISIÓN 152/2013 (DERIVADO DE LA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 387/2012), de lo que que sus actos no se limitan a disposiciones de derecho privado que en el ámbito de la doctrina se conoce como eficacia horizontal de los derechos fundamentales (eficacia irradiadora de los derechos humanos).

Caso se advierte del amparo en revisión 584/2013, fallado el 5 de noviembre de 2014, de cuyas consideraciones en lo que importa al caso establecen:

184 Lo anterior, en razón de que la prestación de servicios públicos como la de salud implica la protección de intereses públicos, que es una de las finalidades de los Estados y si bien éstos pueden delegar su prestación, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo por ende la delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin discriminación con la más alta calidad y de la forma más efectiva posible.

185 Por lo que hace a los usuarios de servicios de salud, éstos son todos aquellos que requieran y obtengan servicios de salud que presten los sectores público, social y privado en las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables. Estos usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y científicamente responsable así como un trato respetuoso y digno por parte de todo el personal involucrado.

186 También, tienen derecho a recibir información suficiente clara oportuna y veraz, así como a una orientación adecuada respecto de su salud.

De la cual derivó la siguiente tesis:

Época Décima Época
Registro 2008751
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16 Marzo de 2015, Tomo II
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis la CXXII/2015 (10a)
Página 1117

SERVICIOS DE SALUD LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL MEDICO DERIVADAS DE SU PRESTACIÓN EN LOS HOSPITALES PRIVADOS NO SE LIMITAN A LAS DISPOSICIONES DE DERECHO PRIVADO.

La actuación de los hospitales privados y de su personal médico tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes, lo cual reviste un interés de carácter público, por lo que excede el mero interés de los particulares, al ser una meta inherente del Estado Mexicano de manera que los profesionales de la salud pueden tener un deber concreto, derivado del contrato de prestación de servicios, pero también uno que va más allá de lo pactado o convenido por las partes, consistente en observar los estándares correspondientes a su profesión, de ahí que las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud en los hospitales privados no se limitan a las disposiciones de derecho privado.

Amparo en revisión 584/2013, 5 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Leizaola de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto concurrente Olga Sánchez Cordero de García Villagas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien reservó su derecho para formular voto concurrente Ponente Olga Sánchez Cordero de García Villagas Secretario Ignacio Villeda Barreto

Época Décima Época
Registro 2008752
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16 Marzo de 2015, Tomo II



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Materia(s) Constitucional
Tesis 1a. CXX/2015 (10a.)
Página 1118

SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR HOSPITALES PRIVADOS SUS USUARIOS CONSTITUYEN UN GRUPO EN CONDICIÓN ASIMÉTRICA, AUN CUANDO NO SE IDENTIFIQUE CON UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA O UN ESTEREOTIPO.

Los hospitales privados tienen una participación trascendental en el desarrollo del sistema de salud, ya que el objeto de su operación, a diferencia de otro tipo de establecimientos mercantiles, es de interés público y de una especial protección constitucional, al tratarse de la salud y/o de la vida. Así, en lo que respecta a los hospitales privados, los servicios de salud tienen una naturaleza integral, en virtud de la pluralidad de entes que participan y por la diversidad de actividades que desarrollan en torno a la salud, que los hace complejos, lo que puede originar diversas responsabilidades, atendiendo a la participación y al tipo de daño causado las cuales pueden ser de diferente índole, ya sea penal, administrativa o civil; asimismo, pueden proceder tanto de acciones como de omisiones, generando una afectación moral o patrimonial, de forma directa o indirecta, y las cuales pueden ser objeto de lo establecido en los convenios suscritos con los usuarios o los ajenos a tales convenios. En ese sentido, los usuarios de los servicios de salud se encuentran en un grupo vulnerable, sin que necesariamente se identifique con una categoría sospechosa o un estereotipo como ocurre tratándose de adultos mayores, mujeres, niños y niñas o indígenas, entre otros, por la posición de disparidad frente a quienes manejan, desarrollan y controlan los servicios de salud; situación en la que se ven vulnerados en sus derechos fundamentales ante la asimetría de poder entre el hospital y los usuarios, por la propia naturaleza de los servicios y por la complejidad de la medicina como profesión.

Amparo en revisión 584/2013. 5 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.

Además, las responsables violan en perjuicio de mi madre en su condición de 'capacitada incapaz', sus derechos de protección a la salud e integridad personal, así como de dignidad, en un plano horizontal, que desde luego la legitima para demandar tales derechos fundamentales, en el juicio de amparo que se promueve.

FEJ
JUEG
L. C
NUJ

SENTENCIA
CORTA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso FURLAN Y FAMILIARES Vs. ARGENTINA, SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2002, (Excepciones Preliminares, Fondo, Repetición y Costas), ... 134. En este sentido, la Corte Interamericana reitera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativo la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra, como la discapacidad.

Criterio anterior que resulta vinculante al Estado Mexicano en cuanto a su aplicación en el derecho interno tal y como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 293/2011, donde entre otras cosas, resolvió que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante el tribunal transnacional de referencia, pues constituyen una extensión de los tratados internacionales que interpreta, toda vez que en tales criterios se determina el contenido de los derechos humanos previstos en ellos, siempre que dicho precedente favorezca en mayor medida a las personas.

Ver ejecutoria recaída al amparo en revisión 117/2012, fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que postuló al respecto:

... Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma lo asentado en la sentencia del Juez de Distrito, ya que como se ha afirmado, los actos desplegados por los particulares —como los hospitales y médicos privados— no se encuentran fuera del control constitucional. Refuerza lo anterior, el hecho de que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido que los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, incluso en las relaciones jurídico-privadas. Esta eficacia horizontal de los derechos fundamentales tiene como efecto que en los asuntos de su conocimiento, los tribunales atiendan a la influencia de los valores que subyacen en tales derechos, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelvan un caso concreto.

Tomando en consideración los anteriores razonamientos, esta Primera Sala emitió la tesis jurisprudencial 15/2012 cuyo rubro es el siguiente: "DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES".

En consecuencia, es inconcuso que los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, poseen eficacia no sólo frente a los órganos del Estado, sino incluso en las relaciones entre particulares, situación que no sólo reafirma la naturaleza jurídica de la Constitución, sino que también justifica la introducción de tales derechos fundamentales en ámbitos aparentemente privados como la atención médica "privada".

Adicionalmente, no puede aceptarse la concepción consistente en que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado.

Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. Por otra parte, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano.

También invoco, conforme a parámetros establecidos en similares términos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁴, la violación en perjuicio de mi madre del **derecho de protección en materia de salud, y del derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad**, previsto este último en el artículo 25 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada por México el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 17 de diciembre de 2007.

De igual forma, los actos reclamados constituyen prácticas por las que abusan de su posición dominante las responsables, soslayando su obligación de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, incluida la rehabilitación relacionada con la salud, que debe estar dirigido al mejor interés del paciente, con el objetivo preservar su dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfermedad de mi madre, y mejorar su calidad de vida⁵.

Luego, se solicita a su señoría respetuosamente que tome medidas necesarias para que las responsables actúen dentro del marco de la legalidad y el respeto y garantía del derecho a la salud, en cumplimiento de los deberes contemplados en los artículos 1 y 2 de la CADH, así como en observancia de la sentencia del caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, párrafo 121, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal.

Acerca de las violaciones de derechos fundamentales, y dentro de un contexto de diálogo entre tribunales (aceptado por la literatura especializada en el tema de Derechos Humanos) es oportuno aludir a las consideraciones sustentadas por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, el 10 de agosto de 2006, en la sentencia T-660/06 que refiere:

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 superior, la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, cuyas obligaciones son la organización, dirección y reglamentación de la prestación del servicio, así como el establecimiento de políticas para el suministro de la atención de salud y la vigilancia y control de las instituciones privadas que lo prestan. Por lo tanto, la legislación aplicable a las entidades de medicina prepagada otorga a la Superintendencia Nacional de Salud las facultades de aprobación de los planes de

Aquí, tomando en consideración que uno de los bienes jurídicos protegidos mediante la atención médica privada es el derecho a la salud, y en virtud de que el mismo constituye un valor tutelado tanto en la Constitución así como en tratados internacionales, es que no se puede restringir al ámbito normativo del derecho privado.

Tomando en consideración lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina, al igual que lo hizo el juez de Distrito, **que el derecho fundamental a la salud debe respetarse por hospitales privados y su personal médico.**

Al efecto, en diversos sistemas jurídicos se ha postulado este principio, como se desprende de la sentencia T-158/10, de 5 de marzo de 2010, dictada por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia, en la que sostuvo:

En esos casos, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en reiterar que procede la acción de tutela para que el juez constitucional examine, de manera excepcional, e, **clausulada contractual**, por cuanto: (i) Se trata de personas jurídicas privadas que participan en la prestación del servicio público de salud; (ii) los usuarios de las empresas que prestan los servicios adicionales de salud se encuentran en estado de indefensión frente a éstas, toda vez que dichas empresas tienen bajo su control el manejo de todos los instrumentos que inciden en el disfrute efectivo de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios y asistenciales ofrecidos "hasta el punto que, en la práctica, son ellas las que deciden de manera concreta si cubren o no el respectivo gasto en cada momento de la ejecución del contrato" y, adicionalmente, tratándose de planes de medicina prepagada e incluso de pólizas de salud, los contratos son considerados de adhesión, lo que significa que las cláusulas son redactadas por las empresas y poco son discutidas con el usuario-contratante, situación que lo convierte en la parte débil de la relación comercial; y, (iii) **la vía ordinaria no es idónea ni eficaz para la resolución de un conflicto que involucre la violación o amenaza de derechos fundamentales como la vida y la dignidad de las personas**, máxime cuando se acredita la existencia de un perjuicio irremediable, ya que la decisión resultaría tardía frente a la imposterante prestación del servicio de salud.

Ver caso **FURLAN Y FAMILIARES Vs. ARGENTINA**, SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2012 que en su párrafo 282 dispone: "La Corte resalta que la atención de salud debe estar disponible a toda persona que lo necesite. Todo tratamiento a personas con discapacidad debe estar dirigido al mejor interés del paciente; debe tener como objetivo preservar su dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfermedad, y mejorar su calidad de vida. Asimismo, sobre los alcances del derecho a la rehabilitación en los términos del derecho internacional, el artículo 25 de la CDPD establece el **derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad** y la obligación de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, **incluida la rehabilitación relacionada con la salud.**"

Esto debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facultades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, **conforme a la "Observación General" de la ONU, no. 14**. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Comité DESC, 11 de agosto de 2000, párr. 8.

Ver Caso **Ximenes Lopes Vs. Brasil**, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 2001, Serie C No. 149, párr. 109. Asimismo, ver: Organización Mundial de la Salud, División de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias, Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental (1996), principios 2, 4 y 5. Por su parte, el Comité de DESC ha señalado que el "derecho a la salud física y mental implica también el derecho a tener acceso a los servicios médicos y sociales, incluidos los aparatos ortopédicos, y a beneficiarse de dichos servicios, para que las personas con discapacidad puedan ser autónomas, evitar otras discapacidades y promover su integración social. De manera análoga, esas personas deben tener a su disposición servicios de rehabilitación a fin de que logren "alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad". Tanto los servicios mencionados deben prestarse de forma que las personas de que se trate puedan conservar el pleno respeto de sus derechos y de su dignidad". Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 5, "Personas con Discapacidad", Naciones Unidas, Documento E/1995/22 (1994), párr. 24.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

entidad pública o privada, si es una persona moral o física, ni el tipo de servicio que en específico, cada uno pueda prestar, en razón de que la atención médica es el conjunto de servicios que proporcionan esos prestadores de forma conjunta para proteger, promover o restaurar la salud de las personas; por ende, las obligaciones vinculadas con los servicios de salud no excluyen a los particulares en su participación. En ese sentido, los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, prevén que todos los establecimientos, sin distinguir entre públicos, privados, físicos o morales, deben contar con un médico responsable que, entre otros supuestos, establezca y vigile el desarrollo de procedimientos para asegurar que la prestación de servicios que el establecimiento ofrezca sea oportuna y eficiente, así como para que se cumpla cabalmente la ley, por lo que, suponer que éstos actúan de forma independiente, es decir, que no son empleados o dependientes, sería incongruente, pues no podrían cumplir con sus funciones. De ahí que la existencia de un médico responsable que vigila el desarrollo de los procedimientos que se lleven a cabo al interior del establecimiento, hace evidente que los hospitales trabajan de manera coordinada con sus médicos empleados o dependientes.

Amparo en revisión 584/2013. 5 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes reservaron su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro."

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN: Con apoyo en los artículos 128, 125

DÉCIMO QUINTO. Los conceptos de violación se analizan en forma conjunta con el agravio segundo del escrito de recurso, mismo que se encuentra estrechamente relacionado con el tercero que se declaró fundado.

EL AGRAVIO
EN MATERIA
DE CIRCUITO
NO SE RELACIONA

Cabe decir, que el estudio conjunto solamente se relaciona con los actos cuya existencia quedó plenamente demostrada en la presente ejecutoria consistentes en incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones, dado que respecto de los diversos actos reclamados, materia de los conceptos de violación, se estima procedente se confirmar el sobreseimiento decretado, mismos que se analizan en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.

Sostiene la recurrente en sus conceptos de violación, que la paciente ha sido objeto de incomunicación al limitar la posibilidad de que sea visitada por la familia para recibir el afecto que humanamente es de exigirse en el caso y de malos tratos que le han ocasionado diversas lesiones, transgrediendo su derecho a la salud.

En su agravio tercero alega, que lo resuelto

por el a quo implica un desconocimiento respecto del contenido del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que la Corte Interamericana establece que cuando se resuelva un acto de autoridad ocasionando una violación de un derecho o libertad se deberá garantizar al lesionado en el goce o su derecho de libertad conculcados, así como disponer la reparación de las consecuencias de la vulneración de dichos derechos y el pago de una justa indemnización.

Menciona, que cada una de las cláusulas descritas están dirigidas a resarcir a las víctimas, no solo en el goce de sus derechos, sino también a modificar las consecuencias producidas por la violación, ya sea en la víctima o a través de cualquier medida o situación que provocó la afectación, es decir, una reparación integral del daño.

Continúa, que el concepto de reparación integral que se desprende del artículo 63.1 en cita, comprende la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial, al mismo tiempo que el otorgamiento de medidas como:

- a). La investigación de los hechos;
- b). La restitución de derechos, bienes y libertades.
- c). La rehabilitación física, psicológica o social.
- d). La satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas.
- e). Las garantías de no repetición de las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

FORMA 105

violaciones, y

f). La indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

Cuestión que, en el contexto constitucional actual, ha sido considerado de cumplimiento obligatorio.

Añade, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 1068/2011, estableció que el derecho a una reparación integral o justa indemnización es un derecho sustantivo que permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y establecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido y de no ser posible, es procedente el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado; que el daño causado es el que determina la indemnización, esto es, dice, que su naturaleza y su monto dependan del daño ocasionado, de manera que las reparaciones no puedan implicar un enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores y, que corresponde al juez, con base en el criterio de razonabilidad, fijar los montos indemnizatorios, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, el valor real de la reparación o de la salud deteriorada, con justicia y equidad.

Sostiene, que en el caso concreto el juez de Distrito no advirtió que los distintos actos y omisiones realizados por las responsables generaron una violación a

los derechos fundamentales de la quejosa, impidiendo una reparación integral del daño.

Concluye, que deben ser tomados en cuenta los precedentes dictados por la Corte Interamericana en materia de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que en el caso *Suárez Peralta vs Ecuador*, en su párrafo 93, estableció que los tribunales nacionales a fin de cumplir con los compromisos en la materia, no deben sacrificar los formulismos, sobre la justicia, como acontece en el caso, que con base en tecnicismos el juzgador deja de pronunciarse sobre el fondo planteado relacionados con la violación a los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, a la vida digna, a la protección de las personas en debilidad manifiesta, como lo es la quejosa.

RECORRIDO JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
EN REVISIÓN

Son fundados los argumentos del representante de la quejosa.

Como se mencionó, el derecho a la salud previsto en el artículo 4 Constitucional, no solo impone deberes al Estado, en el caso, a los hospitales públicos y personal médico, toda vez que, la protección de ese derecho fundamental también incumbe a los particulares que presten ese servicio, como lo son, los hospitales privados, médicos y personal que de alguna manera tiene relación con la prestación hospitalaria, puesto que, en términos de los artículos 1 y 4, Constitucionales, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y



progresividad, por lo que, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El citado numeral establece:

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo 4o.- *El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

(...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. *La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.*

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

(...)"

Bien, a efecto de justificar la conclusión a que se llegara, es indispensable recordar que en cuanto al acto reclamado de incomunicación, éste se acreditó en el juicio de garantías y se estableció que no era procedente su



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sobreseimiento, tomando en consideración los daños ocasionados con ello, a la familia de la paciente.

En esencia, se determinó que esa incomunicación ocasional para visitar a la paciente quejosa, produjo perjuicios a sus familiares pues durante su estadía en la institución hospitalaria sufrió lesiones por negligencia del personal médico, de manera que lejos de mejorar o atenuarse la mala condición de salud de la quejosa, esta se agravó con diversos padecimientos o lesiones que adquirió con motivo de su estancia en el hospital responsable lo que generó preocupación, angustia, incertidumbre y desconfianza de parte de los familiares al conocer el estado de salud de la paciente.

DE LA FEDERACIÓN Se estableció que esa incomunicación fue
OJEGUEN EN MATERIA
EL OJEGUEN
NUEVO LEON
ocasional, toda vez que en los autos del juicio de garantía obra el oficio presentado el veintitrés de septiembre de dos mil quince ante el Juzgado, a través del cual el Director Médico del hospital señalado como responsable, informó que el diecinueve de septiembre del citado año, la paciente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] egresó de dicho nosocomio por decisión del médico tratante y de sus familiares, para ser trasladada al [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] esto es, no durante toda su estancia en el hospital responsable fue objeto de incomunicación, sino sólo en diversas ocasiones en que no se permitió a los familiares acceder al lugar de convalecencia de la quejosa.

Evento que justificó la incomunicación en que se encontraba la paciente.

Por otra parte, en cuanto al acto reclamado de

malos tratos que ocasionaron lesiones, se hace necesario reproducir el dictamen médico y su ampliación del profesionalista designado por el Juez de Distrito, que son del tenor siguiente:

DICTAMEN

CUESTIONARIO: PARTE ACTORA

- 1.- DIRA EL PERITO, QUE LESIONES PRESENTABA [REDACTED] AL INGRESAR EL 3 DE MARZO PASADO AL HOSPITAL RESPONSABLE.
- 2.- DIRA EL PERITO, QUE LESIONES FUERON PRODUCIDAS A LA PACIENTE DURANTE EL INTERNAMIENTO EN EL HOSPITAL RESPONSABLE.
- 3.- DIRA EL PERITO, CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE SE PRODUJERON AMBAS LESIONES.
- 4.- DIRA EL PERITO, PORQUE MOTIVO SE INFIECTO LA COLOSTOMIA DE LA PACIENTE, QUE SE LE PRACTICO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RESPONSABLE.
- 5.- DIRA EL PERITO, PORQUE MOTIVO SE ULCERO EL TALON DERECHO DE LA PACIENTE.
- 6.- DIRA EL PERITO, PORQUE MOTIVO SE PRESENTARON LAS ESCORIACIONES EN LA CABEZA DE LA PACIENTE.
- 7.- EN RELACION A LAS ULTIMAS TRES PREGUNTAS, QUE DIGA EN CUANTO TIEMPO SE DESARROLLAN O EVOLUCIONAN ESTOS EVENTOS O LESIONES.
- 8.- EN RELACION A LAS LESIONES A QUE SE REFIEREN LOS NUMERALES 4, 5, Y 6. QUE DIGA EL PERITO CUANTO TIEMPO TARDAN EN SANAR.
- 9.- DIRA EL PERITO, SI LAS LESIONES QUE PRESENTA LA PACIENTE, TANTO LAS QUE YA PRESENTABAN A SU INGRESO COMO LAS QUE SE PRODUJERON DURANTE SU INTERNAMIENTO Y EN GENERAL LAS QUE PRESENTA, HAN SIDO ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CON LA ATENCION DEBIDA, DE FORMA OPORTUNA, DILIGENTE Y CON PERICIA EXIGIDA.
- 10.- DIRA EL PERITO, SI EN LA ATENCION DE LAS REFERIDAS LESIONES HA EXISTIDO NEGLIGENCIA MEDICA A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- 11.- DIRA EL PERITO, SI EN LAS LESIONES QUE PRESENTA LA PACIENTE, TANTO LAS QUE YA PRESENTABA A SU INGRESO, COMO LAS QUE SE PRODUJERON DURANTE SU INTERNAMIENTO, Y EN GENERAL LAS QUE PRESENTA, HAN SIDO, SUPERVISADAS POR EL MEDICO LEGALMENTE RESPONSABLE (DR. RAUL GARZA BULNES) DEL HOSPITAL SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. ESTO ES, DE MANERA OPORTUNA, DILIGENTE Y CON LA PERICIA QUE EXIGE EL CASO.
- 12.- DIRA EL PERITO, SI LA PACIENTE ES INCAPAZ, ES DECIR, SI TIENE INCAPACIDAD PERMANENTE
- 13.- DIRA EL PERITO LA RAZON DE SU DICHO.

CUESTIONARIO: PARTE DEMANDADA

- 1.- QUE DIGA LOS ANTECEDENTES MEDICOS DE LA PACIENTE [REDACTED]



2.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA PACIENTE [REDACTED] A SU INGRESO AL [REDACTED] EN FECHA 3-TRES DE MARZO DEL 2014-DOS DEL QUINCE.

3.- QUE DIGA LA EVOLUCIÓN DE LOS PADECIMIENTOS [REDACTED]

4.- QUE DIGA LA CAUSA POR LA QUE LA PACIENTE [REDACTED] PRESENTO INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.

5.- QUE DIGA EL TRATAMIENTO MEDICO QUE SE APLICÓ A LA PACIENTE [REDACTED] PARA LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA Y SU JUSTIFICACIÓN.

6.- QUE DIGA LA DESCRIPCIÓN DE LA MASCARILLA ORONASAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA SUS INDICACIONES Y TIPOLOGÍA.

7.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE LA PACIENTE [REDACTED] QUE SE CONSIDERAN UN FACTOR DE RIESGO PARA LA APARICIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PUENTE NASAL Y SU JUSTIFICACIÓN.

8.- QUE DIGA EL MOTIVO POR EL CUAL SE HIZO COLOSTOMIA A LA PACIENTE [REDACTED]

9.- QUE DIGA LAS COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA.

10.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS QUE PREDISPOSIERON LAS COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA.

11.- QUE DIGA LAS CONDICIONES QUE PREDISPONEN LA APARICIÓN DE NUEVAS ÚLCERAS EN LA PACIENTE [REDACTED]

12.- QUE DESCRIBA LOS CONSENTIMIENTOS Y/O INFORMACIÓN QUE EXISTEN EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO DE LA PACIENTE [REDACTED] DEL HOSPITAL [REDACTED]

13.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE SALUD ACTUALES DE LA PACIENTE [REDACTED]

PERITO MEDICO LEGISTA:

MUCHAS VECES, EN LA SECUENCIA DE UN PROCESO PENAL, LOS JUECES SE ENCUENTRAN CON FRECUENCIA ANTE PROBLEMAS CUYA RESOLUCIÓN SE APOYA EN CONOCIMIENTOS ESPECIALES; RECURRIENDO A LOS PERITOS, EN NUESTRO CASO A LOS PERITOS MEDICOS.

PARA SER UN BUEN PERITO MEDICO LEGISTA, SE NECESITA PREPARACIÓN Y CRITERIO ESPECIAL, QUE EL MÉDICO FAMILIARIZADO CON EL ESTUDIO DE LA MEDICINA LEGAL EVITE FALLAS Y FALTAS Y, ADEMÁS LLEGA A ADQUIRIR UN HÁBITO MENTAL QUE ES UNA DE LAS CUALIDADES PRINCIPALES DEL PERITO. SABER DISTINGUIR EN UNA CUESTIÓN LO QUE ESTÁ ENTERAMENTE DEMOSTRADO, DE LO QUE ES PROBABLE, INCIERTO O DUDOSO; EXPLICAR EN UNA FORMA CLARA Y PRECISA CONCLUSIONES QUE CORRESPONDEN EXACTAMENTE A LA OPINIÓN QUE SE DESPRENDE DEL EXAMEN RAZONADO DE LOS HECHOS. EL NO OMITIR, COMO LO HACEN ALGUNOS MÉDICOS ENCARGADOS ACCIDENTALMENTE DE UNA MISIÓN JUDICIAL A REALIZAR ASERCIONES TAN LLENAS DE RESTRICCIONES Y DE RETICENCIAS QUE ELLAS NO SIGNIFICAN NADA, SIENDO IMPOSIBLE AL JUEZ SABER EN QUÉ SENTIDO DICTAMINAR.

UN BUEN PERITO MEDICO LEGISTA NECESITA APRENDER A NO OLVIDAR QUE MUCHAS VECES LAS COSAS MÁS SENCILLAS RESULTAN SER LAS MÁS COMPLICADAS, MIRAR SIEMPRE CON ATENCIÓN, Y LO QUE SE MIRA, VERLO BIEN, JAMÁS HACER HIPÓTESIS, PROCEDER SIEMPRE CON ORDEN, CON MÉTODO, SER SIEMPRE PRUDENTES, IMPARCIALES Y SERENOS EN NUESTROS JUICIOS, NO DEJAR NADA A LA MEMORIA, ANOTAR CON TODA CLARIDAD LOS DATOS QUE VAYAMOS OBTENIENDO, ASÍ, NO EVITAREMOS DE INCURRIR EN PENOSOS OLVIDOS Y CUANDO EL ASUNTO OFREZGA SERIAS DIFICULTADES, RETENER NUESTRO DICTAMEN, VOLVERLO A ESTUDIAR SERENAMENTE Y SI DESPUÉS DE ESTE ESTUDIO, AYUDADOS EN CASOS DIFÍCILES POR OTROS PERITOS, LAS CONCLUSIONES PARECEN CORRECTAS, ENVIARLO A LA AUTORIDAD COMPETENTE. CUANDO SE OPERE ANTE AUTORIDADES O FAMILIARES, DEBEMOS SER TODAVÍA MÁS PRUDENTES, NO EXTERNANDO LAS IMPRESIONES QUE EL CASO NOS PRODUZCA, YA QUE ESTAS PRIMERAS IMPRESIONES PUEDEN VARIAR EN EL CURSO DEL TRABAJO PERICIAL, Y EL RESULTADO BIEN PUEDE SER OPUESTO A LO VERTIDO PRECIPITADAMENTE.

LA FUNCIÓN PERICIAL REQUIERE DE TRES CONDICIONES:

PREPARACION TECNICA

MORALIDAD

DISCRECIÓN

NUESTROS DICTÁMENES NO CREAN OBLIGATORIEDAD, PERO SIEMPRE IMPLICAN UNA PERICIA QUE SE VALORARÁ POR EL JUEZ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS DEMÁS DATOS DEL CASO. LOS DICTÁMENES DEBEN CONCRETARSE ÚNICAMENTE A SEÑALAR EL DAÑO, POR LO TANTO DEBEN ESTAR BIEN FUNDADOS, ADEMÁS DE SER CLAROS, PRECISOS Y CONCISOS.

EL DICTAMEN ES UNA OPINION FUNDADA, Y DEBE CONSTAR DE:

PREAMBULO.

PARTE EXPOSITIVA.

DISCUSION.

CONCLUSION.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EL PREÁMBULO SIRVE DE ENCABEZAMIENTO, NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE SOLICITA EL DICTAMEN Y EL MOTIVO DEL PERITAJE.

LA PARTE EXPOSITIVA ES LA PARTE DESCRIPTIVA DE TODO LO COMPROBADO, EXPUESTO CON DETALLE Y MÉTODO.

LA DISCUSIÓN ES DONDE SE ANALIZAN, SE INTERPRETAN Y SE EXPONEN RAZONES CIENTÍFICAS.

LA CONCLUSIÓN ES LA SÍNTESIS DE LA OPINIÓN PERICIAL, ES DONDE SE RESPONDE CATEGÓRICAMENTE A LAS PREGUNTAS HECHAS. LOS DICTÁMENES NO DEBEN SER NI TIMIDOS NI ATREVIDOS, PERO SIEMPRE DEBEN ESTAR BIEN FUNDADOS.

OCURRIÓ A DICTAMINAR EN MI CARÁCTER DE PERITO MÉDICO CON LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA LEGAL, CON EL OBJETO DE REALIZAR PERICIAL MÉDICO: MEDICINA LEGAL, EN LA QUE SE DEBE ESTABLECER, SI EN BASE AL EXPOSICIÓN CLÍNICO MÉDICO DE LA PACIENTE [REDACTED] DEL HOSPITAL CRISTUS MUJERES ORIENTE CON NÚMERO DE CUENTA 36922 Y, DETERMINAR SI LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA PRESTADA A LA PACIENTE FUE ACORDE A SU PATRÓN DE ATENCIÓN Y A LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS POR LO TANTO Y EN BASE AL ANÁLISIS VALUACIÓN Y ESTUDIO DEL EXPOSICIÓN CLÍNICO MÉDICO DE LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS CON NÚMERO DE CUENTA 36922 EN EL HOSPITAL CRISTUS MUJERES ORIENTE LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE EL LUNES 16 DE MARZO DE 2015 AL VIERNES 19 DE MARZO Y OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 DEL CORAZO EN UN HORARIO DE LAS CINCO NUEVE HORAS HASTA LAS 14:00 CATORCE HORAS APROXIMADAMENTE Y, ASÍ PODER DAR RESPUESTA A LOS CUESTIONARIOS SOLICITADOS CON ANTERIORIDAD.

CONSIDERACION MÉDICA LEGAL:

EN EL PRESENTE CASO SE TRATA DE LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS, FEMENINA DE 59 AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES DE DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL, LEUCOENCEFALOPATÍA POR HEMORRÁGICA, CON MICROCEFALIA, NORMOTENSA Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE DERRIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL, CON INFECCIÓN URINARIA, ANEMIA, DATOS SUGESTIVOS DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA POR LABORATORIO. INGRESA EL 3 DE MARZO DEL 2015 AL HOSPITAL CRISTUS MUJERES ORIENTE, POR PRESENTAR ÚLCERAS DE DECÚBITO EN REGIÓN SACRA, EN TALÓN DERECHO Y EN PIERNAS IZQUIERDAS SE REALIZÓ COLOSTOMÍA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN CONSTANTE DE LA ÚLCERA SACRA LA CUAL CURSO CON DEHISCENCIA DE LA UNIÓN MUCOCUTÁNEA QUE PROVOCÓ LA CONTAMINACIÓN DE LOS TEJIDOS POR ACINETOBACTER BAUMANNII CON FORMACIÓN DE ABSCESO E INFECCIÓN

DE TEJIDOS ABDOMINALES QUE AMERITO EL USO DE ANTIBIOTICOS DE AMPLIO ESPECTRO, PRESENTO 3-TRES CUADROS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CON COLOCACION DE MASCARILLA ORONASAL QUE LE CAUSA ULCERA EN EL DORSO NASAL POR FALTA DE SUPERVISION ADECUADA. CON INSUFICIENCIA RENAL AGUDA QUE AMERITO LA REALIZACION DE HEMODIALISIS Y PRESENCIA DE UNA ULCERA EN TALON DERECHO POR LA FALTA DE MOVILIZACION, ASI COMO LA REACTIVACION DE LA ULCERA SACRA Y DEL TALON, POR FALTA DE SUPERVISION ADECUADA. CURSO CON UNA INFECCION INTRA HOSPITALARIA, POR ACINETOBACTER BAUMANNI, POR CANDIDA Y CON UNA NEUMONIA BASAL IZQUIERDA, LAS TRES DE TIPO INTRAHOSPITALARIA, LO QUE AMERITO EL USO DE ANTIBIOTICOS NEFROTOXICOS COMO SON ANFOTERICINA, VANCOMICINA MEROPENEM, EQUINOCANDINA, LINEZOLID FLUCONAZOL, LO QUE HIZO DE MANIFIESTO LA SUGESTIVA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y ORIGINA QUE SE HAGA PRESENTE CON SIGNOS Y SINTOMAS, AMERITANDO EL USO FRECUENTE DE HEMODIALISIS.

CUESTIONARIO: PARTE ACTORA

1.- DIRA EL PERITO, QUE LESIONES PRESENTABA [REDACTED] AL INGRESAR EL 3 DE MARZO PASADO AL HOSPITAL RESPONSABLE.

EN BASE AL EXPEDIENTE CLINICO Y MEDICO QUE SE ME PROPORCIONO. APLICANDO LA NORMA NOM-004-SSA3-2012, DEL EXPEDIENTE CLINICO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL AÑO 2012. MÁS QUE LESIONES, SE DEBEN CONSIDERAR COMO PÉRDIDA DE LA CONTINUIDAD DE LA PIEL, SECUNDARIAS A PRESION EJERCIDA POR EL PESO PROPIO, DE ESA PARTE DEL CUERPO DE LA PACIENTE, SE LOCALIZAN: LA REGION SACRA, EN EL TALON DERECHO Y EN PIERNA IZQUIERDA.

2.- DIRA EL PERITO, QUE LESIONES FUERON PRODUCIDAS A LA PACIENTE DURANTE EL INTERNAMIENTO EN EL HOSPITAL RESPONSABLE.

CRONOLOGICAMENTE Y EN BASE A LO ENCONTRADO EN EL EXPEDIENTE CLINICO CON NUMERO DE CUENTA 302622: EL UNO DE MAYO DEL 2015 SE REPORTA UN HEMOCULTIVO CON HALLAZGOS DE ACINETOBACTER, POR EL DR. MARIO A CAVAZOS. EL 3-TRES DE JUNIO 2015 SE REPORTA POR EL DR. F. MARTINEZ Y EL DR. JAIME ZUÑIGA NORIEGA, EN LA SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, UNA ULCERA NECROTICA EN EL DORSO DE LA NARIZ Y EN LA MEJILLA, SECUNDARIAS AL ABUSO Y MAL USO DE LA MASCARILLA DE OXIGENO. EL 9-NUEVE DE JUNIO DEL 2015 SE REPORTA POR LOS MEDICOS TRATANTES PRESENCIA DE LA BACTERIA ACINETOBACTER DEL CULTIVO DE LA HERIDA ABDOMINAL. SE CONSIDERA UNA INFECCION DEL TIPO INTRAHOSPITALARIA, ALTAMENTE PATOGENA EN EL AREA DESCRITA. EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015, SE CONFIRMA EL REPORTE DE INFECCION INTRAHOSPITALARIA CON LA BACTERIA ACINETOBACTER BAUMANNII, LA CUAL ES UNA BACTERIA PATOGENA GRAM NEGATIVA, RESISTENTE A LA MAYORIA DE

LOS ANTIBIOTICOS, PUDIENDO OCASIONAR NEUMONIA Y OTRO TIPO DE INFECCION EL DIFERENTES APARATOS Y SISTEMAS DE LA PACIENTE, COMO EN LAS VIAS URINARIAS O HEMATOLOGICAS. ASI MISMO, SE REACTIVA LA PERDIDA DE CONTINUIDAD DE LA PIEL EN EL TALON DERECHO. SE ORIGINA UNA LESION EN EL TALON DERECHO Y EN LA PIERNA IZQUIERDA EL DIA 19 DE MAYO DEL 2015.

3- DIRA EL PERITO, CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE SE PRODUCIERON AMBAS LESIONES.

AMBAS ULCERACIONES, LAS DEL DORSO DE LA NARIZ Y LA DEL TALON DERECHO, SE PRODUCIERON POR LA PRESION SUPRADA SOBRE LA PIEL DE ESOS SITIOS, EN EL PRIMER CASO, POR EL MAL USO Y ABUSO DE LA MASCARILLA NASAL, OCASIONANDO UNA PRESION MAYOR Y CONTINUA DE LA MASCARILLA DE ARTICULACION ORONASAL SOBRE LA PIEL DEL DORSO DE LA NARIZ, ASI COMO LA FALTA DE MOVILIZACION Y SUPERVISION DE LA MASCARILLA NASAL Y EL AUMENTO DE LA PRESION SOBRE LA PIEL DEL DORSO NASAL Y LA FALTA DE MOVILIZACION Y SUPERVISION DE LA MISMA. EN EL SEGUNDO CASO, EN EL TALON DERECHO Y LA PIERNA IZQUIERDA, POR LA FALTA DE MOVILIZACION Y ATENCION OPORTUNA DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y MEDICO, OCASIONADO QUE EL PESO DE LA PARTE DEL CUERPO DE LA PACIENTE Y LA SUPERFICIE DE LA CAMA. PERO EN AMBAS LESIONES, LA CAUSA PRINCIPAL ES NO TENER UN LINEAMIENTO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD DE LA PACIENTE, NI A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, POR LA FALTA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCION DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS.

4- DIRA EL PERITO, PORQUE MOTIVO SE INFIERTO LA COLOSTOMIA DE LA PACIENTE QUE SE LE PRACTICO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL RESPONSABLE.

EN BASE A MI EXPERIENCIA, LA HERIDA QUIRURGICA SE CONTAMINO, LA INFECCION FUE SECUNDARIA A LA RUPTURA DE LA UNION DE LA PIEL ABDOMINAL CON LA MUCOSA DEL COLON. ESTAS SE ENCUENTRAN UNIDAS DESDE EL MOMENTO DE LA CIRUGIA Y AL QUEDAR EXPUESTO EL TEJIDO RESPECTIVO QUE SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE AMBOS EPITELIOS, LAS MULTIPLES BACTERIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MATERIAL INTESTINAL QUE SE EVACUA POR DICHA COLOSTOMIA, TIENEN LA OPORTUNIDAD DE ENTRAR AL TEJIDO CONECTIVO EXPUESTO Y DESARROLLAR LOS FENOMENOS DE INFLAMACION CON PRESENCIA DE EDEMA Y FORMACION MATERIAL PURULENTO, LO CUAL AUMENTA EL VOLUMEN DEL TEJIDO Y ESTIRAN AUN MAS LA UNION DE LA PIEL CON LA MUCOSA. ESTA RUPTURA SE PRODUJO POR UN MANEJO INADECUADO EN LA MOVILIZACION DE LA PACIENTE DURANTE LAS CURACIONES, DURANTE SU ASEO O DURANTE EL RECAMBIO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, EL QUE NO SE RESUELVA LA INFECCION DE MANERA OPORTUNA, CON ASEPSIA, CUIDADOS, Y CON LA PERICIA NECESARIA, EL EDEMA CONTINUARA SEPARANDO LA UNION MUCO-CUTANEA Y SE TIENE MAYOR AREA POR DONDE PUEDEN ENTRAR MAS BACTERIAS, LO CUAL AGRAVARIA EL

PROCESO INFECCIOSO. LA PACIENTE [REDACTED] PRESENTABA FACTORES DE RIESGO, POR TAL MOTIVO, SE DEBIO TENER MUCHO MAS CUIDADO, ATENCION, VALORACION Y RESPUESTA MEDICA. MOTIVO POR EL CUAL OCASIONO UN RESULTADO PERJUDICIAL Y ALTERACION DE SU ESTADO DE SALUD, PONIENDO EN RIESGO SU VIDA.

5.- DIRA EL PERITO, PORQUE MOTIVO SE ULCERO EL TALON DERECHO DE LA PACIENTE. DEFINITIVAMENTE POR UNA MALA ATENCION, SUPERVISION Y VALORACION DE LA PACIENTE [REDACTED] SE ORIGINO UNA PRESION SOSTENIDA DEL TALON DERECHO DE LA PACIENTE SOBRE LA SUPERFICIE DEL COLCHON, LA CUAL AFECTO, DISMINUYENDO EL RIESGO SANGUINEO EN EL AREA, ASI COMO LA INMOVILIDAD, ALTERACIONES RESPIRATORIAS, LA RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS, OCASIONANDO NECROSIS DEBIDO A LA FALTA DE CIRCULACION SANGUINEA, ESTA FALTA DE CIRCULACION SE DEBIO A LA PRESION QUE EJERCIO EL PESO DEL CUERPO EN FORMA DEL SITIO POR EL TIEMPO PROLONGADO Y QUE DEBIO HABERSE EVITADO, MOVILIZADO A LA PACIENTE EN FORMA CONTINUA, QUE ES LA MANERA INDICADA PARA EVITAR ESTAS ULCERACIONES.

6.- DIRA EL PERITO, PORQUE MOTIVO SE PRESENTARON LAS ESCORIACIONES EN LA CARA DE LA PACIENTE.

ESTO FUE DEBIDO A QUE LA PIEL QUE EXISTE EN DICHO SITIO, SUFRIO NECROSIS DEBIDO A LA FALTA DE CIRCULACION SANGUINEA. ESTA FALTA DE CIRCULACION, SE DEBIO A LA PRESION QUE EJERCIO LA MASCARILLA DE VENTILACION NO INVASIVA ORONASAL POR TIEMPO PROLONGADO Y QUE PUDO HABERSE EVITADO, SI A LA PACIENTE SE LE HUBIERA MOVILIZADO O RETIRADO LA MASCARILLA EN FORMA CONTINUA, PARA EVITAR DICHAS ULCERACIONES.

7.- EN RELACION A LAS ULTIMAS TRES PREGUNTAS, QUE DIGA EN CUANTO TIEMPO SE DESARROLLAN O EVOLUCIONAN ESTOS EVENTOS O LESIONES.

EL TIEMPO PUEDE SER VARIABLE Y DEPENDE DE LA MAGNITUD DE LA FUERZA EJERCIDA CONTRA LA PIEL, LA CUAL PUEDE OCLUIR PARCIALMENTE O DE MANERA TOTAL LA CIRCULACION Y, ESTO PUEDE VARIAR DESDE UNA HORA HASTA LAS 2 HORAS, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE LA SUPERVISION Y LA MOVILIZACION DE LA PACIENTE Y DE LAS MASCARILLAS SE ESTE REALIZANDO EN TIEMPO MINIMO: CADA 30-TREINTA MINUTOS, PARA QUE NO SUCEDAN ESTAS ULCERACIONES.

8.- EN RELACION A LAS LESIONES A QUE SE REFIEREN LOS NUMERALES 4, 5, Y 6, QUE DIGA EL PERITO CUANTO TIEMPO TARDAN EN SANAR.

EL TIEMPO PUEDE VARIAR MUCHO, PUESTO QUE LO QUE FAVORECE PARA UNA RAPIDA CURACION DE LAS LESIONES, ES QUE LOS TEJIDOS ESTEN RECIBIENDO UNA BUENA CIRCULACION SANGUINEA CON BUENA CANTIDAD Y CALIDAD DE NUTRIENTES Y BUENOS NIVELES DE OXIGENO. SI ESTO SUCEDE, LA CURACION PUEDE ACCEDER EN TIEMPOS DE 3 A 7 DIAS DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA ZONA ULCERADA, PERO SI LOS PACIENTES

PRESENTAN PROBLEMAS EN LA CIRCULACION COMO PASA EN LOS PACIENTES DIABETICOS O CON ATEROSCLEROSIS CUANDO SE ENCUENTRAN DESNUTRIDOS O NO SE PUEDEN MOVILIZAR POR SI MISMOS O POR OTRAS PERSONAS, ESTAS PERSONAS SE VUELVEN CRONICAS, POR LO QUE PUEDEN TARDAR MESES EN SANAR O NO SANAR NUNCA Y ESTO PUEDE SER QUE SEA UN SITIO DE ENTRADA DE MICROORGANISMOS QUE PUEDEN CAUSAR PROCESOS INFECCIOSOS QUE AGRAVEN EL ESTADO DE SALUD DE LA PACIENTE.

9.- DIRA EL PENTO, SI LAS LESIONES QUE PRESENTA LA PACIENTE, TANTO LAS QUE YA PRESENTABA A SU INGRESO COMO LAS QUE SE PRODUCIERON DURANTE SU INTERNAMIENTO, Y EN GENERAL LAS QUE PRESENTA, HAN SIDO ATENDIDAS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CON LA ATENCION DEBIDA, DE FORMA OPORTUNA, DIGNA Y CONSERVANDO SU DIGNIDAD.

LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS AL INGRESAR AL HOSPITAL CRISTUS INGUERZA CONCHITA PRESENTABA ANTERIORES LESIONES, TANTO PATOLOGICAS COMO NO PATOLOGICAS. ADICIONALMENTE DE LO ANTERIOR, UN HOSPITAL DEBE CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO, ENTRENADO Y CAPACITADO PARA PROPORCIONAR UN BIENESTAR A LOS PACIENTES Y MANTENER EL MEJOR ESTADO DE SALUD. Y ESTE HOSPITAL NO CUMPLIA CON ESTA NORMATIVIDAD, A PESAR DE SER UN HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD. LO MAS IMPORTANTE, TENER EL CARACTER DE HOSPITAL MEDICO PRIVADO. EN RESPUESTA A SU PREGUNTA, LAS LESIONES QUE PRESENTABA LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS EN SU INGRESO SI FUERON DIAGNOSTICADAS, PERO DURANTE SU INTERNAMIENTO EN EL REFERIDO HOSPITAL, LAS LESIONES QUE SE PRODUCIERON, LA ULCERA EN EL TALON DERECHO, ULCERA TRAUMATICA EN EL DORSO NASAL Y, LA RUPURA DE LA COLOSTOMIA SE DEBIERON A UNA INFECCION INTRAHOSPITALARIA A UNA BACTERIA, FUERON TRATADAS EN FORMA LENTA, TARDIA Y CON FALTA DE PERICIA Y DILIGENCIA QUE LE CORRESPONDE AL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA ASIGNADO A LA REFERIDA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS.

10.- DIRA EL PENTO SI EN LA ATENCION DE LAS REFERIDAS LESIONES HA EXISTIDO NEGLIGENCIA MEDICA O COMO OTRAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

EXISTE NEGLIGENCIA POR PARTE DEL HOSPITAL CRISTUS INGUERZA CONCHITA, TANTO EN EL AREA MEDICA COMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA, POR UNA FALTA DE SUPERVISION DIARIA, CONSTANTE Y ADECUADA EN LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO AFECTADAS DE LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS, ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DEL DORSO DE LA NARIZ, EN LA PIERNA Y TALON DERECHO, TENIENDO COMO CONSECUENCIA UNA MAYOR EXTENSION DE LAS LESIONES Y POR LO TANTO AUMENTO EL TIEMPO PARA SU CURACION, ASI COMO EN LA INSUFICIENCIA RENAL E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA QUE SE LE PRESENTARON DURANTE SU ESTANCIA EN EL MENCIONADO HOSPITAL CRISTUS INGUERZA CONCHITA. LA PACIENTE [REDACTED]





FLUROCONAZOL, SE CONSIDERA QUE EL AGRAVAMIENTO A LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA QUE LA HICIERON SINTOMÁTICA Y QUE AMERITA HEMODIALISIS FRECUENTES. EN BASE A TODO LO ANTERIOR, CONSIDERO QUE SI EXISTE NEGLIGENCIA MÉDICA POR PARTE DEL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL CHRISTUS INGUERZA CONCHITA.

11.- DIRA EL PERITO, SI EN LAS LESIONES QUE PRESENTA LA PACIENTE, TANTO LAS QUE YA PRESENTABA A SU INGRESO, COMO LAS QUE SE PRODUCIERON DURANTE SU INTERNAMIENTO, Y EN GENERAL LAS QUE PRESENTA, HAN SIDO SUPERVISADAS POR EL MÉDICO LEGALMENTE RESPONSABLE (DR. RAUL GARZA BULNES) DEL HOSPITAL SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. ESTO ES, DE MANERA OPORTUNA, DILIGENTE Y CON LA PERCA QUE ENDE EL CASO.

EL DR. RAUL GARZA BULNES, EN BASE AL ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL CHRISTUS INGUERZA CONCHITA, DE NUESTRO PARTICULAR, ES EL DIRECTO MÉDICO GENERAL, LE CORRESPONDE SER LA MÁXIMA AUTORIDAD RESPONSABLE, TANTO DEL ÁREA MÉDICA COMO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA. POR LO TANTO, AL ENCONTRARSE UNA MALA ATENCIÓN Y OBSERVARSE UNA FALTA DE ATENCIÓN POR UNA PARTE DEL PERSONAL A SU CARGO, QUE ATENDIÓ EN FORMA DIRECTA A LA PACIENTE [REDACTED]

DE LA
MEGAD
UN MATERN
EL PARTO CIRCULAR
MUEVO
POR CONSECUENCIA EL REFERIDO DR. RAUL GARZA BULNES NO TUVO LA OPORTUNIDAD DE SUPERVISAR Y MUCHO MENOS, VALORAR, EL ESTADO DE SALUD DE LA PACIENTE.

CONSIDERANDO, SI LA PACIENTE ES INCAPAZ, ES DECIR, SI TIENE INCAPACIDAD PERMANENTE.

ES IMPORTANTE DEFINIR EL TÉRMINO INCAPAZ, Y MUCHO MÁS RELEVANTE EL TÉRMINO INCAPACIDAD PERMANENTE. EN EL CASO QUE NOS OCUPA, UNA PACIENTE FEMENINA DE 59 CINCUENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD, CON ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y NO PATOLÓGICOS QUE CORRESPONDEN A LA ETAPA DE SU VIDA. CLÍNICAMENTE PRESENTA UNA LEUCOENCEFALOPATÍA CON HIDROCEFALIA NO HIPOTENSA TRATADA CON VALVULA DE LA DERIVACIÓN VENTRÍCULO-PERITONEAL, ACOMPAÑADA DE UNA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA QUE SE TRATABA CON HEMODIALISIS CONTINUAS. SE DIAGNOSTICA COMO UNA PACIENTE DEPENDIENTE DE UN ASISTENTE EN MEDICINA PARA LA REALIZACIÓN DE SUS NECESIDADES FISIOLÓGICAS. POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ESTABLES Y CON UN PRONÓSTICO BUENO PARA LA SALUD Y BUENO PARA LA VIDA.

12.- DIRA EL PERITO LA RAZÓN DE SU DICHO.

EN BASE AL ANÁLISIS, VALORACIÓN Y ESTUDIO DEL EXPEDIENTE CLÍNICO MÉDICO DE LA PACIENTE [REDACTED] CON NÚMERO DE CUENTA: 302622, EN EL [REDACTED]

[REDACTED] LOS DÍAS COMPRENDIDOS DESDE EL LUNES 14- CATORCE DE DICIEMBRE AL VIERNES 18-DIEZ Y OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015-DOS

MIL QUINCE, EN UN HORARIO DE LAS 9:00-NUEVE HORAS HASTA LAS 14:00-CATORCE HORAS APROXIMADAMENTE, DONDE SE ME PROPORCIONARON 4-CUATRO TOMOS CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE MEDICO DE LA REFERIDA PACIENTE. ASI COMO A LOS MAS DE 15-QUINCE AÑOS DE CONOCER, ESTUDIAR Y PRACTICAR LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA LEGAL, TOXICOLOGICA Y FORENSE.

CUESTIONARIO: PARTE DEMANDADA

1.- QUE DIGA LOS ANTECEDENTES MEDICOS DE LA PACIENTE [REDACTED]
SE TRATA DE UNA PACIENTE FEMENINA DE 59 AÑOS DE EDAD, CON EDAD IGUAL A LA CRONOLOGICA, CON ANTECEDENTES DE DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL, LEUCOENCEFALOPATIA POR MICROANGIOPATIA, CON HIDROCEFALIA NORMOTENSA Y COLOCACION DE VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL. INGRESA EL 3 DE MARZO DEL 2015 AL [REDACTED] STUS [REDACTED]

2.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA PACIENTE [REDACTED]
SU INGRESO AL HOSPITAL [REDACTED]
MARZO DEL 2015 DOS MIL QUINCE.

PACIENTE FEMENINA CONCIENTE, SIGNOS VITALES PRESENTES Y ESTABLES, CON IMPOSIBILIDAD PARA LA MARCHA, DENTRO DE SUS ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS Y NO PATOLOGICOS, ASI COMO SU EDAD, LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS INGRESO CON UNA BUENA CONDICION DE SU ESTADO DE SALUD AL [REDACTED]
[REDACTED]

3.- QUE DIGA LA EVOLUCION DE LOS PADECIMIENTOS DE [REDACTED]
DESDE SU PRIMER DIA DE INGRESO, QUE INICIO EL DIA 3 DE MARZO DE 2015 CON LA CURACION DE UNAS ULCERAS, LA APLICACION DE ANTIBIOTICOS Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE LA PRESION ARTERIAL ALTA Y DE LA DIABETES. DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS, LA PACIENTE [REDACTED] PRESENTO UN DETERIORO DE SU ESTADO DE SALUD INICIAL: CON EVACUACIONES DIARREICAS, CONTAMINANDO EL AREA DE LA ULCERA SACRA Y EL AREA GENITOURINARIA, CON DETERIORO NEUROLOGICO E INFECCION DE VIAS URINARIAS POR CANDIDA EL 11 DE MARZO DE 2015. AGREGANDOSE TRATAMIENTO ANTIFUNGICO, CONTINUADO CON NEUROLOGICO COMPROBANDOSE CANDIDA EN CATETER CENTRAL. PRESENTA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2015. EN EL 13 DE ABRIL DE 2015 SE LE REALIZA COLOSTOMIA Y EL 21 DE ABRIL A LAS 11 HORAS ANTE UNA CURACION SE DESPEGA LA

PODER JUDICIAL
MONTERRRE



781

BARRERA DE LA COLOSTOMIA Y ES HASTA LAS 19:30 HORAS CUANDO SE ENCUENTRA INFILTRACION DE MATERIA FECAL. SE REvisa EN QUIROFANO Y SE ENCUENTRA ABSCESO ESTOMACAL, GELATITIS Y FASEITIS. CONTINUA CON PROCESO SEPTICO ABDOMINAL Y DESARROLLA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. EL 24 DE ABRIL 2015 SE REALIZA LAPAROTOMIA PARA REVISION DE CAVIDAD ABDOMINAL Y APLICACION DE COLOSTOMIA. EL 1 DE MAYO DE 2015 SE REPORTA ACINETOBACTER BAUMANNII EN CATETER CENTRAL. EL 15 DE MAYO SE TUVO QUE CONECTAR A UN RESPIRADOR POR AGRAVARSE SU INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. EL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 SE REPORTA UNA ZONA INFLAMADA EN EL TALON DERECHO. EL 20 DE MAYO SE RETIRA DE VENTILADOR MECANICO POR MEJORA. EL 23 DE MAYO SE DETECTA UNA NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA BASAL DERECHA Y ASI CONTINUA HASTA EL 1 DE JUNIO, CUANDO SE DESARROLLA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR LO QUE SE DETECTA ULCERA EN DORSO NASAL DEJANDO AL MAL USO Y ABUSO DE LA MASCARILLA ORO-NASAL. EL DIA 5 DE JUNIO SE AGRAVA LA INSUFICIENCIA RENAL. SE COLOCA CATETER DE MAHURKAR Y SE INICIA HEMODIALISIS. EL DIA 8 DE JUNIO SE INTUBA Y SE INICIA LA VENTILACION MECANICA INVASIVA CON RESPIRADOR. EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2015 EN QUE SE LE REALIZA UNA TRAQUEOSTOMIA. CONTINUA LA VENTILACION MECANICA EL 25 DE JUNIO YA SIN NEUMONIA ASERADO POR LA TRAQUEOSTOMIA. EL 1 DE JULIO DEL 2015 INICIA ALIMENTACION EN PERIDA POR VIA ORAL POR TODO LO ANTERIORMENTE OBSERVADO Y SEÑALANDO ES EVIDENTE QUE LA PACIENTE [REDACTED] DURANTE TODA LA ESTANCIA EN EL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, PRESENTO UN DETERIORO DE SU ESTADO DE SALUD Y ORIGINANDOLE INSUFICIENCIAS DE VARIOS ORGANOS Y SISTEMAS, COMO SON LOS ORGANOS Y EL SISTEMAS: RESPIRATORIO Y RENAL.

L. DE
COLE
DEL C
Y, NUEVO

JEVO LEON

4. QUE DIGA LA CAUSA POR LA QUE LA PACIENTE [REDACTED] PRESENTO INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.

DURANTE SU ESTANCIA HOSPITALARIA EN EL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, LA PACIENTE PRESENTO VARIOS CUADROS CLINICOS COMPATIBLES CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. EL PRIMERO DE ELLOS FUE EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015, SECUNDARIO AL PROCESO SEPTICO DE LA PARED ABDOMINAL. LA SEGUNDA OCASION, FUE EL DIA 10 DE MAYO, SECUNDARIO A UN PROCESO SEPTICO INTRAABDOMINAL QUE SE QUEDO ALMACENADO Y POR ULTIMO, EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2015, SE LE DIAGNOSTICO INSUFICIENCIA RESPIRATORIA SECUNDARIA A NEUMONIA BASAL IZQUIERDA, DE ORIGEN INTRA HOSPITALARIO.

5. QUE DIGA EL TRATAMIENTO MEDICO QUE SE OTORGÓ A LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS PARA LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA Y SU JUSTIFICACION.

EL 24 DE ABRIL SE DIO ANTIBIOTICOTERAPIA, OXIGENO Y BRONCODILADORES. EL 10 DE MAYO SE INDICO ANTIBIOTICOS, SE INTUBO ORO TRACHEALMENTE Y SE COLOCO EN VENTILACION MECANICA INVASIVA SE APLICO ANTIBIOTICOS Y VENTILACION MECANICA NO INVASIVA CON MASCARILLAS ORONASAL Y FACIAL. ES CUANDO SE PRESENTO LA ULCERA EN EL DORSO DE LA NARIZ Y DEJANDOLE UNA CICATRIZ VISIBLE.

6.- QUE DIGA LA DESCRIPCION DE LA MASCARILLA ORONASAL PARA VENTILACION INVASIVA, SUS INDICACIONES Y RIESGOS.

SON INSTRUMENTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MATERIALES QUE SE APLICAN SOBRE EL AREA NASAL Y SON FLEXIBLES Y CONTIENEN ESPACIO PARA LA ADMINISTRACION DE OXIGENO, CON TIRAS DE MATERIAL ELASTICO GORROS PARA SU FIJACION A LA CABEZA Y CONTIENEN MATERIALES NO AGRESIVOS PARA LA PIEL, EN EL SITIO DE CONTACTO CON LA PIEL Y QUE SON DE GEL O SILICON SE LES PUEDE DAR LA FORMA ADECUADA PARA QUE PASAEN A LA CARA Y SELLEN DE MANERA EFECTIVA SE INDICAN PARA LA OXIGENOTERAPIA POR TIEMPOS CORTOS Y, LOS PACIENTES CON CIERTO NIVEL DE CONCIENCIA, LOS RIESGOS QUE PRESENTAN DURANTE SU HUSO EN LA QUE PRESENTAN POR EL CONTACTO Y LA PRESENTACION DE ULCERAS CUTANEAS CUANDO LA PRESION ES INTENSA Y NO SE MOVILIZAN EN FORMA CONTINUA POR LO QUE DEBEN SER SUPERVISADAS CONTINUAMENTE POR EL PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA

7.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS, QUE SE CONSIDERAN UN FACTOR DE RIESGO PARA LA APARICION DE ULCERAS POR PRESION EN PUENTE NASAL Y SU JUSTIFICACION.

UN FACTOR DE RIESGO POR PARTE DE LA PACIENTE, PUEDE SER, EL QUE SE ENCUENTRE DISMINUIDO SU ESTADO DE CONCIENCIA, POR LO TANTO, NO LE PERMITIRA DETECTAR EL ESTADO DE PRESION INTENSO Y PROLONGADO, POR LO QUE DEPENDE POR COMPLETO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE DEBE SER EL QUE SE ENCARGUE DE SUPERVISAR LA APARICION Y COMPLICACIONES EN LA OXIGENACION DE LA PARTE AFECTADA DE LA PIEL DE LA PACIENTE INDEPENDIENTEMENTE DE LOS FACTORES DE RIESGO, COMO EL ESTADO DE SALUD Y LA EDAD DE LA PACIENTE. NO ES ACEPTABLE QUE SE PRESENTEN ULCERAS POR DECUBITO SECUNDARIAS A PRESION EN UN HOSPITAL DE TIPO PRIVADO, COMO LO ES EL [REDACTED]

8.- QUE DIGA EL MOTIVO POR EL CUAL SE INDICO COLOSTOMIA A LA PACIENTE [REDACTED]

LA INDICACION DE LA COLOSTOMIA FUE DEBIDA A LA CONTAMINACION CONSTANTE CON EXCREMENTO DE LA ULCERA SACRA Y DEL AREA GENITOURINARIA. CON LA INTENCION DE ABRIR UN ORIFICIO ALEJADO DE LA ZONA SACRA Y GENITOURINARIA A TRAVES DEL CUAL SE PUDIERA EXPULSAR EL MATERIAL FECAL Y ASI YA NO CONTAMINAR LA ZONA ULCERADA Y, FACILITAR SU CICATRIZACION. EVITANDO NUEVAS INFECCIONES DE LA VIAS URINARIAS.

9.- QUE DIGA LAS COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA.

COMO TODO PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, SE PUEDEN PRESENTAR COMPLICACIONES. EL PRINCIPAL Y MAS FRECUENTE, SON LAS HEMORRAGIAS Y HEMATOMAS EN EL MOMENTO INMEDIATO A SU CANALIZACION. EN SEGUNDO LUGAR LA COMPLICACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MÁS FRECUENTE SON LAS INFECCIONES, EN LAS ÁREAS CERCANAS Y, POR ÚLTIMO, UNA NECROSIS DEL ESTOMA. OTRO TIPO DE COMPLICACIÓN QUE SE PRESENTA, PERO EN MENOR FRECUENCIA, SON: OCCLUSIÓN POR EDEMA Y FIBROSIS, LUZ INSUFICIENTE PARA LA EVACUACIÓN, RETRACCIÓN DEL ESTOMA, EVISCERACIÓN EN EL ÁREA PERIESTOMAL, DERMATOSIS DE LA PIEL VECINA Y DERMISCENCIA MUCOCUTÁNEA EN PARTE O TODA LA CIRCUNFERENCIA. MÁS TARDIAMENTE PUEDE HABER PROLAPSO A TRAVÉS DEL ESTOMA, OCCLUSIÓN POR FIBROSIS, HERNIAS PARAESTOMALES, APARICIÓN DE TUMORES Y PSEUDOTUMORES.

10.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS QUE PREDISPUERON LAS COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA.

LA DERMISCENCIA DE LA UNIÓN MUCOCUTÁNEA SE PRODUJO AL SER MOVILIZADA PARA REALIZARLE ATRACCIÓN DE SUS ZONAS ULCERADAS, ASÍ COMO LA INFECCIÓN INTRA HOSPITALARIA POR LA BACTERIA DETECTADA EN EL CULTIVO.

11.- QUE DIGA LAS CONDICIONES QUE PREDISPUERON LA APARICIÓN DE NUEVAS ULCERAS EN LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS.

LA FALTA DE MOVILIZACIÓN DIARIA Y CONTINUA DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA. A PESAR DE LA GRADUACIÓN DE SALUD DE LA PACIENTE, ES IMPORTANTE LA MOVILIZACIÓN CONSTANTE POR EL PERSONAL MÉDICO ASISTENCIAL EN ENFERMERÍA DEBE PRACTICARSE CADA 2 DOS HORAS COMO MÍNIMO.

EL EXPEDIENTE CLÍNICO ES UN DOCUMENTO MÉDICO LEGAL, QUE FORMA PARTE DE LA HISTORIA MÉDICA DE UN PACIENTE AL INGRESAR A UN HOSPITAL, YA SEA PARTICULAR, COMO ES EL CASO QUE NOS OCUPA, O DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, SEA DE CONCENTRACIÓN O DE ALTA ESPECIALIDAD. DENTRO DEL PROTOCOLO DE ADMISIÓN DE UN PACIENTE, PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO O DE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO SE REQUIEREN CONSENTIMIENTOS POR ESCRITO DE LA PACIENTE O DE SU FAMILIA. MÁS CERCANO POR LO TANTO AL VALORAR EL EXPEDIENTE MÉDICO CLÍNICO DE LA PACIENTE [REDACTED] CON CUENTA NÚMERO 302622 SE LOCALIZARON UN SIN NÚMERO DE CONSENTIMIENTOS POR ESCRITO DE LOS FAMILIARES DE LA PACIENTE.

12.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE SALUD ACTUALES DE LA PACIENTE [REDACTED]

LA PACIENTE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL [REDACTED] FORMA FAVORABLE Y, RECUPERÁNDOSE DE SU MAL ESTADO DE SALUD EN QUE SE ENCONTRABA AL SALIR DEL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA.

13.- QUE DIGA LAS CONDICIONES DE SALUD ACTUALES DE LA PACIENTE [REDACTED]

LA PACIENTE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL [REDACTED] FORMA FAVORABLE Y, RECUPERÁNDOSE DE SU MAL ESTADO DE SALUD EN QUE SE ENCONTRABA AL SALIR DEL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA.

EN LA ACTUALIDAD: SU FUNCION RENAL ESTA ALTERADA, DEBIDO A LAS CONDICIONES PARTICUARES DE LA PACIENTE [REDACTED] POSIBLE RECUPERACION DE SUS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS SERA LENTA Y SE DEBE ESPERAR MAS TIEMPO. PRIMERO: QUE LA ULCERA SACRA LEGUE A CICATRIZAR EN SU TOTALIDAD, PARA PODER REALIZAR EL CIERRE DE LA COLOSTOMIA Y, DE LA TRAQUEOSTOMIA DEPENDERA DE SU CONDICION RESPIRATORIA Y EL MANEJO DE SECRECIONES PARA VER LA POSIBILIDAD DE QUE SE PUEDA RETIRAR. DESDE EL PUNTO DE VISTA RENAL, DEBERA CONTINUAR EN EL PROGRAMA DE HEMODIALISIS, YA QUE LA TOXICIDAD DE LOS ANTIBIOTICOS UTILIZADOS PARA SALVAR SU VIDA FUE MUY ALTA Y PUDIERA NO RECUPERARSE DE SU FUNCION RENAL NUNCA.

CONCLUSION:

"EN BASE A UN ESTUDIO PROFESIONAL, ESPECIALIZADO, PROFUNDO, ACUCIOSO, LÓGICO, OBJETIVO, CON LINEAMIENTOS DEL METODO CIENTIFICO, EL CUAL TIENE UNA CONFIABILIDAD Y CREDIBILIDAD Y DE ACUERDO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL JUICIO DE AMPARO 1421/2015, LLEGO A LA SIGUIENTE CONCLUSION: EN BASE AL ANALISIS, VALORACION Y ESTUDIO DEL EXPEDIENTE CLINICO MEDICO DE LA PACIENTE MARTHA GARZA SANTOS CON NUMERO DE CUENTA: [REDACTED]

[REDACTED] LOS DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL LUNES 14-CATORCE DE DICIEMBRE AL VIERNES 18-DIEZ Y OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015-DOS MIL QUINCE, EN UN HORARIO DE LAS 9:00-NUOVE HORAS HASTA LAS 14:00-CATORCE HORAS APROXIMADAMENTE Y, HABIENDO DADO RESPUESTA A LOS CUESTIONARIOS SOLICITADOS CON ANTERIORIDAD. LLEGO A LA SIGUIENTE CONCLUSION MEDICO LEGAL: EL EXPEDIENTE CLINICO ES UN DOCUMENTO MEDICO LEGAL, QUE FORMA PARTE DE LA HISTORIA MEDICA DE UN PACIENTE AL INGRESAR A UN HOSPITAL, YA SEA PARTICULAR, COMO ES EL CASO QUE NOS OCUPA, O DE UNA INSTITUCION PUBLICA, SEA DE CONCENTRACION O DE ALTA ESPECIALIDAD. LA PACIENTE [REDACTED]

[REDACTED] FUE ATENDIDA EN LAS INSTALACIONES DEL [REDACTED] DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE MARZO DEL 2015 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y, DONDE SE LE REALIZO EL EXPENDIENTE CENICO NUMERO 302022. YA QUESE CONOCIAN LOS ANTECEDENTES PATOLOGICOS Y NO PATOLOGICOS, ASI COMO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA PACIENTE [REDACTED] Y NO SE REALIZO LO CONDUCENTE EN Estricto APEGO A LA NORMATIVIDAD. Y TOMANDO EN CUENTA, QUE LA SEGURIDAD EN LA ATENCION, VALORACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SON COMPONENTES DE LA CALIDAD EN LA ATENCION DE UN HOSPITAL MEDICO PUBLICO, CON MAYOR RAZON EN NA INSTITUCION PRIVADA, DEIENDOSE IDENTIFICAR, PREVENIR, MITIGAR Y CORREGIR LAS CONSECUENCIAS O ERRORES QUE SE DETECTEN O DIAGNOSTIQUEN, EN EL PROCESO DE ATENCION MEDICA INTRAHOSPITALARIA, SITUACION QUE NO SE OBSERVO NI SE LLEVO A CABO POR

DE L
LEG
DEL CU
MONTE
NUE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MEDIO DEL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, ASI COMO EL NO APEGO A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE E INOBSERVANCIA A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y LA FALTA DE CUIDADO HACIA LA FAMILIA DE LA REFERIDA PACIENTE. CONCLUYO QUE LA ATENCION MEDICA Y DE DIAGNOSTICO BRINDADA A LA REFERIDA PACIENTE, NO FUE ADECUADA A SUS PADECIMIENTOS, NI A LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS. LA PACIENTE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, PRESENTA UN BUEN ESTADO DE SALUD, EVOLUCIONANDO EN FORMA FAVORABLE Y, RECUPERANDOSE DE SU MAL ESTADO DE SALUD EN QUE SE ENCONTRABA AL SALIR DEL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA. LA POSIBLE RECUPERACION DE SUS ALTERACIONES NEUROLOGICAS, RENALES Y RESPIRATORIAS LE HA LLEVADO A PASAR MUCHO TIEMPO, DESDE EL PUNTO DE VISTA RENAL, DEBEA CONTINUAR EN EL PROGRAMA DE HEMODIALISIS, YA QUE LA TOXICIDAD DE LOS ANTIBIOTICOS UTILIZADOS PARA SALVAR SU VIDA FUE MUY ALTA Y PUDIERA NO RECUPERAR SU FUNCION RENAL. POR LO TANTO, CONSIDERO QUE EXISTE NEGLIGENCIA, IMPROBIDAD Y FALTA DE ATENCION POR MEDIO DEL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA.

AMPLIACIÓN DE DICTAMEN.

EL MOTIVO DE PRESENTAR ESTA AMPLIACION DE LA PERICIAL MEDICA, ES POR QUE CONSIDERO, QUE EXISTEN PUNTOS MUY IMPORTANTES, REFERENTES AL ESTADO DE SALUD DE LA PACIENTE [REDACTED] DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVO INTERNADA EN EL [REDACTED] Y QUE POR SITUACIONES PERSONALES DEL SOLICITANTE, ASI COMO UN EXCESO DE TRABAJO EN LA FUNCION PERICIAL MEDICO LEGAL, ORIGINADOS POR LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON, NO ACOMPAÑE EN SU MOMENTO, EN LA PERICIAL MEDICA PRESENTADA.

LOS PUNTOS A RESALTAR EN LA AMPLIACION DE LA PERICIAL MEDICA SON REFERENTE A LOS SIGUIENTES:

EL DAÑO RENAL PERMANENTE E IRREVERSIBLE.
INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS.
CIQUETRAZ EN EL DORSO DE LA NARIZ.

LA PACIENTE: [REDACTED] SE HOSPITALIZO CON EL EXPEDIENTE NUMERO-302622 PARA LA ATENCION DE ULCERAS CRONICAS INFECTADAS EN REGIONES SACRA, TALON DERECHO Y PIERNA IZQUIERDA. DURANTE DICHA HOSPITALIZACION SE PRESENTARON VARIAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (NOSOCOMIALES) QUE COMENTARE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS SE PUEDEN PREVENIR Y SON CONSIDERADAS COMO UN INDICADOR DE CALIDAD DEL HOSPITAL CUANDO SON MINIMAS (5% DE FRECUENCIA SE CONSIDERA COMO SINÓNIMO DE BUENA CALIDAD DE ATENCION HOSPITALARIA). EL MANEJO CORRECTO DE LOS FACTORES DE RIESGO PERMITIRÁN DISMINUIR LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIRLAS. EN RELACION CON EL PRIMER FACTOR DE RIESGO (VARIABLES DEL PACIENTE COMO EDAD, GENERO, COMORBILIDADES Y OTROS) ES POCO MODIFICABLE Y POR LO TANTO DICHAS INFECCIONES NOSOCOMIALES NO SON PREVENIBLES EN MUCHAS OCASIONES. EN CAMBIO EL SEGUNDO Y TERCER FACTOR DE RIESGO (MEDIO AMBIENTE Y ATENCION HOSPITALARIA) SI SON MODIFICABLES Y POR LO TANTO SON PREVENIBLES EN MUCHAS OCASIONES. DURANTE LA HOSPITALIZACION DE LA SRA. [REDACTED] SE PRESENTARON VARIAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS PREVENIBLES, YA QUE SE RELACIONARON CON FALTA DE ATENCION HOSPITALARIA EN UN PACIENTE VULNERABLE.

LA PRIMERA INFECCION INTRAHOSPITALARIA PREVENIBLE FUE POR LA RUPTURA DE LA UNION MUCOCUTANEA DE LA COLOSTOMIA EL 21 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 11:00 HORAS Y SU DETECCION HASTA LAS 19:00 HORAS PROVOCO ABSCESO E INFECCION DE LOS TEJIDOS ADYACENTES QUE SE COMPLICÓ CON SEPTICEMIA POR ACINETOBACTER BAUMANNI, AGENTE MULTIRESISTENTE QUE AMERITO TRATAMIENTO CON VARIAS DROGAS NEFROTOXICAS QUE DAÑARON EL RINON PROVOCANDO INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, LO CUAL LO LLEVO A HEMODIALISIS SIN RECUPERAR LA FUNCION RENAL Y DECLARARSE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA DESPUES DE 3 MESES DE HEMODIALISIS SIN RECUPERAR LA FUNCION RENAL (LA PACIENTE [REDACTED] CUANDO INGRESO EL 3 DE MARZO DEL 2015 TENIA CREATININA SERICA DE 1.3 MG, NITROGENO DE LA UREA 44 MG Y UREA DE 92 MG DE ORIGEN PRE RENAL). OTRA COMPLICACION DE LA SEPTICEMIA FUE LA NEUMONIA CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA QUE AMERITO VENTILACION MECANICA. ESTA SERIE DE COMPLICACIONES FUE POR UNA FALTA DE OBSERVANCIA DE LA COLOSTOMIA (FALLA EN EL TERCER FACTOR DE RIESGO LLAMADO ATENCION HOSPITALARIA) LO CUAL PROVOCO MAYOR ESTANCIA HOSPITALARIA, MAYOR COSTO, MAYOR STRESS FAMILIAR, MENOR CALIDAD DE VIDA Y LO MAS DELICADO, PONE EN PELIGRO LA VIDA DE LA PACIENTE [REDACTED].

LA SEGUNDA INFECCION INTRAHOSPITALARIA PREVENIBLE: SE PRESENTA EL 3 DE JUNIO DEL 2015 AL UI CERARSE EL DORSO DE LA NARIZ POR NO MOVERSE POR VARIAS HORAS LA MASCARILLA NASAL, LO QUE PROVOCO NECROSIS DE LA PIEL. SE MANEJA ADECUADAMENTE Y MEJORA PERO DEJA CICATRIZ VISIBLE EN LA CARA. SE PRESENTO

POR FALTA DE OBSERVANCIA DE ENFERMERÍA EN UNA PACIENTE VULNERABLE (FALLA EN EL TERCER FACTOR DE RIESGO LLAMADO ATENCIÓN HOSPITALARIA).

LA TERCERA INFECCION INTRAHOSPITALARIA PREVENIBLE SE PRESENTO AL ULCERARSE EL TALON DERECHO, AL NECROSARSE LA PIEL POR FALTA DE MOVILIZACIÓN DEL PIE EN UN PACIENTE VULNERABLE (SECUELA DE SINDROME GUILLIAN BARRE EN NOVIEMBRE 2014), NUEVAMENTE FALLA EN EL TERCER FACTOR DE RIESGO LLAMADO ATENCIÓN HOSPITALARIA.

TODO LO ANTERIOR ADEMÁS SE CORROBORA CON LO SIGUIENTE:

REPORTE DE ACINETOBACTER EN HEMOCULTIVO EL DÍA 1 DE MAYO A LAS 13:25 (DADO LA NATURALEZA INTRAHOSPITALARIA PROPIA DE SU NATURALEZA, LO QUE PONE DE MANIFIESTO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LA MATERIA).

REPORTE DE ACINETOBACTER DEL CULTIVO DEL SITIO DE LA HERIDA ABDOMINAL, EN LA NOTA DE EVOLUCIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO 2015 A LAS 17 HORAS, (DADO LA NATURALEZA INTRAHOSPITALARIA PROPIA DE SU NATURALEZA, LO QUE PONE DE MANIFIESTO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LA MATERIA).

REPORTE DE LABORATORIO 61605082, 16 DE JUNIO 2015 SE REPORTE ACINETOBACTER BAUMANNII LA CUAL ES UNA ESPECIE DE BACTERIA PATÓGENA GRAM-NEGATIVA RESISTENTE A LA MAYORÍA DE LOS ANTIBIÓTICOS. PARA ESTE CASO Y EN BASE AL ANTIBIOGRAMA ES SENSIBLE A COLISTINA, COMO RESULTADO DE SU RESISTENCIA AL TRATAMIENTO CON FÁRMACOS, POLLACK, ANDREW (2010, 27 FEB). «RISING THREAT OF INFECTIONS UNFAZED BY ANTIBIOTICS», THE NEW YORK TIMES. LA ENFERMEDAD PRODUCIDA POR LA A. BAUMANNII PUEDE CAUSAR NEUMONÍA SEVERA E INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU). COMO ES EL CASO QUE NOS OCUPA. (DADO LA NATURALEZA INTRAHOSPITALARIA PROPIA DE SU NATURALEZA, LO QUE PONE DE MANIFIESTO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LA MATERIA).

CONSECUENTEMENTE, SE ESTIMA QUE EL NOSOCOMIO FALTÓ AL OBJETIVO FUNDAMENTAL POR EL CUAL SE INSTITUYÓ LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES, CONSISTENTE EN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA, EN VIRTUD QUE SE DESPRENDE DE TODO LO ANTERIOR QUE LA CAUSALIDAD QUE PROVOCARON LOS DAÑOS CAUSADOS A LA PACIENTE FUERON LA FALTA DE CAPACITACIÓN, LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL, DE EVALUACIÓN, DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y LA CALIDAD DE ÉSTOS, Y QUE TIENEN EN COMÚN LA DEFICIENTE ATENCIÓN MÉDICA PRESTADA POR PARTE DEL NOSOCOMIO, POR LA FALTA DE PRECAUCIÓN ESTÁNDAR Y ESPECÍFICAS DE LA PACIENTE TODAS CON RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR MÉDICO RESPONSABLE POR SER EL QUE DEBIÓ DE HABER INSTRUMENTADO LAS MEDIDAS



IDÓNEAS PARA EVITAR LAS CONSECUENCIAS DE SALUD ANTES RELACIONADAS, A FIN DE REDUCIR LOS RIESGOS DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LAS INFECCIONES BACTERIANAS Y MICÓTICAS QUE PRESENTO LA PACIENTE: [REDACTED] SON DE ÍNDOLE INTRAHOSPITALARIAS, POR HABER APARECIDO DESDE LAS 48 A 72 HORAS DEL INGRESO DEL PACIENTE, Y DESPUÉS DE LOS 5 DÍAS DE ESTANCIA, RESPECTIVAMENTE. DE MODO QUE LA RESPONSABILIDAD ES INADMISIBLE, AUN VALORANDO EL DIAGNÓSTICO DE INGRESO, LA ENFERMEDAD DE BASE O CONCOMITANTES, Y QUE LA PACIENTE SEA CATALOGADA COMO INMUNOCOMPROMETIDA. PUES ERA PREVISIBLE Y EVITABLE LAS INFECCIONES ADQUIRIDAS EN EL [REDACTED] QUE ACTUALMENTE LA CONDIONAN A ESTAR HOSPITALIZADA DE FORMA CONCOMITENTE CON LOS DIVERSOS PADECIMIENTOS DE LEUCOENCEFALOPATIA ENCONTRADA DURANTE SU INTERNAMIENTO EN FECHA CINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, SEGÚN RESONANCIA MAGNÉTICA, ELECTROENCEFALOGRAMA Y PUNCIÓN LUMBAR, POLIRADICULOPATIA DETECTADA EN DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE E HIDROCEFALIA LOCALIZADA EN ABRIL DE DOS MIL CATORCE. YA QUE ELLO EXIGIÓ, POR EL CONTRARIO, MAYOR PERICIA, CUIDADO Y DILIGENCIA DEL NOSOCOMIO, PARA ACREDITAR QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO FUE CONFORME A UN PROCESO DE ATENCIÓN DE SALUD IMPECABLE, EN RELACIÓN A ESTOS ÚLTIMOS FACTORES DE RIESGO, CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS CASUÍSTICAS DE LA PACIENTE QUE REQUERIRAN SER MÁS EXIGENTE EN EL ACTUAR DEL HOSPITAL, PARA ENFRENTAR LOS TIPOS Y RIESGOS DE LAS COMPLICACIONES DE LA PACIENTE. SIN QUE PASE POR ALTO QUE TAMBIÉN SE TORNA PATENTE LA RELACIÓN CAUSAL DE LAS INFECCIONES EN CUESTIÓN QUE PERMITE CALIFICAR LOS DAÑOS EN LA SALUD DE LA PACIENTE COMO DE EVITABLES Y PREVISIBLES, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO POR LA FALTA DE SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA Y REGULACIONES DESTINADAS A PREVENIR Y CONTROLAR LAS MISMAS, EN RELACIÓN A LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A AL QUE ESTABA OBLIGADO, Y QUE DESDE LUEGO FORMAN PARTE DE LA LEX ARTIS APLICABLE. ESTO, POR LA FALTA DE LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS EXIGIDOS EN LA NOM-NORMA OFICIAL MEXICANA DE LA MATERIA, EN VIRTUD QUE NO SE ADVIRTIÓ AL ACUDIR AL NOSOCOMIO QUE SE CONTARAN CON ELLOS:

- 1.- MODELOS DE GESTIÓN DE RIESGOS EN INFECCIONES NOSOCOMIALES, A QUE ALUDE EL PUNTO 3.1.24 DE LA NOM, IDENTIFICADA COMO EL CONJUNTO DE ACCIONES INTERRELACIONADAS ORIENTADAS A LIMITAR LAS POSIBILIDADES DE OCURRENCIA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES, BASADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y CÉDULAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE FACTORES ASOCIADOS, IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE.
- 2.- EL SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE BUSCANDO AQUELLOS FACTORES DE RIESGO QUE VUELVAN SUSCEPTIBLE AL PACIENTE DE DESARROLLAR UNA INFECCIÓN NOSOCOMIAL, QUE DEBEN SER POR LO MENOS, DOS VECES POR SEMANA, CONFORME AL PUNTO 7.3.11.1 DE LA NOM.

3.- CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LO PREVISTO EN EL PUNTO 10.6.4.1 DE LA NOM, QUE DISPONE QUE EL HOSPITAL TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE CAPACITAR A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CADA SEIS MESES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE NEUMONIAS NOSOCOMIALES EN PACIENTES DE RIESGO.

4.- CONSTANCIAS DE REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN BÁSICA, CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA Y OPERATIVA, A QUE SE REFIERE EL PUNTO 11.2 DE LA NOM, QUE AMPARE EL DESARROLLO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES, CON ATENCIÓN PARTICULAR A LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA ADQUISICIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.

DE IGUAL MANERA, CONSIDERO QUE POR EL DAÑO DESPROPORCIONADO CAUSADO EN LA SALUD DE LA PACIENTE, MANIFESTADO EN EL DAÑO RENAL IRREVERSIBLE DE LA MISMA, INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS Y EN LA CICATRIZ PERPETUA EN SU ROSTRO, ES PATENTE LA RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, EN VIRTUD QUE EN COMPARACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE SALUD QUE REQUERÍA ENCONTRÓ DICHS RESULTADOS DESPROPORCIONALMENTES DAÑOSOS. AL ESTAR A CARGO DEL ESTABLECIMIENTO EL CONTROL DE LOS MEDIOS QUE GENERARON LOS MISMOS. EN EL ÚLTIMO DE LOS CASOS, ESTIMO QUE AUN CUANDO HIPOTÉTICAMENTE NO SE ADVIRTIERAN LAS CAUSAS DE LOS RESULTADOS DAÑOSOS, ES CUALITATIVAMENTE PROBABLE, EN ORDEN DE LAS IRREGULARIDADES ANTES SEÑALADAS, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE LA PACIENTE QUIEN EN BUSCA DE UNA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CURACIÓN DE SUS PADECIMIENTOS, ENCONTRÓ POR EL CONTRARIO COMPROMETIDA DE FORMA CRÍTICA SU ESTADO DE SALUD. DE AHI QUE INCLUSO EL CARÁCTER MULTIFACTORIAL DE LAS CAUSAS Y CAUSANTES DE LOS RESULTADOS DAÑOSOS, ORIGINADA POR LA DESVENTAJA DE LA PACIENTE PARA PROBAR HIPOTÉTICAMENTE LA CAUSALIDAD DE LOS DAÑOS PASIVOS, SEAN DETERMINANTES PARA CONCLUIR CON LA RESPONSABILIDAD DEL NOSOCOMIO, ANTE LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD, QUE DIO LUGAR A QUE SE INCREMENTARA EL RIESGO DE LA PACIENTE A SUFRIR LOS DAÑOS REFERIDOS Y A DESTRUIR LA POSIBILIDAD SUSTANCIAL DE ALCANZAR UN RESULTADO MAS FAVORABLE. EN VIRTUD QUE EXISTE UNA PROBABILIDAD SIGNIFICATIVA DE QUE EL EVENTO DAÑOSO NO HUBIERA TENIDO LUGAR DE HABERSE LA CONDUCTA DEBIDA POR EL PERSONAL SANITARIO, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA COLOSTOMIA SE PRACTICÓ EL 13 ABRIL 2015 Y SU INFECCIÓN ACONTECIÓ EL 21 SIGUIENTE, POR LO QUE ESTIMANDO EL TIEMPO DE CONVALECENCIA POR LA COLOSTOMIA PRACTICADA ES DE APROXIMADAMENTE 8 DÍAS, PONE DE MANIFIESTO QUE SE LE PRIVÓ EN CONSECUENCIA A LA PACIENTE DE LA OPORTUNIDAD DE SANAR, PUES NO OBSTANTE QUE ESTABA A POCO TIENDO DE SER DADA DE ALTA, Y POR EL CONTRARIO, ACTUALMENTE SIGUE SERIAMENTE COMPROMETIDA POR LOS RESULTADOS DAÑOSOS ANTES DETERMINADOS.



EN CONCLUSION:

LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS EN LA PACIENTE: [REDACTED] SE HAN PRESENTADO POR FALLAS EN EL TERCER FACTOR DE RIESGO LLAMADO ATENCION HOSPITALARIA EN UN PACIENTE VULNERABLE. LO QUE HAN PROVOCADO UN MAL ESTADO DE SALUD ACOMPAÑADO DE UN DETERIORO EN LA CALIDAD DE VIDA. INCLUSO PONIENDO EN PELIGRO LA VIDA, DESDE LA PRIMERA INFECCION INTRAHOSPITALARIA RELATADA. POR LO TANTO, EN FORMA CATEGORICA Y DE ACUERDO A MI LEAL Y SABER ENTENDER: A LA PACIENTE [REDACTED] DURANTE SU ESTANCIA EN EL [REDACTED] SE LE OCASIONO: DAÑO RENAL IRREVERSIBLE, INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, UNA CICTARIZ VISIBLE Y PERPETUA EN EL DORSO DE LA NARIZ. RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL PERSONAL DE ENFERMERIA, DERIVADO DE FORMA DIRECTA POR LA OMISION DEL DIRECTOR MÉDICO RESPONSABLE POR SER EL QUE DEBIÓ DE HABER INSTRUMENTADO LAS MEDIDAS IDÓNEAS PARA EVITAR LAS CONSECUENCIAS DE SALUD ANTES RELACIONADAS, AL USO Y ABUSO DE ANTIBIOTICOS NEFROTOXICOS Y SECUNDARIA A UNA COLOSTOMIA MAL TRATADA. Y EVIDENCIANDO EL NEXO CAUSAL DEL DAÑO OCASIONADO DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOSPITAL CRHISTUS MUGUERZA CONCHITA.

ANEXO: COPIAS SIMPLES

- 1. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-045-SSA2-2005, PARA LA VIGILANCI EPIDEMIOLOGICA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES.
- 2. RESPONSABILIDAD CIVIL POR INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS.
- 3. MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA J.A. Esbert Calaburg 4 edicion, Editorial Salvat Medicina.
- 4. ARTICULOS DE INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS.

DE LA FEDERACION
COLEGIO EN MATERIA
DEL CIRCUITO
Y, NUEVO LEON

Dictámenes periciales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracción IV, 143 y 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2, de la Ley de Amparo.

Como se aprecia de los dictámenes, el perito expresó las razones por las cuales determinó las lesiones que se ocasionaron durante la convalecencia de la paciente en el [REDACTED] pues indicó la fecha de ingreso del paciente, los padecimientos que tenía en ese momento, así como las lesiones que se ocasionaron con motivo de la negligencia del personal del citado hospital, además de la ineficacia en la atención médica.

Cierto, en forma cronológica, tomando como

referencia el expediente personal de la paciente, describió las lesiones y el origen de las mismas, por ejemplo, **las ulceraciones del dorso de la nariz y la del talón derecho, se produjeron por la presión sufrida sobre la piel de esos sitios, en el primer caso**, por el mal uso y abuso de la mascarilla nasal, ocasionando una presión mayor y continúa de la mascarilla sobre la piel del dorso de la nariz, así como la falta de movilización y supervisión de la mascarilla nasal y el aumento de la presión sobre la piel del dorso nasal y la falta de movilización y supervisión de la misma, **en el segundo caso**, en el talón derecho y la pierna izquierda, por la falta de movilización y atención oportuna del personal de enfermería y médico, ocasionado que el peso de la parte del cuerpo de la paciente y la superficie de la cama, pero en ambas lesiones, la causa principal es no tener un lineamiento a los estándares internacionales de seguridad de la paciente [REDACTED] en base a las normas oficiales mexicanas, para la vigilancia epidemiológica, prevención, control y atención de la infección intrahospitalaria.

De igual forma, expresó en forma circunstanciada las diversas lesiones que presenta la paciente, así como las razones que las ocasionaron, para concluir con los motivos que consideró, eran el origen de las mismas, como lo es, la falta de atención médica adecuada y la negligencia en que incurrió el personal del hospital responsable.

En efecto, precisó las lesiones ocasionadas a la paciente derivaron de fallas en el tercer factor de riesgo llamado atención hospitalaria, esto, ya que la primera



786

infección intrahospitalaria prevenible fue por la ruptura de la unión mucocutánea de la colostomía el veintiuno de abril de dos mil quince a las 11:00 horas y su detección hasta las 19:00 horas provocó absceso e infección de los tejidos adyacentes que se complicó con septicemia por acinetobacter baumani, agente multiresistente que ameritó tratamiento con varias drogas nefrotóxicas que dañaron el riñón provocando insuficiencia renal aguda, lo cual lo llevo a hemodialisis sin recuperar la función renal y declararse insuficiencia renal crónica después de tres meses de hemodiálisis sin recuperar la función renal, otra complicación de la septicemia, mencionó, fue la neumonía con insuficiencia respiratoria aguda que amerito ventilación mecánica, esta serie de complicaciones, precisó, fue por una falta de observancia de la colostomía (falla en el tercer factor de riesgo llamado atención hospitalaria) lo cual provocó mayor estancia hospitalaria, mayor costo, mayor stress familiar, menor calidad de vida y lo más delicado; puso en peligro la vida de la paciente [REDACTED]

5 MAR 2016
EL TRIBUNAL
JUDICIAL EN MATERIA
DE CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Indicó, que la segunda infección intrahospitalaria prevenible: se presentó el tres de junio de dos mil quince al ulcerarse el dorso de la nariz por no moverse por varias horas la mascarilla nasal, lo que provoco necrosis de la piel, señaló, que se manejó adecuadamente y mejoró, pero dejó cicatriz visible en la cara, la cual se ocasionó por falta de observancia de enfermería en una paciente vulnerable.

Mientras que, la tercera infección intrahospitalaria prevenible: se presentó al ulcerarse el

talón derecho, al necrosarse la piel por falta de movilización del pie en un paciente vulnerable (secuela de síndrome guillain barre en noviembre 2014).

Es decir, de los dictámenes periciales que se valoran, se aprecia que el perito dio las razones debidas y fundadas que sustentan su opinión, por lo que, se estima que cumplen con su cometido que es precisamente auxiliar al juzgador en la percepción e inteligencia de los hechos que se investigan.

Sobre lo anterior, son de invocarse, en lo conducente, las tesis sustentadas por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizables en el tomo 157-162, página 149 y 10, Cuarta Parte, página 86, ambas de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que son del tenor literal siguiente:

"PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA.

Si al emitir un dictamen pericial el perito no da las razones debidas y fundadas que sustentan su opinión, tal dictamen no cumple con su cometido que es precisamente auxiliar al juzgador en la percepción e inteligencia de los hechos que se investigan, ya que no aporta datos fundados que permitan deducir consecuencias que conduzcan al conocimiento de la verdad que se busca, y si el tribunal responsable concede valor probatorio pleno a dicho peritaje es inconcuso que hace un indebido uso del arbitrio que la ley le concede para apreciar la prueba de que se trata."



"PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA. Los peritos son simples auxiliares del juez en la importantísima función de administrar justicia o meros consultores técnicos, y la esencia de su función radica en la apreciación de las circunstancias de los hechos o de los hechos mismos y de ninguna manera en la decisión jurídica del caso de que se trata, ya que ésta es de la exclusiva competencia del juzgador; o sea, que el órgano judicial puede auxiliarse con los dictámenes periciales, pero en ningún momento puede quedar sujeto a los mismos para sentenciar."

Tesis VI.1º.C.57 C sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito que, se comparte, visible en el tomo XVII, febrero de 2003, página 1122, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:

LA FEDERACIÓN
GACETA DE LA FEDERACIÓN
QUINTO CIRCUITO
JULIO DE LEÓN

"PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES. Atendiendo a la naturaleza de la prueba pericial, a la finalidad de los dictámenes de los peritos y a que al juzgador le corresponde su valoración, independientemente de que las partes objeten tales dictámenes, éste se encuentra facultado para apreciar tanto la calidad técnica de los peritos, como la de sus dictámenes pues, de lo contrario, sería tanto como concederles valor probatorio por el solo hecho de no ser objetados, lo que atentaría contra la naturaleza misma de la prueba pericial, cuyos expertos sólo son coadyuvantes del Juez, cuando los dictámenes lo ilustren sobre cuestiones que escapan a su conocimiento y, por ello, se requiere que el perito, en cuyo dictamen se apoyará una

resolución judicial, demuestre ante el juzgador que tiene plenos conocimientos."

En este sentido, considerando que los daños físicos sufridos por la paciente quejosa, se encuentran debidamente acreditados en los autos del juicio de garantías de acuerdo a la opinión del perito médico designado por el juez de Distrito, debidamente soportado con la documental respectiva, es evidente, que la negligencia, inoperancia y falta de atención por parte del personal médico del [REDACTED] ocasionaron graves daños a la salud de la quejosa, como se aprecia del dictamen médico desahogado por el perito nombrado por el juez de Distrito, como de su ampliación, lo que denota que omitieron proteger los derechos de la paciente afectada.

Bajo este contexto, conforme al análisis del dictamen del profesionista médico, las responsables con su actitud negligente y de descuido, pasaron por alto que es su responsabilidad velar por los derechos fundamentales de los pacientes, esencialmente, el de la salud, considerando que no existe duda en cuanto a que la paciente, durante el tiempo que estuvo internada en el [REDACTED] no fue atendida con el esmero y la dedicación adecuados para evitar que su salud empeorara.

Esto es así, pues en el caso particular como ya se adelantó, conforme al estudio de salud de la paciente contenido en el dictamen médico expedido por el perito tercero designado por el juez de Distrito, las responsables incurrieron en una deficiente atención médica que derivó



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-55

788

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

en acrecentar los padecimientos originales y ocasionar nuevos síntomas ajenos a aquellos, como lo fue, el daño renal irreversible, infecciones intrahospitalarias, cicatriz visible y perpetua en el dorso de la nariz, lo que acredita la negligencia y falta de atención adecuada a la paciente.

En efecto, en su dictamen médico el perito menciona en forma pormenorizada las razones que lo llevaron a concluir que las lesiones que se ocasionaron a la paciente ocurrieron durante su estancia en el [REDACTED] para ello, consideró la fecha de su ingreso y los padecimientos que tenía en ese momento, después describió las lesiones que sufrió con motivo de la negligencia del personal del citado hospital en conjunto con el mal servicio en la atención médica.



DERACIÓN
EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON

Así, el profesionista médico analizó el expediente personal de la paciente y procedió a describir las lesiones y su origen, para concluir, que las ulceraciones del dorso de la nariz y la del talón derecho, se produjeron por la presión sufrida sobre la piel de esos sitios, en el primer caso, por el mal uso y abuso de la mascarilla nasal, ocasionando una presión mayor y continúa de la mascarilla sobre la piel del dorso de la nariz, así como la falta de movilización y supervisión de la mascarilla nasal y el aumento de la presión sobre la piel del dorso nasal y la falta de movilización y supervisión de la misma, en el segundo caso, en el talón derecho y la pierna izquierda, por la falta de movilización y atención oportuna del personal de enfermería y médico, ocasionado que el peso de la parte del cuerpo de la paciente y la

superficie de la cama, pero en ambas lesiones, la causa principal es no tener un lineamiento a los estándares internacionales de seguridad de la paciente [REDACTED] [REDACTED] en base a las normas oficiales mexicanas, para la vigilancia epidemiológica, prevención, control y atención de la infección intrahospitalaria.

Análisis pericial al que este órgano jurisdiccional le confiere valor probatorio pleno, tomando en cuenta que el perito justificó ser un profesional médico, además de tomar en cuenta la calidad de su dictamen, en el cual se narran en forma cronológica el estado de salud físico de la paciente al momento de ingresar al nosocomio y el deterioro en su estado físico con motivo de las lesiones ocasionadas en el hospital, para lo cual, consideró el expediente clínico de la paciente.



PODERES JUD
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTECERRE

Es decir, el perito médico acreditó estar debidamente facultado para emitir su opinión y, en el caso, tomando en cuenta la ciencia sobre la cual emitió su dictamen, misma que escapa del conocimiento del juez de Distrito como de los integrantes de este Tribunal, su valoración debe ser acorde a la calidad del profesionalista como de la convicción que genere el dictamen médico, mismo que se considera, por las razones apuntadas, que el mismo ilustra sobre situaciones que se desconocen pero que dada la circunstanciación de los hechos que en el propio dictamen se describen, dan certeza a este órgano jurisdiccional para que sirva de sustento en la presente ejecutoria.

Cierto, el dictamen pericial que se valora, reúne los requisitos para ser tomado en cuenta y ser un



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-5

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

apoyo en la decisión a la que se llega, pues en él se dan las razones que sustentan su opinión, por lo que, se estima que cumple con su cometido, precisamente, de auxiliar al juzgador en la percepción e inteligencia de los hechos que se analizan.

Así, conforme a la opinión del médico que calificó el estado de salud de la paciente, así como el origen y evolución de las lesiones sufridas por ésta durante su internamiento en el hospital responsable, pone de relieve que se transgredió en perjuicio de la quejosa paciente su derecho fundamental a la salud, que es reprochable a las responsables, por su desatención y descuido al no proporcionarle atención médica de acuerdo a sus padecimientos ni a los procedimientos médicos.



LA FEDERACIÓN
CÓDIGO EN MATERIA
UNICO CIRCUITO
EVO LEON

Por ende, las responsables con su conducta omisiva y negligente, violentaron el derecho fundamental de la salud, consagrado en los artículos 1 y 4, Constitucionales, al vulnerar un derecho humano reconocido en la Constitución.

Numerales que establecen, que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente

fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la salud.

Derecho que se transgredió en perjuicio de la agraviada, por la actitud negligente asumida por las responsables, derivada de no otorgar los cuidados médicos adecuados para preservar ese derecho.

Consecuentemente, al advertirse que los argumentos en estudio resultaron **fundados**, y que se transgredió en perjuicio de la agraviada el derecho humano a la salud contenido en los artículos 1 y 4, de la Constitución General de la República, este órgano colegiado como garante de los derechos fundamentales, estima procedente conceder a la paciente quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal.

Empero, como no es posible restituir a la quejosa en el pleno goce de sus garantías transgredidas con motivo de su fallecimiento, el amparo debe tener como propósito resarcir a los familiares que directamente resintieron los actos reclamados ejecutados en perjuicio de la paciente, como lo son la incomunicación de que fue objeto, así como los malos tratos que ocasionaron lesiones.

Por ello, el efecto del amparo debe tener como propósito el resarcimiento económico, en esencia, una



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 290
Amparo en Revisión No. [REDACTED]

indemnización compensatoria por el daño sufrido y acreditado en los presentes autos, lo que comprende la reparación integral consistente en las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

De tal forma, que para satisfacer los efectos de la reparación de los derechos transgredidos, es necesario establecer los lineamientos bajo los cuales se debe dar cumplimiento a la presente ejecutoria, tanto la autoridad responsable [REDACTED], así como la Secretaría de Salud del Estado en su carácter de protectora de ese derecho en términos del artículo 3 de la Constitución Local y 4 de la Constitución Federal, como más adelante se precisa.

DE LA FEDERACIÓN
JALISCO EN MATERIA
EL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON

Todo lo cual, tiene como propósito resarcir económicamente a los deudos de la quejosa fallecida, así como en su redignificación en su calidad de víctimas, derivado de la desatención en el cumplimiento de la normatividad aplicable que debía observar la responsable [REDACTED] en concreto, la Ley General de Salud y la Ley Estatal de Salud, para vigilar la debida prestación de los servicios de salud a los pacientes internados en los Hospitales Públicos y Privados.

Lo anterior, considerando que los actos reclamados de incomunicación y malos tratos no solo afectaron a la quejosa paciente, sino que trascendieron a su familia, pues directa (incomunicación) e indirectamente (malos tratos), se vieron privados de atender adecuadamente a la paciente y vigilar que se le estuvieran

proporcionando los servicios médicos adecuados y, por otro lado, apreciaron el deterioro en la salud de la paciente por las lesiones ocasionadas, sin saber o poder intervenir, tomando en cuenta que el hospital y prestadores del servicio son los que, en teoría, tienen las instalaciones y el personal capacitado para ello.

En este contexto, la reparación de los daños en este tipo de asuntos no puede concretarse solamente a los que sufrió la persona que los recibió, sino que involucra el entorno en el que se desarrollaron, en especial, a las personas más cercanas a la afectada, pues ellos resienten el perjuicio tal vez no en lo físico, pero sí en lo moral y psicológico.

En efecto, la dignidad de la quejosa se afectó por el indebido trato médico que se le brindó el que, debido a su precario estado de salud, tuvo que soportar, pues no tenía la capacidad para manifestar que el inadecuado servicio le estaba ocasionando las lesiones descritas en el dictamen pericial.

Ante ello, la familia de la paciente quejosa sufrió daño moral, que consiste en la lesión de los sentimientos que les ocasionó dolor inmaterial en el aspecto moral y psicológico, que requiere ser redignificado a través de una reparación integral.

Lo anterior, ya que el acto reclamado de incomunicación, no sólo afectó el derecho de la quejosa, sino que trascendió al de los familiares que ocasionalmente no pudieron acceder a la paciente, para constatar su estado de salud, así como ante la





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-100
791

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

imposibilidad de impedir que se le siguiera afectando a la salud de la paciente durante su estadía en el hospital responsable.

Esto, ya que la proximidad del vínculo familiar, tomando en cuenta que debido al estado de salud, la paciente no estaba en aptitud de tomar las decisiones que le beneficiaran, por lo que, sus parientes fueron quienes estuvieron al pendiente de su salud, con la salvedad de que en ocasiones no pudieron acceder a una visita para ello.

Así, al transgredirse la dignidad humana de la paciente que trascendió a la de su familia, a través de la presente ejecutoria se pretende que, dentro de lo posible, se redignifique ese derecho de los familiares, que con motivo de los actos reclamados no les fue respetado ni valorado.

DE LA FEDERACIÓN
LEGADO EN
AL CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Por lo que, al no respetar el derecho a la salud de la paciente quejosa, el fin del presente amparo tiene un efecto reparador en lo económico y de redignificación de los familiares en su calidad de víctimas, en los términos que más adelante se destacan.

Por lo anterior, tomando en consideración que la responsable [REDACTED] tiene la obligación de otorgar a todos los pacientes el derecho humano de nivel más alto posible a la salud, por lo que, la atención médica que brinde debe ser considerada de calidad, dentro de lo cual debe entenderse la debida atención no sólo al paciente si no a los familiares que,

como se destacó, también resienten los daños y perjuicios que sufre el convaleciente, a quienes debe otorgarse la debida información y la permisión para estar al pendiente del familiar enfermo, consintiendo que exista una adecuada comunicación o verificación del estado de salud de la paciente, lo que en el caso no ocurrió.

Además, es obligación de la responsable prevenir en la medida de lo posible, que el paciente contraiga infecciones, enfermedades o trastornos relacionados con la atención que recibe y que inclusive, pueden llegar a poner en peligro la vida.

Aspectos que tampoco advirtió la responsable, puesto que del dictamen pericial del profesional designado por el juez de Distrito se aprecia, que durante el internamiento de la paciente en el Hospital Christus Muguerza Conchita, se le ocasionaron diversas lesiones a la paciente por negligencia y falta de cuidado del personal que la atendió.



Por lo que, afirmó que:

"La posible recuperación de sus alteraciones neurológicas, renales y respiratorias será lenta y pasara mucho tiempo. Desde el punto de vista renal, deberá continuar en el programa de hemodiálisis, ya que la toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar su vida fue muy alta y pudiera no recuperarse su función renal."

Mientras que, en la ampliación del dictamen pericial señaló:

"... a la paciente [REDACTED] durante



su estancia en el [REDACTED] Conchita, se le ocasionó: daño renal irreversible, infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y perpetua en el dorso de la nariz."

En este sentido, partiendo de la base de la incomunicación sufrida por la quejosa y las lesiones físicas que con motivo del internado de la paciente en el [REDACTED] le fueron provocadas por las negligencias médicas indicadas, procede conceder el amparo y protección para los efectos siguientes:

DÉCIMO SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa Martha Garza Santos a través de su familia, el amparo y protección de la Justicia Federal.

LA FEDERACIÓN
REGISTRADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

Bien, acorde con la legislación de la materia los efectos de la concesión del amparo son, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implica una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En esas condiciones, es de destacarse que cuando el representante de la quejosa (en su carácter de hijo) presentó el juicio de amparo indirecto, aquélla convalecía en el [REDACTED] empero, el siete de febrero del actual, falleció, por tanto,

ya no podría restituirsele en el goce de su derecho violado, sin embargo, puede determinarse una reparación diversa mediante una indemnización compensatoria por el daño sufrido y acreditado en los presentes autos, acorde con la artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2 y 27 de la Ley General de Víctimas, artículos 1 y 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 1-bis, 2, 135 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo León, preceptos que dicen:

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Artículo 63.-

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."

Ley General de Víctimas.

"Artículo 1. *La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-58

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante."

LA FEDERACION
GIATTO EN INTER
QUARTO CIRCUITO
NUEVO LEON

"Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y

medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

[...]

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición."



PODER JUDICIAL I
PRIMER TRIBUNAL LOCAL
ADMINISTRATIVO DE
MONTERREY,

"Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que



sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados."

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."



PODER JUDICIAL I
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVO DE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

(...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(...)."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 2915

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

Ley Estatal de Salud.

"Artículo 1o.- La presente Ley Reglamenta el derecho a la protección de la salud contenido en el artículo tercero de la Constitución Política del Estado, establece las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud, y las bases para la participación del estado y sus municipios en materia de salubridad general y regula la salubridad local, sus disposiciones son de orden público e interés social."

"Artículo 1o bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades."

"Artículo 2o.- La protección a la salud, es el derecho que tienen todos los habitantes del estado de **Nuevo León** a la procuración de condiciones de salubridad e higiene que les permitan el desarrollo integral de sus capacidades físicas y mentales."

"Artículo 135.- Las infracciones no previstas en este capítulo, serán sancionadas con multa equivalente hasta de 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 138 de esta ley."

En el orden internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), estableció:

"327. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente [313]. Esa obligación se regula por el Derecho Internacional [314]. En sus decisiones al respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. En el presente capítulo, el Tribunal examinará las pretensiones que, en la materia, señalaron la Comisión Interamericana y los representantes con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a las víctimas."

"C5. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional."

"351. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso a través del jefe de Estado. Al respecto, el Estado indicó que [e]n consulta con los familiares de la víctima, realizaría un acto público de reconocimiento de [...] responsabilidad en relación con las violaciones que determine [la Corte]. Asimismo, indicó que se ofrecería una disculpa a los familiares de la víctima."

De los preceptos anteriores se puede inferir que cuando resuelva que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de



PODER JUDICIAL DE LA
PRIMER TRIBUNAL COLEGIA
ADMINISTRATIVA DEL CUA
MONTERREY, N.L.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 336

796

Amparo en Revisión No. 437/2016

una justa indemnización a la parte lesionada.

Es decir, se garantiza la restitución integral de los derechos del quejoso afectado, (en el caso, de los familiares que resintieron los daños que le fueron infringidos a la paciente con motivo de su convalecencia en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que comprende la reparación integral consistente en las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

FEDERACIÓN
DO EN MATERIA
RTO CIRCUITO
C. LEON

La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.

La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.

La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.

En el entendido de que una víctima no solamente comprende en materia penal y derivada de una conducta delictuosa, sino que acorde con la Ley General de Víctimas, comprende reconocer y garantizar no solamente el derecho de las víctimas de un delito, sino también cualquier violación a los derechos humanos, en especial el derecho a la salud, asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos.

En cuanto a que dichos conceptos, en el presente caso deben cubrirse en favor de los familiares de la quejosa, como se mencionó al desestimarse la causa de sobreseimiento relacionada con el fallecimiento de la quejosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos asuntos ha sostenido que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas, dado el sufrimiento causado por aquélla, perjuicios que trascienden a la integridad psíquica y moral de los familiares por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos.

Casos dentro de los cuales destaca la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil, relativa al caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala (párrafos 162 y 163) en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos también ha aceptado que cuando se violan derechos fundamentales de una



791

persona humana, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, las personas más cercanas a la víctima también pueden ser consideradas como víctimas. También destacó que la Corte Europea de Derechos Humanos desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas.



DE LA FEDERACIÓN
COLEGIO EN MATERIA
DEL CUARTO CIRCUITO
Y, NUEVO LEÓN

Mientras que, en la diversa sentencia de diecinueve de mayo de dos mil once, relativa al diverso caso Vera Vera y otra vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en relación al tema relativo a la atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de los seres humanos, en los siguientes términos:

"...

39. *Este Tribunal ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. En razón de dicho carácter, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio.*

40. Por otro lado, el derecho a la integridad personal es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia.

41. Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

42. El Tribunal ha señalado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los



PODER JUDICIAL E
PRIMER TRIBUNAL CO
ADMINISTRATIVA DEL
MONTERREY,



298

estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

43. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera.

EL Jefe de
LEGADO EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

44. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros...

Al respecto, es aplicable al caso la tesis aislada P. LXVII/2010, con número de registro 163164, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Constitucional, página 28, que dice:

"DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido."

Por tanto, para efectos de la reparación de los derechos violados en el caso, se deben dar los lineamientos a la autoridad responsable que sirvan de base para vincularla con la Secretaría de Salud del Estado sobre la forma en que deberá cumplirse la presente ejecutoria.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 55

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

Sobre este punto, es decir, en relación a vincular a la Secretaría de Salud del Estado como autoridad que sin ser emplazada al juicio de amparo tiene la obligación de cumplir la ejecutoria de amparo, cabe decir, que esa obligación deriva del contenido del artículo 197 de la Ley de Amparo que dice:

"Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo."

FLUJACION
DO EN MATERIA
RTO CIRCUITO
VOLEON

En este sentido, al ser la Secretaría de Salud del Estado, una autoridad sanitaria en términos del artículo 5 fracción II, de la Ley Estatal de Salud, le corresponde vigilar el derecho a la protección de la salud contenido en el artículo tercero de la Constitución Política del Estado y 4 de la Constitución Federal.

En razón de lo cual, tiene la obligación de verificar la debida prestación de los servicios de salud que otorguen tanto las instituciones públicas como las privadas, como lo resulta ser el [REDACTED] [REDACTED] en términos del numeral 20 de la mencionada ley.

En este sentido, es preciso destacar que el daño ocasionado a la paciente quejosa es derivado de la desatención en el cumplimiento de la normatividad aplicable que debía observar la responsable [REDACTED] en concreto, la Ley General

de Salud y la Ley Estatal de Salud, para vigilar la debida prestación de los servicios de salud a los pacientes internados en los Hospitales Públicos y Privados y por ese incumplimiento, es que se debe de emitir una compensación indemnizatoria.

En razón de que, no se está en condiciones de restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, al haber fallecido, no obstante, se encuentran debidamente acreditados en autos del juicio de garantías los actos reclamados de incomunicación y de malos tratos que ocasionaron lesiones a la paciente, con lo cual se transgredió en perjuicio de ella su derecho fundamental a la dignidad humana y salud, toda vez que el hospital responsable impidió en diversas ocasiones que los familiares estuvieran al pendiente de la salud de la quejosa, máxime, cuando el personal médico al haber actuado con descuido y negligencia en sus funciones, ocasionó lesiones a la quejosa que mermaron su estado de salud, que si bien, no puede afirmarse que ellas ocasionaron la defunción de la paciente, también es verdad que, sí afectaron su salud.

Situación que se justificó con el dictamen pericial del perito designado por el juez de Distrito, quien sostuvo que durante el internamiento de la paciente en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a la paciente quejosa se le ocasionaron diversas lesiones por negligencia y falta de cuidado del personal que la atendió.

Sosteniendo que:

"La posible recuperación de sus alteraciones

ESTADOS UNIDOS
PODER JUDICIAL DE L
PRIMER TRIBUNAL COLEC
ADMINISTRATIVO DEL CU
MONTERREY, NU



neurológicas, renales y respiratorias será lenta y pasara mucho tiempo. Desde el punto de vista renal, deberá continuar en el programa de hemodiálisis, ya que la toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar su vida fue muy alta y pudiera no recuperarse su función renal."

Por otro lado, en la ampliación del dictamen pericial señaló:

"... a la paciente [REDACTED] durante su estancia en el [REDACTED] Conchita, se le ocasionó: daño renal irreversible, infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y perpetua en el dorso de la nariz."

AFEDERACION
IALC MATERIA
ARTO CIRCUITO
EVO LEON

Esto es, el personal médico que atendió a la paciente no permitió que los familiares estuvieran al pendiente de la paciente, no obstante su delicado estado de salud y, por otro lado, no llevó a cabo una adecuada atención médica y por el contrario, descuidó la salud de la paciente por el inadecuado tratamiento clínico, lo que ocasionó lesiones a la paciente, ocasionando que los familiares resintieran daños morales por los sentimientos de angustia dada la preocupación por no conocer su estado de salud, mayormente cuando en el hospital responsable le fueron ocasionadas lesiones a la paciente por malos tratos y negligencia.

En este sentido, la reparación del daño en presente asunto no puede concretarse solamente a los que sufrió la persona que los recibió, sino que involucra el entorno en el que se desarrollaron, en especial, a las personas más cercanas a la afectada, pues ellos también

resultan afectados ante el sufrimiento de su pariente.

Por ello, se estima que la familia de la paciente quejosa sufrió daño moral que consiste en la lesión de los sentimientos que ocasionó dolor inmaterial y, en su caso, sufrimiento físico, por el desgaste anímico que les ocasionó ver el estado de salud del familiar, lo que derivó del descuido y de la negligencia médica.

Cierto, el acto reclamado de incomunicación no sólo afectó el derecho de la quejosa, sino que trascendió al derecho de los familiares que no pudieron acceder a la visita de la paciente para constatar su estado de salud, quién debido a su estado de salud no podía valerse por sí misma, sino que requería que sus familiares observaran su evolución o detrimento en su salud, para gestionar una adecuada o mejor atención médica, pues no hay que olvidar las lesiones que aquélla sufrió durante su convalecencia en el hospital responsable.

Estos daños inmateriales y psicológicos atienden a la proximidad del vínculo familiar, tomando en cuenta que debido al estado de salud, la paciente no estaba en aptitud de tomar las decisiones que le beneficiaran, por lo que, sus parientes fueron quienes estuvieron al pendiente de su salud, con la salvedad de que en ocasiones no pudieron acceder a una visita para ello.

Además, para efecto de la reparación del daño, también se considera la circunstancia particular de la quejosa, ya que sus familiares tuvieron la necesidad de promover el juicio de amparo ante la incomunicación y





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-50

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

malos tratos que recibió la paciente por negligencia y descuido del personal tratante.

Incluso, se toma en cuenta que los familiares fueron testigos de los eventos relacionados con la salud de la paciente quejosa y, la forma en que ellos se involucraron para obtener información sobre su estado clínico y el estado de salud propiciado por la inadecuada atención médica.

En esa tesitura el efecto del amparo es para que:

FEELACION
ADO EN MATERIA
PR CIRCUITO
VO LEON

1. El Secretario de Salud de Estado emita una resolución en la que, acorde a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, determine sancionar al [REDACTED], por las conductas consistentes en los actos de incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones destacados por haber actuado con negligencia y descuido en el tratamiento de la paciente quejosa, con lo que transgredió el derecho fundamental de salud, no discriminación y dignidad; y como consecuencia, imponga las sanciones siguientes:

a) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Estatal de Salud en el Estado, que establece una multa equivalente a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica, le imponga a la institución hospitalaria, la sanción económica que le corresponda, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave.

b) Imponga a las autoridades responsables del

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a favor de los familiares de la paciente quejosa, una medida de reparación que brinde una atención psicológica adecuada por personal e instituciones estatales especializadas en la atención de víctimas con motivo de los hechos analizados en el presente asunto; siempre y cuando los integrantes, en lo individual, manifiesten su conformidad para recibir dicha atención, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

c) Determine a cargo de las autoridades responsables del [REDACTED] a favor de los familiares de la paciente, una indemnización compensatoria por daño material ocasionado. Es decir, los gastos relacionados con la asistencia psicológica que pudieron haber recibido o estén recibiendo, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

d) Determine a cargo del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] en favor de los familiares de la quejosa, por el daño moral que sufrió por ser víctima de incomunicación y maltrato que ocasionaron lesiones, una indemnización compensatoria que repare el daño, sufrimiento y las aflicciones que causaron la vulneración a los derechos fundamentales de la paciente, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA A-15
82

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

Americana sobre Derechos Humanos, 1º y 27 de la Ley General de Víctimas.

La cuantía de reparación por el daño material y moral, se deberá establecer en un incidente de ejecución que las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León, deberán abrir y verificar su cumplimiento. En la inteligencia de que el juez de Distrito vigilará su debido cumplimiento.

e) Verificar que las autoridades responsables del [REDACTED] lleven a cabo cursos de capacitación con su personal, para prevenir y eliminar actos como los reclamados, tanto respecto de los pacientes como de sus familiares, en la inteligencia de que las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, deben vigilar, controlar y dar seguimiento para que se cumpla con esta medida. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EDUCACIÓN
EN MATERIA
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

2. Que las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y el hospital particular responsable, en los casos subsecuentes de cuidado médico a los pacientes y atención de sus familiares, como en la especie, ajusten su conducta a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos, tanto en las normas federales como locales y de carácter internacional, para proteger el derecho a la salud y evitar que casos como el que ahora se resuelve se repitan. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

3. Que la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León le imponga al hospital particular la obligación de realizar un acto público en la propia institución de reconocimiento de responsabilidad y para ofrecer una disculpa a los familiares de la quejosa, por los daños irreparables causados con motivo de la incomunicación y maltrato que sufrió la paciente; siempre y cuando los familiares manifiesten estar de acuerdo con ello. Es importante establecer que dicha disculpa pública, debe llevarse a cabo en el propio hospital, dignificando a las personas ofendidas y resaltando los principios de protección que constitucionalmente deben cumplirse conforme a la Ley Estatal de Salud, la disculpa debe hacerse en las instalaciones del nosocomio, porque fue en ese lugar donde se generó la conducta de incomunicación y maltrato, además partiendo de la base de que es un problema de política pública, y constituye obligación hacer conciencia tanto en el personal auxiliar como en los profesionistas de la medicina, de las consecuencias, en ocasiones irreparables, que sufren los pacientes que son víctimas de maltrato a fin de que no se repitan.

Al acto relativo deberá convocarse a los familiares y estar presente las autoridades de la Secretaría de Salud y del [REDACTED] con la precisión de que la convocatoria deberá hacerse con el tiempo suficiente entre la notificación y la ceremonia que, además, será solemne. En la comunicación la autoridad deberá correr traslado del programa y del contenido exacto a los familiares de la paciente a fin de que tengan la certeza del propósito y no puedan ser objeto de una ofensa mayor ni de justificación a lo que ya se determinó. Lo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 100

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 183, 184, 185, 186 y 188 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve:

PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías en relación con los actos reclamados por [REDACTED], a través de su representante, consistentes en privación ilegal de la libertad y tortura física y psicológica.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE AMPARO
CUARTO CIRCUITO
NUEVO LEÓN

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED] a través de su representante, en contra los actos que reclamó consistentes en incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones, para el efecto indicado en el considerando anterior.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, **Rogelio Cepeda Treviño** (presidente y ponente), **Sergio Eduardo Alvarado Puente** y **Sergio Javier Coss Ramos**. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman para constancia los magistrados que intervinieron en el presente asunto, conjuntamente con la secretaria de acuerdos licenciada **Robertha Soraya de la Cruz Vega**.



MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE



ROGELIO CEREDA TREVIÑO

MAGISTRADO



SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL
PRIMER TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
MONTERREY

MAGISTRADO



SERGIO JAVIER COSS RAMOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo en Revisión No. [REDACTED]

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

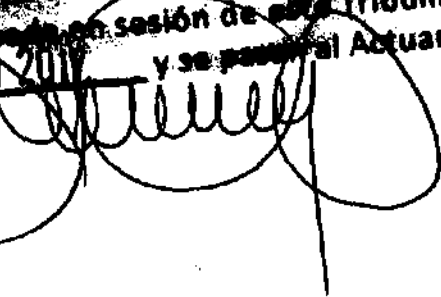

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA

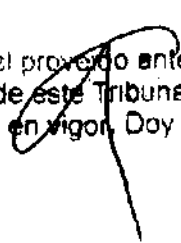
Esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión número [REDACTED] interpuesta por [REDACTED] en representación de su madre [REDACTED] en la cual se modificó la resolución recurrida; se sobreseyó el juicio de garantías y concedió el amparo para los efectos precisados.



DE LA FEDERACION

LEGADO EN MATERIA: Lic. Luis Alberto Mata Balderas
OFICINA DIRECTIVA/AMBI/adr
NUEVO LEON

La secretaria de Acuerdos hace constar que el presente asunto judicial se firmó en 07 SEP 2017 y en esta misma fecha, se recibió en esta Secretaría, los autos y la sentencia anterior, que fue aprobada en sesión de este Tribunal Colegiado en fecha 04 AGO 2017 y se pasó al Actuario para su notificación
Doy Fe. 

El [REDACTED] a las nueve horas, notifiqué el proveído anterior a las partes por medio de lista que fijo en estrados de este Tribunal de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor. Doy Fe. 

PODER
PRIMER
ADMIN

11-17-18

11-17-18
11-17-18
11-17-18
11-17-18

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf
Secuencia: 2304398

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	CELIA LUZ GARZA GARCIA	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GAGC690102MNLRL08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000000009163	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2018T01:20:50Z / 26/11/2018T19:20:50-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	3b d3 d3 da 81 4a 3f b5 2d 28 82 ec be b2 0f 0f 77 f2 c2 95 30 da cd 71 bf 8e 5d 0d a8 a4 b2 c7 a0 28 6b db 1f 2d 23 0d b3 d8 bb be fb 64 24 09 5c c2 b5 ed 0d 65 60 f1 d1 f0 aa 05 90 9a 62 b0 23 19 37 44 cc 97 9f cd 57 10 1a 41 35 05 20 72 3d e9 cd 3c c8 bc 0d 92 de 13 84 a2 1e 19 cc ab ac 36 7c 25 a0 8e e1 a8 d9 0f 39 e5 a1 2f 8d 0f 7f 99 72 bc da 3d cd 3c 7e d9 33 4d 21 3e e4 ba 25 82 a4 a1 47 56 b9 31 ec f3 f7 95 b4 49 c2 3f f5 62 8c 4a 22 79 d2 3d f7 a7 0e 96 77 a1 6f 68 ca 05 4d 3b 28 b8 90 2e 7a 4a bc b6 93 c1 db 5e 9a 6d b9 3f 0f 0f b8 8a dd 4a e7 45 62 79 dc 8c 47 ad 2d 4c cd cf a8 3f 0b 38 5f 05 84 5f 5e 71 82 71 8e 28 2f 68 c7 e7 50 02 24 57 0a 1f 78 40 4b 82 be 67 95 41 47 f6 1a a8 d2 af 82 59 3e dd 92 7e 3e 3e dc 2a 53 ab 5e da e5 32 86 d2 08 6d			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2018T01:19:49Z / 26/11/2018T19:19:49-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000000009163			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	27/11/2018T01:20:50Z / 26/11/2018T19:20:50-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2307285			
	Datos estampillados:	10ED70855CEC518B7CE82F86AF67BABE9B53C3D1			